



cuadernos de COMUNISMO

J. Albarracín: *Entre el gran rechazo y el golpe*. J. Iriarte "Bikila": *Clase obrera, marxismo y cuestión nacional en Euskadi (y II)*. John Ross: *La política británica en la década de los 80*. Joaquín Nieto: *II Congreso de CC.OO.* J. Aparicio Tovar: *El derecho de huelga y el Tribunal Constitucional*. P. Montes: *X Congreso del PCE: la alternativa económica*. Entrevista con E. Pellegrini: *El PCI y su papel en la situación política italiana*. Juan Andrade: *El pablismo y la burocracia ugetista*. Javier Maestro: *Andrade y la revolución española*. Alain Brossat: *Petr Uhl, Rudolf Bahro, el marxismo renace en el Este*. F. Martínez Salcedo: *Anti-Tibaldi*. Eric J. Hobsbawm: *Golpes de Estado*.

5

índice

Entre el gran rechazo y el golpe, <i>por J. Albarracín</i>	pág. 4
Clase obrera, marxismo y cuestión nacional en Euskadi (y II), <i>por J. Iriarte "Bikila"</i>	pág. 8
La política británica en la década de los 80, <i>por John Ross</i>	pág. 11
II Congreso de CCOO, <i>por Joaquín Nieto</i>	pág. 21
El derecho de huelga y el Tribunal Constitucional, <i>por J. Aparicio Tovar</i>	pág. 25
X Congreso del PCE: la alternativa económica, <i>por P. Montes</i>	pág. 28
El PCI y su papel en la situación política italiana, <i>entrevista con E. Pellegrini</i>	pág. 31
El pablismo y la burocracia ugetista, <i>por Juan Andrade</i>	pág. 34
Andrade y la revolución española, <i>por Javier Maestro</i>	pág. 40
Petr Uhl, Rudolf Bahro, el marxismo renace en el Este, <i>por Alain Brossat</i>	pág. 44
Anti-Tibaldi, <i>por F. Martínez Salcedo</i>	pág. 50
Golpes de Estado, <i>por Eric J. Hobsbawm</i>	pág. 53

cuadernos de COMUNISMO

Consejo de Redacción: Mariano Fernández Enguita, Lucio González, Javier Maestro, Agustín Maraver,
Joaquín Nieto, Jaime Pastor, Pau Pons, Ramón Zallo.

Coordinación general: Mariano Fernández Enguita.

Diseño Gráfico: Ignacio Rubio.

Edita: Liga Comunista Revolucionaria/ Apdo. de Correos 50.370 (Cibeles) Madrid-España.

Imprime: Ratlles, Mallorca, 206. Barcelona. DL B.14780.80

150 ptas.

ESTE número se abre con un artículo de J. Albarracín dedicado al análisis de las tendencias de nuestra cambiante situación política. Otro tanto, pero en una perspectiva a más largo plazo, se propone el brillante artículo de John Ross sobre la política británica en la década de los ochenta. Publicamos también la segunda parte de la conferencia de J. Iriarte sobre el tema: clase obrera, marxismo y cuestión nacional en Euskadi, cuya primera parte apareció en el número anterior.

J. Nieto aborda la crítica de las tesis presentadas por la dirección confederal al próximo Congreso de CC.OO. J. Aparicio expone los rasgos fundamentales del marco legal en que se desenvuelve el ejercicio del derecho de huelga en el Estado español a partir de la nueva legislación y de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

La "cuestión eurocomunista" está presente en el artículo de P. Montes, consagrado a la parte económica de las tesis para el X Congreso del PCE, y en una entrevista sobre el PC Italiano a Edgardo Pellegrini.

Incluimos un trabajo hoy casi olvidado de Juan Andrade, *El pablismo y la burocracia ugetista*, editado por primera y última vez en 1935, que conserva sin embargo todo su interés. J. Maestro presenta un breve apunte biográfico de Andrade.

A. Brossat estudia los rasgos más importantes de las dos aportaciones más relevantes llegadas de los países del Este en los últimos tiempos: las de Petr Uhl y Rudolf Bahro. F. Martínez sintetiza y polemiza con un clásico anti-ecologista: Ettore Tibaldi. Reproducimos también un breve capítulo del libro de Eric J. Hobsbawm, *Revolucionarios*, dedicado a los golpes de Estado.

Las ilustraciones contenidas en este número son dibujos del escultor británico Henry Moore.

Juan Andrade: hasta siempre

El pasado 1º de Mayo falleció en Madrid Juan Andrade. Su nombre, junto con el de Andreu Nin —asesinado por el estalinismo en 1937—, personifica el mejor capítulo de la historia del movimiento obrero en España. Iniciado en la vida política con el lerrouxismo de los primeros tiempos, pronto pasó a sumarse a las filas del socialismo para seguir todas sus vicisitudes. Y las siguió, siempre, del lado de la revolución: militante de las radicalizadas Juventudes Socialistas, partidario de primera hora de la Internacional Comunista, fundador del Partido Comunista de España y dirigente del PCE unificado, animador de la Agrupación Comunista madrileña y de la Izquierda Comunista Española y dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Andrade fue, simultáneamente, un dirigente activo, un prolífero publicista, una de las mentes más preclaras y mejor informadas de nuestro movimiento obrero y un hombre siempre dispuesto a la acción.

Tras la guerra hubo de pasar cuarenta años en el exilio, y las nuevas generaciones de refugiados políticos encontraron siempre en él a un hombre ávido de información sobre su país, siempre al día de los acontecimientos, lector infatigable, permanentemente dispuesto al intercambio de opiniones, políticamente activo en los círculos de la emigración antifranquista.

En 1979 regresó a Madrid, escenario de su anterior actividad militante. Su avanzada edad le obligaba ya a una reclusión casi completa, pero su lucidez y su interés perduraron hasta el último momento.

Este 1º de Mayo, fecha simbólica, ha puesto fin a sesenta y seis años de militancia nunca renunciada por la revolución socialista.

El camino de la revolución es largo. A la espera de mejores éxitos, vaya dedicado a su memoria este número de *Comunismo*, revista que recoge el nombre y el ejemplo de la que él mismo dirigiera de 1931 a 1934.

Entre el gran rechazazo y el golpe

“Un golpe de estado es un juego con tres jugadores (omitimos la potencia extranjera dominadora o la corporación que pueden poseer un efectivo derecho de veto o los triunfos de la baraja). Estos son las fuerzas armadas que pueden llevarlo a cabo, los políticos y los burócratas cuya disposición a aceptarlo lo hace viable y las fuerzas políticas, pertenezcan o no a la esfera oficial, que pueden contenerlo o derrotarlo. Porque el éxito de un golpe de estado depende esencialmente de la pasividad del aparato del estado existente y del pueblo. Si uno de ellos, o ambos, resiste, puede aún triunfar, pero no ya como golpe de estado”. (E.J. HOBBSAWN, “Revolucionarios. Ensayos contemporáneos”, Editorial Ariel).

J. Albarracín

DESDE el pasado 23-F vivimos en el Estado español un proceso de “contrarreforma” acelerada. Las ya limitadas conquistas del 15 de junio de 1977 están siendo progresivamente desnaturalizadas; las instituciones democráticas funcionan bajo la presión dominante del Ejército, “partido en la sombra”, y de sus amenazas golpistas; los “poderes fácticos”, que condicionaron los límites de la reforma que dió lugar al régimen del 15-J, juegan ahora un papel más activo y colocan en puestos clave a elementos de la cúspide militar, que si por algo se han destacado, ha sido por sus continuas profesiones de fe antidemocráticas; la “estrategia de la tensión”, en suma, se desarrolla a través de una auténtica escalada, al 23-F le sucede Almería, el 23-M..., y el gobierno la utiliza para restringir más las libertades, con la pasividad, cuando no el apoyo, de los dirigentes de la izquierda parlamentaria.

Se diría que este país se ha metido en una dinámica fatal: o triunfa el golpe o la “contrarreforma”. Pero el movimiento obrero puede y debe cambiar este estado de cosas. A condición de que abandone el fatalismo, porque la libertad todavía no se perdido, de que se organice contra el giro a la derecha del gobierno y contra la escalada golpista, porque de su pasividad depende el triunfo de aquéllos, y de que sea capaz de incidir sobre las distintas estrategias en juego: la de los golpistas, la de la burguesía, la de sus dirigentes mayoritarios y la de ETA.

La estrategia de la tensión

La entrada de Tejero en el Congreso mostró cuán amplio es el grado de autonomía de un ejército plagado de golpistas respecto al régimen del 15-J y a la propia burguesía. Desde entonces, una parte del mismo trabaja en la dinámica de un nuevo golpe, buscando crearse una base social, todavía hoy insuficiente, y convencer a los elementos más “constitucionalistas” de la necesidad de una involución. Las filtraciones del sumario del 23-F, la agitación golpista en la calle, la utilización de los atentados de los Grapo y ETA en los primeros días de mayo y el propio 23-M, son eslabones de una cadena que busca cumplir esos objetivos. Y con un Ejército de esas características y que difícilmente es controlable por nadie, un nuevo intento de golpe puede producirse en cualquier momento.

Sin embargo, los últimos acontecimientos han mostrado la falta de unanimidad de los sectores golpistas. Si el grado de autonomía del Ejército es considerable,

los sucesos de Almería ó el 23-M ponen de manifiesto que existen diferentes alas con distintos proyectos para volver a una dictadura militar, aunque la estrategia de todos ellos sea la misma. Al igual que la “precipitación” de Tejero el 23-F pudo desorganizar una operación de más envergadura pensada para más tarde, los últimos sucesos reflejan que unos sectores se van autonomizando de otros, lo que agrava la estrategia de la tensión, ciertamente, pero plantea problemas a los propios golpistas.

Pero sucesos como Almería ó el 23-M también le plantean problemas al gobierno. Atrapado en la estrategia de la tensión, éste no quiere hacer frente a la dinámica golpista, sino que, por el contrario, la utiliza para restringir aún más las libertades. Al ocultamiento de la verdad sobre el “tejerazo” y a la puesta en libertad de los guardias civiles implicados se les une ahora una verdadera burla en la explicación de los últimos dos fenómenos. Cuando tres trabajadores aparecen quemados y descuartizados a manos de guardias civiles, cuando hasta el “final feliz” del día 23-M todos, e incluso el mismo gobierno, estaban convencidos de que los asaltantes eran miembros de ese cuerpo, cuando primero son “anarquistas, maleantes y chorizos”, después, en el debate en el parlamento, “pagados por la ultraderecha” y, finalmente, “simples atracadores”, la consecuencia no puede ser otra que la total pérdida de credibilidad y el convencimiento de que la política de UCD pasa por exculpar de una agresión a aquellos que realizarán la siguiente.

Especular con todos estos datos sobre si el golpe se producirá o no es perfectamente inútil. El grado de autonomía de que gozan los golpistas puede hacerlo posible mañana, pero las contradicciones internas en su seno podrían hacer que no se produjera nunca. Lo importante no es realizar un pronóstico sobre el golpe, sino no quedarse paralizado por un debate de este tipo, prepararse para evitarla y luchar contra su utilización como un chantaje para restringir las libertades. Porque, si al final el golpe llega, la mejor forma de estar preparados es luchar hoy contra la política del gobierno, su giro derechista y sus intentos de ocultar toda la verdad.

La burguesía y los golpistas

La autonomía del Ejército respecto a la burguesía no es absoluta, pues entre ambos existen relaciones que hacen que la expresión “brazo armado de la clase dominante” sea algo más que una cuestión teórica. La

subordinación de amplios sectores del Ejército al Rey, que no hará nada contra los intereses mayoritarios del gran capital, la existencia de mandos militares convencidos de la inutilidad e inoportunidad de un golpe, los lazos directos a través de la presencia de generales en consejos de administración, etc., matizan el grado de autonomía de los "poderes fácticos". Pero esta autonomía existe y el pacto entre el Rey, el Ejército, la burguesía y los dirigentes mayoritarios de la izquierda, que dió lugar al régimen del 15-J, se ha deteriorado, por lo que nada se puede descartar. La burguesía busca un compromiso con los "poderes fácticos" como medio de reconstruir ese pacto, pero esto no está garantizado, e incluso, un cambio de su actitud favorable a un golpe "blando", que rápidamente se convertiría en duro por la resistencia que aparecería y la represión subsiguiente que generaría, es perfectamente posible.

Pero, por el momento, el sector hegemónico de la burguesía no desea un golpe militar. El proyecto mayoritario pasa por gobernar este país con mecanismos parlamentarios, avanzando en el proceso de "contrarreforma" y construyendo la "gran derecha" como medio de resolver su crisis de dirección política. Es decir, intenta ejercer su dominación con un Estado y una derecha fuertes, pero a través de las instituciones parlamentarias.

La derecha y el gobierno de UCD están utilizando tácticamente el peligro de golpe para avanzar rápidamente en la "contrarreforma". El fantasma de una vuelta a la dictadura y la instrumentación de los atentados de ETA y Grapo a su favor le sirven para agudizar la represión y atacar a las libertades en Euskadi y en el conjunto del Estado (ocupación militar de Euskadi, mando único antiterrorista, nueva sección antiterrorista en la audiencia nacional, detenciones masivas de militantes y electos de HB, prohibición de toda suerte de mítines, manifestaciones, etc. en todo el Estado, debate sobre la pena de muerte, barbarie policial, amenazas de estado de excepción, etc.); legalizar la restricción de las libertades (Ley de defensa de la constitución, Ley de estados de alarma, excepción y sitio, futura reforma de la ley electoral, etc.); imprimir un frenazo autonómico y una ofensiva en toda regla por vaciar del escaso contenido que tenían hasta ahora las instituciones autonómicas (Ley sobre el uso de la bandera y los términos "nación" y "nacionalidad"; Ley de armonización de las autonomías, que lanza las pendientes por el 143 y pretende un desarrollo único para el Título VIII de la constitución; Ley de régimen local y el papel que en ella juegan las diputaciones; ofensiva contra la lengua y la cultura de las nacionalidades, etc.); instrumentar nuevas agresiones a los trabajadores en el terreno de la austeridad (paro —flexibilización de plantillas, contrato a tiempo parcial, productividad—, salarios —acuerdo para limitarlos en 1982 del 9% al 11%—, reestructuraciones —siderurgia naval, decreto de reindustrialización—, privatización parcial de la seguridad social, aceleración de la nuclearización), y, por último, entrar rápidamente en la OTAN. En resumen, una auténtica "contrarreforma" que desnaturaliza las ya limitadas conquistas del 15-J.

La construcción de la "gran derecha" es el otro elemento básico del proyecto mayoritario de la burguesía, y existen múltiples datos que muestran que esto es así. Las declaraciones de Oscar Alzaga pidiendo la formulación de un "gobierno de la gran derecha" sobre la base de un sector de UCD y AP; las continuas afirmaciones de Fraga de que este país necesita una mayoría parlamentaria estable, que coincide con la deseada por Alzaga; las sugerencias al presidente del

Gobierno, en fin, de que utilice los recursos del poder para crear un partido de nuevo cuño que, como hiciera antes Adolfo Suárez, gane las siguientes elecciones, sea manejado con mano de hierro y se constituyan en la única alternativa de la derecha, indican que la burguesía quiere solucionar su crisis de dirección política dentro del marco de una democracia parlamentaria. Por eso hace planes sobre la entrada en la OTAN, las elecciones en Galicia o Andalucía o las elecciones generales.

Pero este proyecto no está exento de dificultades. En primer lugar, UCD acoge en su seno a un ala "socialdemócrata" que se vería excluida de la "gran derecha" si no abandona sus posiciones llamadas de "centro". Algunos de los miembros de este sector pueden terminar en las listas electorales del PSOE y, aunque para una parte de la burguesía, la aparición de un partido de corte "socialdemócrata alemán", que sería en lo que tendería a convertirse éste, no sería mirada con malos ojos —recordemos las declaraciones de A. Garrigues al respecto—, esto sería un obstáculo para construir una base parlamentaria sólida. Además, la "gran derecha" debe reducir la presencia parlamentaria de las burguesías nacionales representadas por PNV y CiU y aminorar sus ya escasas atribuciones en las instituciones autonómicas que regentan. La futura Ley Electoral —que elevará los mínimos necesarios—, la Ley de armonización de las autonomías, el Proyecto de Ley de Régimen Local, etc., son piezas para avanzar en esa dirección. Sin duda esto introducirá contradicciones objetivas, y aunque el PNV y CiU son realistas y comprenden lo delicado de la situación, por lo que no tendrán una expresión política con la misma intensidad, no por ello dejará de ser una fuente de tensiones. Por último, la crisis económica y los diferentes proyectos para salir de ella, seguirán siendo una fuente de conflictos (ver a este respecto artículo aparecido en *Comunismo* n° 2).

A las dificultades internas de la burguesía en este proyecto hay que añadir, no como secundarias, las que se derivarían de sus consecuencias sobre el movimiento obrero. La agudización de la crisis de dirección burguesa no está provocada directamente por éste, sino por el proceso de recomposición interna entre sus filas desde la dimisión de Suárez. La crisis económica, la existencia de un amplio grado de autonomía en el aparato del Estado, el régimen político todavía no consolidado y el problema nacional aún no resuelto, hacen que su fortaleza sólo pueda deberse a nuestra debilidad. Pero el movimiento obrero no está derrotado, tiene un grado de resistencia apreciable y cualquier avance hacia la "gran derecha" puede inducir un proceso de polarización social ya que empujaría a una actividad unitaria a la izquierda y al movimiento obrero, pese a estar debilitado. Esto lo saben los elementos más lúcidos de la clase dominante, que no desean en absoluto que se produzca esa polarización.

Golpismo y terrorismo

Los atentados de los primeros días de mayo e independientemente de cuáles sean los autores de los mismos y cuáles sus intenciones —las acciones de los Grapo han sido siempre extraordinariamente "oportunas" para la burguesía, mientras que las de ETA responden a una motivación muy diferente—, han incidido de forma particularmente negativa, dados sus efectos objetivos y la utilización que de ellos han hecho el gobierno, los golpistas y los dirigentes del PSOE y del PCE.

La responsabilidad de que las libertades se encuentren amenazadas no es de ETA: existe el peligro de golpe porque hay golpistas y porque el gobierno, lejos de combatirlos, restringe las libertades y los encubre. ETA es la referencia inevitable del sector fundamental del nacionalismo radical; más aún, ETA(m), como dirección reconocida de KAS (de la que forman parte, entre otros, HB y LAB) es la dirección de una gran parte de ese movimiento nacionalista. En la base de su existencia está la negativa centralista a satisfacer los derechos nacionales del pueblo de Euskadi, y la estrategia del poder cara a este problema pasa por destruir a ETA y al sector que constituye su base social.

Pero en la situación actual el sistemático enfrentamiento al aparato del estado mediante acciones armadas tiene unos efectos negativos mayores que antes. Probablemente, ETA no desea provocar el golpe, sino demostrar que no es posible una estabilización de Euskadi con soluciones militares y sin negociación. Pero esto es una utopía. Los atentados son utilizados por los golpistas —que disponen así de un elemento de inestimable validez para ganar base social—, sirven para justificar la política de recorte de las libertades por parte del Gobierno —que con el pretexto de ETA restringe manifestaciones, mítines, etc., agudiza la represión, introduce leyes restrictivas de las libertades, etc.— y, sobre todo, confunden y desorientan a los trabajadores que ven en ellos una amenaza real a sus libertades, desviando la atención de su principal enemigo.

Los problemas del movimiento obrero están relacionados con el peligro de golpe y la restricción de las libertades, y las acciones de ETA no tienen nada que ver con esas preocupaciones, sino que, por el contrario, tienden a agravar las causas que las originan. Porque, además si los golpistas y el gobierno utilizan a los "terroristas", los dirigentes del PSOE y el PCE también, y sintonizando con esas preocupaciones del movimiento obrero las canalizan hacia el Estado burgués mediante convenientes campañas de intoxicación. Cuando el peligro es el golpe, estos dirigentes que nunca movilizan, llaman a realizar acciones contra el "terrorismo", piden la colaboración "ciudadana" con las FOP buscando un consenso social con la represión, identifican golpismo con "terrorismo"... y esto tiene sus consecuencias. Esta intoxicación permite la represión de HB, la segunda fuerza electoral de Euskadi, la restricción de las libertades en esta nacionalidad y en el conjunto del Estado, la amenaza de un estado de excepción... e, incluso, la muerte de tres trabajadores que iban a Almería a asistir a una comunión. Porque cuando se llama a denunciar a "terroristas" y a colaborar con la represión, además con una campaña histérica, se está dejando las manos libres a los cuerpos encargados de la misma.

El movimiento obrero debe criticar duramente las acciones de ETA por sus efectos objetivos, pero no debe dejarse arrastrar por campañas de intoxicación y, mucho menos, prestarse a movilizaciones que, independientemente de sus intenciones, significan un apoyo al estado burgués, desvían la atención del verdadero enemigo, y sirven para ilegalizar en los hechos a la segunda fuerza electoral de Euskadi, para reprimir las libertades y avanzar en la "contrarreforma". Después de Almería y el 23-M, que han dejado bien claro a los ojos de los trabajadores quién es el "enemigo público nº uno", un nuevo atentado sería particularmente negativo, porque volvería la "intoxicación" y probablemente se implantaría un estado de excepción. Pero el movimiento obrero, a la

vez que critica a ETA, debe comprender que defender su legalidad es también defender la de HB y que hoy es más necesaria que nunca la defensa de los derechos nacionales y la solidaridad con Euskadi, porque sobre ella se ha desatado la represión. El nacionalismo radical, a su vez, también debe comprender que por el camino de ETA no se va a ninguna parte, salvo hacia el golpe, y, abandonando su concepción de que aquí no ha pasado nada desde la dictadura, debe reorientar su actividad hacia la lucha política, porque si el golpe llega o las libertades retroceden, esto nos afectará a todos.

La izquierda parlamentaria entre el giro a la derecha y el golpe

Diez minutos antes de que Calvo Sotelo compareciera en el pleno del Congreso para "explicar" su versión de los acontecimientos del 23-M, los diputados del PSOE salían de la comisión correspondiente habiendo tragado con que no hubiera una comisión de investigación parlamentaria sobre los sucesos de Almería. Esto resume, por sí solo, la actitud de los dirigentes de este partido.

La posición del PSOE se define por lo que un miembro de su ejecutiva, José María Maravall, llamó "repliegue estratégico": apoyo decidido al proyecto de contrarreforma y a la política de UCD, llamamiento a reforzar al poder ejecutivo y a colaborar con las FOP contra el "terrorismo", aportaciones para "perfeccionar" las leyes de recorte de las libertades y concertación de una brutal pérdida de poder adquisitivo, de medidas que no llevarán sino a aumentos no menos brutales del paro —el compromiso de crear 350.000 puestos de trabajo es el de un gobierno que ha dado sobre Almería y el 23-M la explicación que ha dado—, de las reestructuraciones, etc. Su decisión de colaborar con el gobierno y la patronal le ha llevado a presentar un programa económico que, en líneas generales, es mucho más "avanzado" que el que pretendía la burguesía, dejando, incluso, a los dirigentes de UGT sin las pocas bazas de que disponían para la negociación. Todo ello le convierte en un partido de izquierda con una política de derecha y, con su actual orientación, el calificativo de "reformista" resulta cuando menos exagerado. La búsqueda de una salida electoral, que le permitiría reafirmar su importancia política y para la que podría contar con elementos provenientes del ala socialdemócrata de UCD y del PCE, tropieza con el miedo a una posible victoria —las encuestas dan un crecimiento muy fuerte del voto PSOE, pero otra cosa es lo que ocurriría en unas elecciones— y ha llevado a Felipe González a declarar que sería un error convocar elecciones generales antes de 1983.

La proposición de una tregua hasta 1983 muestra que Carrillo y su aparato no solamente se afianzan en posiciones anteriores, sino que carecen de cualquier tipo de política para salir de la situación actual. La orientación del PCE, basada en lo fundamental en una línea de búsqueda de la concertación, de plegamiento a UCD y de pasividad frente al golpe, los intentos de marginarle de la concertación, la situación interna del partido y la relativa pérdida de capacidad de convocatoria, han creado un malestar en la base que, unido a los debates cara al X Congreso, están provocando un cambio contradictorio en la actitud del aparato. Así, al tiempo que se ofrece la tregua mencionada, se toma un papel activo en las campañas de apoyo a las FOP frente al "terrorismo" o los dirigentes de CC.OO.

firman una fuerte pérdida de poder adquisitivo, se abstienen de la Ley de estados de alarma, excepción y sitio —la de defensa de la constitución contó con su voto favorable—, mantienen una posición relativamente dura respecto a los sucesos de Almería y su investigación —objeto de claras denuncias en Mundo Obrero— y el 23-M, e, incluso, en editoriales de su órgano oficial se llama a la unidad de acción con el PSOE y a la movilización.

La batalla cara al X Congreso se presenta extremadamente complicada para el aparato. El hecho de que las salidas de dirigentes como Tamames o Triana podrían no ser las últimas; la aparición de una corriente en torno al documento "Por un eurocomunismo renovador" y las posiciones eurocomunistas de izquierda que mantienen determinados sectores o la existencia de los llamados "prosoviéticos", obligan al aparato a mantener una postura de firmeza y a realizar un difícil equilibrio entre unas posiciones y otras —que se refleja en el propio proyecto de tesis— intentando salir victorioso del Congreso. Pero en las actuales condiciones, este no puede arreglar nada de la crisis del PCE, porque en su raíz está la incapacidad de la política eurocomunista para sacarle de la misma, sobre todo ante el riesgo de un golpe de estado y el giro a la derecha.

Los dirigentes de la izquierda parlamentaria, por lo tanto, situados entre la concertación del giro a la derecha y la pasividad frente al golpe, han colocado al movimiento obrero en una situación difícil. Este se ha imbuido de una perniciosa fatalidad, se muestra pasivo y desorientado. Debe salir de esta situación, pues esta es la causa última del avance de los golpistas y la derecha.

Aún estamos a tiempo

El movimiento obrero está débil, pero no derrotado. Todavía cuenta con una importante capacidad de resistencia y a pesar del fatalismo y del miedo, los últimos acontecimientos y la política seguida por sus direcciones le están haciendo reflexionar. Ya no es solo que el gobierno haya perdido toda credibilidad a sus ojos, sino que, en algún sentido, también lo han hecho sus direcciones mayoritarias en lo que se refiere a resolver la actual crisis y evitar la pérdida de libertades. Pero para la mayor parte del movimiento obrero esto solo se traduce en fatalismo.

Sin embargo, una parte de la vanguardia ha comprendido la necesidad de cambiar la orientación actual y luchar por ello. Por un lado, en CCOO está comenzando a aparecer una oposición sindical que ya no solamente está formada por la izquierda revolucionaria, sino, incluso, por amplias franjas de militantes del PCE y del PSUC, que están descontentos con la línea actual del sindicato y de su propio partido. Y esta oposición sindical ya empieza a tener expresión concreta: en Asturias, en el congreso de la Federación del Metal, en Catalunya, y en otros lugares.

Por otro lado, entre sectores profesionales, intelectuales, etc., se está dando un proceso de reflexión que, en algún sentido, es diferente al que se dió en épocas anteriores: comienzan a plantearse la necesidad de organizarse para recomponer el movimiento de masas —en una frase feliz, "cómo empujar el tranvía" que han detenido los dirigentes del PSOE y el PCE—. Estos sectores consideran a los partidos de la izquierda parlamentaria como una "izquierda inútil que siembra el miedo y la impotencia", pero a sus ojos la izquierda revolucionaria es aún débil. Sin embargo buscan mar-

cos unitarios de actuación con ella —plataformas, comités, etc.— y esto es lo importante, porque orientados por la defensa de las libertades o contra la entrada en la OTAN, pueden ser un factor de primer orden para cambiar la situación.

La lucha que Andalucía está llevando contra el paro es otro factor a tener en cuenta. Las primeras movilizaciones por el empleo comunitario están dando paso a la reivindicación de la Reforma Agraria como único medio de solucionar sus problemas. Las movilizaciones pacíficas de Marinaleda se generalizan y radicalizan. Los jornaleros se organizan, y a la lucha de los militantes del SOC se incorporan los de CC.OO. del campo... En Andalucía se ha iniciado un proceso de extraordinaria importancia que puede ser fundamental para la recomposición del movimiento de masas.

Pero para combatir contra el "gran derecho" y el peligro del golpe es preciso arrastrar a la lucha al conjunto del movimiento obrero. Por eso, salir de la crisis actual plantea poner en primer plano la unidad de la izquierda, porque solo con la lucha unitaria de los partidos de izquierda y de los sindicatos será posible acabar con el fatalismo que hoy impera en el movimiento de masas, incorporar cada vez a más amplias franjas de trabajadores a la lucha, y vencer al golpismo y al gobierno de la derecha que le encubre y restringe nuestras libertades.

Pero es preciso, además, caminar en la dirección correcta y no buscando falsas salidas. No se lucha contra el giro derechista del gobierno colaborando con él y concertando la pérdida de las libertades o del poder adquisitivo de los salarios. No se lucha contra el golpismo llamando a reforzar los aparatos represivos o buscando un consenso social con ellos, porque es ahí donde está el nido de golpistas. No se avanza hacia una salida proponiendo gobiernos de cooperación, porque ésta es una salida falsa. La derecha no admitirá la entrada de la izquierda en un gobierno, salvo que sea para utilizarla como un rehén para la contrarreforma.

Caminar en la dirección correcta es confiar en la fuerza de los trabajadores para combatir el gran derecho y el golpe. Y si el movimiento obrero está débil, ninguna falsa salida le hará fuerte. Solamente acumulando las fuerzas necesarias, reconstruyendo la unidad de los trabajadores, combatiendo contra la derecha y su gobierno y, en definitiva, creando las bases para una salida favorable a la izquierda, se puede vencer.

Pero hoy, cuando las libertades están gravemente amenazadas, los dirigentes de la izquierda parlamentaria siguen empeñados en colaborar con aquéllos que pueden acabar con ellas: la derecha y el gobierno. Y ante el peligro de golpe muestran la más absoluta pasividad. Sin embargo, aún estamos a tiempo. Los militantes del PSOE y del PCE y de los sindicatos, deben esforzarse por lograr un cambio de rumbo, organizando la defensa de las libertades de la forma más unitaria posible, combatiendo contra la entrada en la OTAN, acabando con la concertación e iniciando la resistencia frente a la nueva ofensiva de la austeridad; así será posible poner al movimiento obrero en la dirección de vencer a la contrarreforma y a la gran derecha. En esta batalla, la LCR estará siempre presente, y no estamos solos, contamos con el resto de la izquierda revolucionaria y con los miles de luchadores que, venciendo el fatalismo, han comprendido que por el camino actual no se va a ninguna parte si no es al retroceso a los negros tiempos de la dictadura. ■

Clase obrera, marxismo y cuestión nacional en Euskadi (y II)

(El marco estratégico y el ámbito de partido)

Esta es la transcripción de la segunda parte de una conferencia oral del autor, dentro del ciclo sobre Marxismo y cuestión nacional en Euskadi organizado por el I.P.E.S. Como con la primera parte, publicada en el número anterior, no hemos modificado la redacción, aunque hemos suprimido algunos pasajes por razones de espacio. Como apéndice se añade un breve artículo publicado por J. Iriarte en Zutik!, después de la muerte de Ryan y el 23-F.

José Iriarte "Bikila"

ESTE problema, que ha generado innumerables debates, que ha tenido y tiene una trascendencia clave a la hora de la definición de los partidos en Euskadi, no ha tenido su correspondiente elaboración teórica. Apuntes, ideas, opiniones y mucho axioma de principio no sometido a debate: eso es lo que tenemos delante. El propio Argala, al tener que argumentar su base principista, sólo da dos argumentos para sustentarla: 1: "Las luchas obreras nacidas en Euskadi han tenido un límite de generalización en la frontera geográfica de la nación vasca. La lucha política ha tenido un carácter diferenciado del resto de los Estados (?) vecinos". 2: "Los partidos obreros españoles han dejado de ser el enemigo principal del Estado. Este papel quedaba reservado a las fuerzas patriotas obreras vascas y en especial a ETA".

La primera tesis no se mantiene por ningún lado. Es cierto que muchas luchas: por la amnistía, contra la represión, etc., se han circunscrito al marco de Euskadi o han tenido escaso seguimiento, pero ello es debido a la combinación de varios factores: a la posición de los partidos reformistas que impiden toda extensión de las luchas, y más concretamente cuando se trata de un tema que ellos proscriben, y al desnivel y diferenciación de conciencia política y de particularismo nacional. En ningún momento menospreciaremos la importancia que tiene el hecho nacional, sobre todo en el terreno de la sensibilidad política que relaciona la represión con un problema de soberanía en materia de orden público, etc. (¡Que se vayan!). Pero este problema no se agota ahí, ese es un aspecto, pero no es el único a tener en cuenta; hay que recordar que luchas cuya raíz es nacional han tenido un fuerte eco en el resto del Estado. El mismo proceso de Burgos (ese hecho histórico) tuvo su prólogo precisamente en las jornadas de Catalunya el 3 de Diciembre del mismo año (y en ello jugó un papel importante el PCE); en el propio Madrid, etc., ha habido respuestas de solidaridad con Euskadi. Además, ETA misma ha tenido que vencer su inicial resistencia (a que tan aferrado era Txikia) ha salir de Euskadi e intervenir en el Estado español: Carrero, etc. (por citar sólo lo realizado bajo la dictadura, para no meternos en terrenos actuales). Pero además, están las propias luchas obreras: empresas de una misma base financiera a nivel de Estado (Laminaciones, A.H.V. con A.H. de Sagunto, etc.), problemas relacionados con la legislación del Estado que ata por igual a todos los trabajadores y que los actuales marcos autonómicos no varían sustancialmente. No se

puede confundir una situación de desnivel de radicalización, mezclada con las especificidades de la lucha nacional, con lo que puede y debe ser una tendencia lógica y deseable de lucha conjunta contra el capital y su Estado al nivel en que éste se organiza: el Estado español. El segundo problema es más triste. Constatar la ausencia de un auténtico partido obrero revolucionario con verdadera implantación de masas a nivel de Estado, en todo caso nos debe de llevar a trabajar con más ahínco en su construcción, no a replegarnos a nivel de la nacionalidad porque "aquí los reformistas no son hegemónicos, o por lo menos, son contestados". Respecto al PCE y PSOE, doy toda la razón a Argala cuando critica a estos partidos por su chovinismo "españolista" (aunque este término se encuentra muy tergiversado), porque además de su adaptación a la burguesía centralista ante el problema del Estado (no reconocen el derecho de autodeterminación para hoy), asumen prejuicios patrioterros de gran nación que envenenan a la clase trabajadora, y la llenan de recelos contra las nacionalidades oprimidas en lucha, contribuyendo a la división de la clase obrera e impidiendo que una buena parte de ésta asuma y entienda el problema vasco. Pero esto ocurre también con su "internacionalismo". Un partido adaptado a la burguesía de la nacionalidad opresora, generalmente es un partido nacionalista en su política con otros Estados (basta citar la política europea del PCE, su postura ante los conflictos interburgueses, en la Comunidad Europea, etc.). Lo mismo ocurre con las reivindicaciones estrictamente de clase; cuando un demagogo del estilo Txiki Benegas afirma que "le preocupan más los 100.000 hombres y mujeres que no encuentran trabajo en nuestro pueblo, que en este momento Navarra...", en la práctica ni responde al problema de Navarra, ni al de los parados, porque en ambos casos se tendría que enfrentar a la burguesía, y eso está fuera de sus planes.

Hay otros aspectos a remarcar, cuando se pretende cargar con el sambenito de partidos "españoles" a los partidos obreros revolucionarios. En principio, LKI se reafirma en la tradición de la Internacional, de evitar toda formulación que pueda tener una connotación ideológica nacionalista de gran potencia. No por casualidad nuestras siglas evitan toda referencia estatal. Nuestro carácter de partido de clase en un Estado multinacional se fundamenta en la necesidad de unir y agrupar a lo mejor de la vanguardia obrera en ese ámbito; ello presupone la unión organizada de revolucionarios vascos, catalanes, gallegos, castellanos. Hoy a los

únicos que les duele su condición de "español" es a Fraga y Suárez, como representantes de esa burguesía que se aferra a mantener el Estado opresor, y a los reformistas como F. González que encuentran su razón de ser al amparo de una política de mantenimiento del actual Estado. La entelequia "España" no puede ser hoy adoptada por ningún partido revolucionario, ni siquiera por los miembros de la nacionalidad castellana. ¿Estos problemas justifican la defensa de la independencia y sobre todo de partidos de ámbito exclusivamente vasco? Creemos que no. Sobre todo porque, con el proyecto de independencia, ninguna de las opciones que la defienden aclaran sobre el proyecto de socialismo que pretenden construir, cómo lo mantendrán, qué relaciones piensan mantener con el resto de los Estados, etc. En este debate hay una solapada huída hacia todos los caminos menos hacia el que todo revolucionario debe de tener como norte estratégico: el del ámbito en el que se planteará la toma del poder.

De todas formas, para curarnos de espanto, no tenemos inconveniente en reconocer que un partido revolucionario podría exigir la independencia de Euskadi hoy y, sin embargo, mantener la tesis de la inexistencia de un marco autónomo de la lucha de clases en Euskadi, y por ello la necesidad que el ámbito nacional sea el marco de construcción de los partidos y organizaciones obreras (lo cual no supone que ello nos lleve a despreciar esas organizaciones y a no trabajar en su seno como organismos válidos de los trabajadores, que surgen por la complejidad del problema nacional, como el caso del sindicato LAB). Defenderíamos la independencia y la necesidad de organizarnos a nivel de Estado. Con ello seríamos fieles a la tradición bolchevique, de no confundir la estrategia de toma del poder de la clase obrera con la solución del problema nacional; aunque es evidente que ambas están interrelacionadas en gran medida. Para nosotros (en palabras de Trotsky), "una organización revolucionaria no es el prototipo del Estado futuro, sino el instrumento para su creación, y todo instrumento debe de ser adecuado para fabricar el producto, pero no debe de asimilarse a él. Sólo una organización centralizada permite el triunfo revolucionario, aunque se luche contra la centralización opresiva de las naciones". Los bolcheviques defendieron la independencia de Finlandia, fueron los que la concedieron una vez en el poder, sin embargo los bolcheviques finlandeses habían pertenecido a un mismo partido hasta la consecución de la independencia. La defensa diferenciada (aunque guiada por un mismo principio de internacionalismo y de liberación de las naciones) sobre Polonia, Ucrania, y otras nacionalidades, manteniendo la necesidad de independencia de unas, de federación de otras, o de simple autonomía incluso de algunas que ni siquiera la pedían por su atraso cultural, desde un mismo partido, sólo es entendible bajo el prisma de la necesidad de unificar una estrategia común a la clase obrera de esas nacionalidades contra el capital y su Estado, mientras éste sea único y centralizado.

La diferencia de nuestro pensamiento con el que expresa Argala (en el mismo escrito anteriormente citado) es evidente cuando afirma, "nosotros renunciamos a querer determinar cómo se debe de presentar el proceso revolucionario español"... "aunque muchos de nosotros estaríamos dispuestos a ayudarles en esa tarea". No es cuestión de buena voluntad, de ayuda más o menos desinteresada (aunque ello refleja, como en este caso, una gran honradez subjetiva), sino de estar insertos en un espacio estratégico común, de necesitar de una estrategia conjunta y unificada. Esa es la dife-

rencia.

Las bases materiales de una estrategia residen sobre todo en el problema del ámbito de la toma de poder (en este terreno, los anarcos-independentistas (8) —no va en sentido peyorativo— pueden cargarse la necesidad del Estado, y hacer mil virguerías sobre la independencia, pero ninguna estrategia sería de poder obrero y de resolución del problema nacional —Estado separado o libremente federado— puede eludir este problema) y en consecuencia la estrategia que de ello se deriva.

Los argumentos dados por Ortzi son estrictamente de orden subjetivo (que con ser de gran importancia a la hora de elaborar política no son determinantes a este nivel: pueden serlo para el problema de la independencia; es decir, en una opción para solucionar el problema vasco, pero no para el ámbito de la toma de poder); mal interpretando a Gramsci, hay quién objeta que al tener las ideologías en Euskadi una proyección diferente al resto del Estado, se prueba de esa forma la existencia de un marco estratégico vasco. Esta tesis confunde el complejo problema de la lucha ideológica, y de expresión política, diferenciado producto de intereses sociales específicos, que dan a una nacionalidad oprimida un cariz político propio, con lo que es el terreno de la confrontación fundamental entre las clases, sobre todo en el terreno de la toma del poder. Los ejemplos de Asturias del 34, de los propios límites/ de las H.G. de Euskadi, son lo suficientemente significativos. En la batalla ideológica, la clase obrera de Euskadi tiene que utilizar argumentos y objetivos particulares. Los revolucionarios no topamos con problemas particulares cuando tenemos que denunciar y luchar contra la burguesía vasquista o con la centralista. A nivel de Estado pocos se tragan el cuento de la "reconstrucción nacional" en Euskadi; dicho por el PNV y coloreado de rojo, blanco y verde, requiere una politización muy particular, pero las GEO, las UAR, no se detendrán en Miranda (aunque haya policía autonómica) si aquí se dispara un proceso de radicalización, ni los planes de la burguesía se detendrán en este límite, aunque el PNV asuma competencias y poder ejecutivo a nivel de Euskadi. Y detrás de todo ello está el ejército "garante de la Constitución" y de la "sagrada unidad de la patria" y el orden dentro de ella.

En Euskadi podrán dispararse procesos de radicalización (si bien ya hemos visto que no escapan en última instancia a la situación general del movimiento a nivel de Estado, aunque mantengan niveles superiores), que nosotros defendemos y dinamizaremos en su justa medida; pero aún en esa situación harán falta (quizás más que nunca), revolucionarios a nivel de Estado que, organizados y estructurados en un mismo partido con los comunistas vascos, sepan llevar adelante las tareas de solidaridad con Euskadi y defender el derecho a la autodeterminación y por lo tanto a la independencia. Y esto es un problema también nuestro, de los comunistas vascos.

Apéndice (marzo de 1981)

A raíz de la huelga general que se produjo tras la muerte de Ryan, sectores del movimiento que tradicionalmente habían apoyado la actividad de ETA (m) pensaron —y en algunos casos dijeron— que dicha muerte era un grave error político. En ZUTIK!, en diversos artículos públicos, en los debates que se dieron dentro del movimiento, LKI insistió en dos ideas: La

primera, que *no se trataba de un error aislado*, que no era posible explicar aquella movilización general a partir de un sólo error, sino de una línea de actuación —la lucha armada de ETA(m)— y que era esa línea la que había permitido que la conciencia popular en torno al tema de la violencia y la represión se hubiera modificado negativamente. La segunda, que *era imposible combatir el pacifismo reaccionario del PNV ni las actitudes colaboracionistas de las direcciones del PSE y EPK desde los presupuestos políticos de apoyo o condescendencia con la actividad de ETA(m)* y cada vez iba a resultar más difícil incluso lograr la resistencia unitaria frente a la represión y el centralismo desde dichos presupuestos.

Tras la intentona golpista y la posterior continuidad de la actividad etarra contra mandos del Ejército, esas conclusiones cobran una actualidad mucho mayor.

La orientación de la actividad de ETA ha estado apoyada en el siguiente análisis: la burguesía centralista está firmemente montada en el camino de la Reforma, sin posible vuelta atrás. Euskadi tiene tal nivel de contradicciones que hacen inviable la aplicación de esa Reforma de manera estable. La actividad militar crea en este marco tal estado de tensión que la burguesía centralista no va a tener a medio plazo otra solución que negociar las "alternativas KAS". En consecuencia la lucha armada es la que mejor favorece una ruptura del marco de la Reforma política y la conquista de la soberanía nacional, la amnistía, la retirada de las FOP, etc.

Cuando se produjo el golpe, ETA(m) lo calificó de "autogolpe", de maniobra para "consolidar la Reforma". Para cualquier obrero, para cualquier activista sea de la corriente que sea, el triunfo o no del golpe es una diferencia *cualitativa*: sindicatos cerrados, partidos ilegalizados, medios de comunicación clausurados, represión en masa. Pero reconocerlo así y, sobre todo, reconocerlo junto con el hecho de la escasa resistencia de masas al golpe y de la contradictoria actitud de KAS y HB ante el mismo, significaría *cuestionar toda la línea de actuación de ETA*. La lucha armada se habría mostrado como un instrumento totalmente inútil para organizar la actividad popular frente a una amenaza de vuelta a la dictadura. Era más fácil echarse la manta a la cabeza, hacer bellas declaraciones sobre el golpe-que-desenmascara-a-estos-y-a-los-otros... y seguir como antes, con la misma línea.

Pero la realidad es bastante más tozuda que los análisis y la línea de ETA(m). *La lucha armada no está favoreciendo la ruptura con el marco de la Reforma*, al contrario la lucha armada lejos de fortalecer la fuerza organizada de los trabajadores y el pueblo, la debilita, contribuye a dar excusas a los reformistas para que siembren la confusión y a la desmovilización. La lucha armada, en ese contexto de debilidad obrera y popular, se termina convirtiendo en el mejor pretexto para que

golpistas como Tejero y Milans puedan lograr un apoyo nada desdeñable. Y para que Calvo Sotelo emprenda la "reforma de la Reforma" más hacia la derecha todavía.

Y tras el 23-F ETA(m) sigue su línea y, además, directamente contra el Ejército. Pues hay que decirlo claramente: después del día 23 lo más importante era lograr que se abriera en el movimiento una creciente movilización y organización para depurar a los golpistas implicados: esa actividad era la única que podía superar el estado de impotencia del movimiento, de miedo al golpismo; *la actividad de ETA(m) empuja al movimiento en un sentido diametralmente opuesto a esta tarea*: hace crecer su miedo y su impotencia, favorece más aún el apoyo al golpismo en los estamentos del Ejército, impide que pueda organizarse la resistencia. Por ello mismo, favorece las maniobras de la reacción, no los objetivos de la libertad, no los de la soberanía de Euskadi. Puesto que reconocer que su actividad no se corresponde ni al nivel de organización ni a las formas de lucha del movimiento, ni tampoco al conjunto de la situación política supondría negarse a sí misma, *ETA(m) pone la necesidad de sí misma por encima de cualquier necesidad de la organización del movimiento*. Sus dos últimos atentados no son sino una "huida hacia adelante" sectaria y dogmática de quien no quiere reconocer que la noche del día 23 fue algo cualitativamente diferente a una maniobra de la Reforma. Pero ese dogmatismo, insistimos, no hace sino reforzar una realidad: que la continuidad de las acciones armadas aleja más y más la hora de la libertad de los presos, de la integración de Nafarroa en Euskadi, de la conquista de nuevas libertades.

E incluso más. La actividad de ETA(m) hoy está abonando el terreno para que la ley, la policía y hasta el Ejército repriman muy ampliamente a HB, cierran EGIN, etc. etc. Y, *al mismo tiempo*, esa actividad de ETA crea *dificultades crecientes para que estos hechos encuentren en el pueblo vasco —por no hablar ya de otros pueblos— una solidaridad efectiva*.

Esta es la realidad, aunque ETA(m) se niegue a aceptarla porque ello equivaldría a declarar su papel negativo actual para la conquista de la libertad en Euskadi.

LKI ha defendido y va a seguir haciéndolo, la libertad de los presos. Para nosotros es un problema de principio; LKI va a oponerse, como lo ha hecho siempre, a la represión contra los militantes de ETA(m). Pero también en este terreno estamos convencidos de que *esa defensa es más efectiva a condición de hacerla desde presupuestos políticos diferentes al apoyo a la actividad de ETA(m)*. Porque, para ser efectiva, necesita ser amplia y unitaria, basada en la movilización y la organización del movimiento... en esos factores que la actividad de ETA contribuye a obstruir. ■

La política británica en la década de los 80

La política británica está entrando en su periodo de más intenso cambio desde la Primera Guerra Mundial. Los cambios en cuestión son incluso más fundamentales que los de 1945, que dieron paso al "Estado de bienestar".

Hay dos procesos inmediatos y chocantes: la escisión del partido laborista y el proceso que romperá al partido Tory en su forma actual. Otros, como la representación proporcional, los nacionalismos galés y escocés o la lucha renovada en torno a la CEE y las relaciones de Gran Bretaña con el mundo, son más sutiles, pero igualmente con implicaciones de gran alcance.

La izquierda británica está sumamente inpreparada para estos procesos. En este artículo, basado en una conferencia dada en julio de 1980, John Ross aborda las características que se están dibujando de la crisis política y las sitúa en un contexto histórico más amplio.

John Ross

UN solo hecho aporta la clave para entender el carácter específico de la sociedad británica: *Gran Bretaña no es simplemente una sociedad capitalista cualquiera en general. Durante dos siglos ha sido la mayor de las potencias capitalistas y el primer Estado imperialista del mundo.*

Contrariamente al "modo convencional" del movimiento obrero, es su burocracia más bien que el partido Tory quien constituye el principal y último bastión del imperialismo y de la clase dominante británicos. Sin la burocracia laborista, no podrían sobrevivir a una crisis de envergadura. Con posterioridad veremos algunas de las implicaciones de esto. Situemos primero, sin embargo, el partido Tory en el lugar y la perspectiva que le corresponden.

El partido Tory

El partido Tory es el partido político que tiene una existencia más antigua y continuada en el mundo. Sus orígenes se remontan directamente al periodo de 1685-88 y pueden remitirse indirectamente hasta 1640. Nunca fue el principal partido de la burguesía industrial inglesa; ese papel fue desempeñado por un sector de los *Whigs* y, posterior y más centralmente, por el Partido Liberal. El partido Tory representaba a las fuerzas más atrasadas, arcaicas y reaccionarias en el país económico y socialmente más avanzado del mundo.

¿Cómo llegó este dinosaurio político a convertirse en el principal partido de la clase dominante? Con anterioridad a 1848, el partido Tory se encontraba escindido en torno al rechazo de las leyes cerealeras, reducido a la miseria en el parlamento y quizá históricamente amenazado de desaparición. El Partido Liberal parecía ser un candidato mucho más adecuado a erigirse como partido hegemónico de la clase dominante.

Lo que aseguró la supremacía de los Tories dentro de la clase dominante fue el hecho de que el capitalismo británico había creado por sí mismo un monstruo: una clase obrera que, en la década de 1840, con el Cartismo, estaba comenzando a tener una vida política propia. Para enfrentarse a esta amenaza social a su poder, la burguesía se puso a construir una coalición de todas las fuerzas posibles de la sociedad, sin importarles cuán arcaicas, decrepitas o "medievales". El centro estable, fijo y extremadamente reaccionario de esta coalición fue aportado por los sectores oscurantis-

tas de la clase dominante —lo más atrasado de la aristocracia, los terratenientes y sus aliados, que constituyeron el núcleo histórico del Partido Tory. El moderno Partido Tory fue construido a través de un proceso de adhesión sucesivo de capas a este núcleo inicial: las fuerzas protestantes reaccionarias del norte de Irlanda, la pequeña burguesía, la jerarquía militar y, posteriormente, con el genio político de Disraeli seguido por la habilidad organizativa de Joseph Chamberlain, un sector significativo de la clase obrera —en el siglo XX, alrededor de un tercio en términos electorales. La fuerza económicamente dominante del partido era el capital bancario.

El problema para la clase dominante consistía en que, mientras el Partido Tory fue capaz de mantener la sujeción política del imperialismo británico sobre la sociedad, lo hizo a costa de grandes daños para la economía doméstica. La específica orientación de la clase dominante encarnada por el partido, consistente en las operaciones bancarias internacionales, elevadas tasas de cambio e, internamente, concesiones a la clase obrera para mantener su firme base política, constituye una de las raíces históricas principales de la actual crisis económica del imperialismo británico.

El movimiento obrero

En el periodo de su formación, el movimiento obrero británico fue tan avanzado como cualquier otro en el mundo. De hecho, durante bastante tiempo fue el *único* movimiento obrero existente a escala de masas. El cartismo —la expresión organizada básica del movimiento obrero de mediados de la década de 1830 en adelante— no tuvo, en su tiempo, nada que envidiar a otros movimientos en cuanto a su politización, su internacionalismo, el desarrollo de corrientes revolucionarias y la amplitud de su base como movimiento clasista.

No obstante, con el desarrollo del imperialismo a partir de mediados del siglo XIX, la clase dominante logró un margen de maniobra que le permitió pagar y cambiar el carácter de clase del movimiento obrero. Por una extraña dialéctica, el mismo proceso imperialista creó las condiciones para que el movimiento obrero británico se convirtiese en el más fuerte organizativamente y, al mismo tiempo, en uno de los más débiles políticamente de toda Europa. Sobre la base de su

vasta expansión, el capitalismo británico poseía el *potencial* para asumir concesiones sustanciales a la clase obrera. Por supuesto, la clase capitalista no iba a dar nada voluntariamente —ninguna clase dominante lo hace jamás—, pero podía permitirse el lujo de permitir a la clase obrera *ganar* importantes concesiones.

La clase obrera construyó organizaciones colosales para luchar por tales concesiones. Hoy vemos los resultados: más de doce millones de miembros organizados en los sindicatos; el movimiento sindical más poderoso de Europa en el país más proletariado y con la relación de fuerzas más favorable.

Pero, al mismo tiempo, su capacidad para garantizar concesiones permitió a la burguesía mantener la dominación *política* sobre la clase obrera. Nunca tuvo que comprometerse en un enfrentamiento. No existe equivalente británico de la Comuna de París, de las revoluciones alemanas de 1918-19 ó 1923, húngara de 1919, ni de la guerra civil española, por no hablar de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. La huelga general de 1926 —el equivalente británico más próximo— fue cualquier cosa menos una lucha abierta por el poder.

Debido a que la clase obrera nunca tuvo que afrontar semejante confrontación con la burguesía, nunca se sufrió la presión de tener que organizar a toda capa oprimida de la sociedad contra la clase dominante. Pudo salir adelante con una política internacionalmente chauvinista, sin apoyar las reivindicaciones de la lucha en Irlanda, etc. Sobre esta base se consolidó la dominación política de la burguesía.

Juzgado históricamente, el problema para la clase dominante consiste en que la base material del atraso del movimiento obrero está desapareciendo. Huelga decir que la clase obrera británica no es genéticamente atrasada ni estúpida. No es ni mejor ni peor que cualquier otro movimiento clasista a este respecto. Su atraso histórico deriva de la fuerza material del imperialismo británico, su clase dominante, y de las poderosas burocracias creadas en sus filas. El declive material del capitalismo británico crea las condiciones para una transformación de esta conciencia, aunque, como siempre, la conciencia vaya por detrás de los cambios de la realidad objetiva.

La crisis del imperialismo británico crea, por consiguiente, la siguiente carrera, que resume los problemas de la lucha de clases británica en su forma política más general: ¿Logrará la clase dominante utilizar su fuerza política para aplastar la fuerza organizativa del movimiento obrero antes de que la clase obrera, para defender sus conquistas sociales y organizativas, se vea obligada a romper con su actual conciencia política?

La tarea de los revolucionarios es luchar en el seno de la clase obrera por una ruptura con su actual conciencia política y por el desarrollo de un movimiento adecuado a las necesidades de la situación objetiva. No se trata de un pequeño problema, y la solución no puede extraerse de la historia de la clase obrera tal como ha existido en Gran Bretaña a lo largo de los 130 últimos años y como ha sido ampliamente establecida, es decir, lucha económicas, mayores luchas económicas, un gran combate contra el gobierno Tory, etc. Esta no es una estrategia adecuada para el socialismo. Naturalmente, estos elementos tienen que formar parte de una estrategia revolucionaria, pero en modo alguno son su totalidad o pueden constituir su marco. *La clase obrera tendrá que enfrentar y vencer una crisis del imperialismo británico mucho más profunda y complicada que cualquiera de las que ha afrontado en el último siglo y medio.*

La crisis política

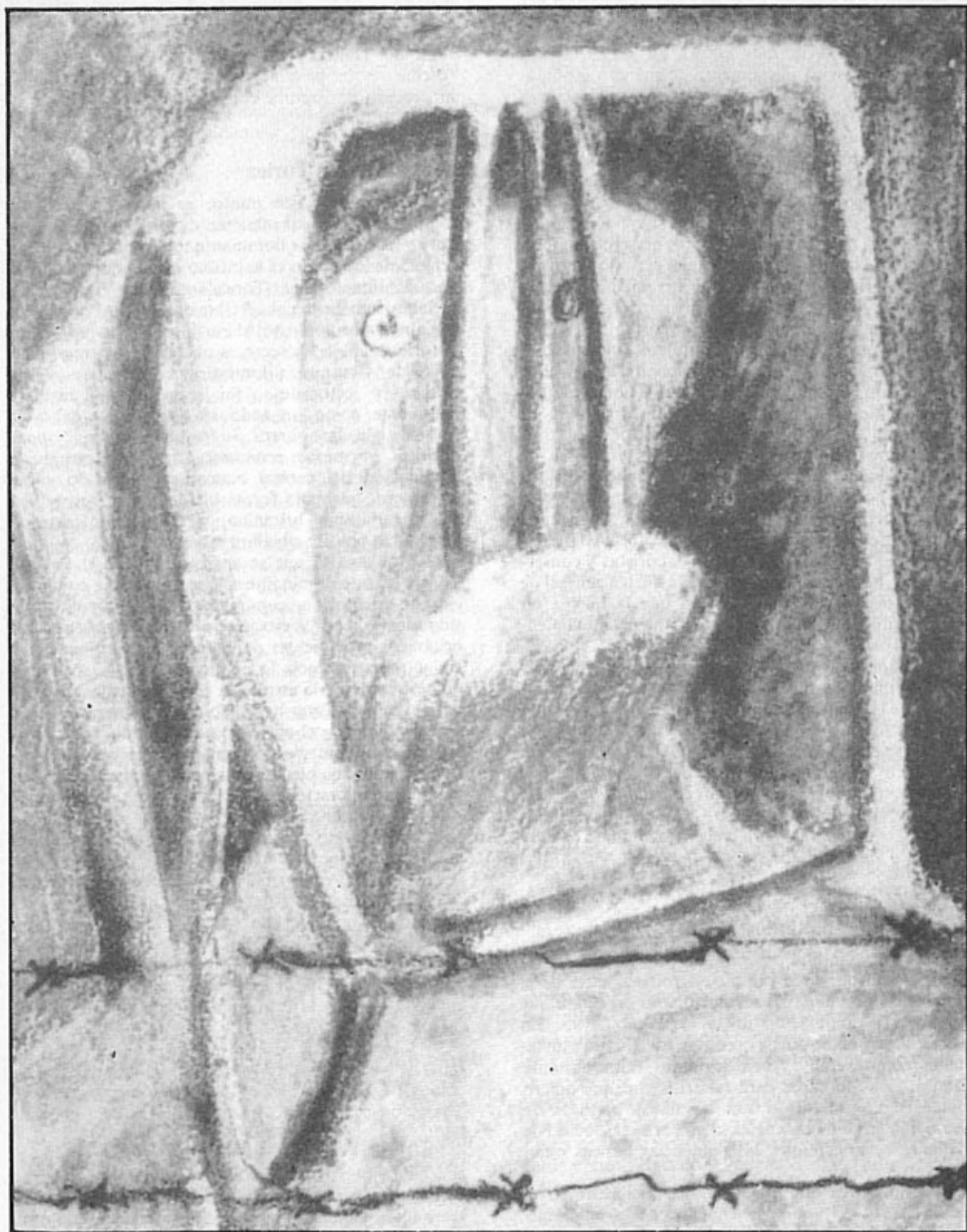
Enfocar la naturaleza de una crisis realmente seria nos permite distinguir las características subyacentes de una situación tal en comparación con los periodos de estancamiento. Por tanto, es instructivo, para lograr una indicación de lo que precisamente va a ocurrir y, de hecho, está ya ocurriendo, volver la mirada hacia la crisis más aguda sufrida por el imperialismo británico en su historia, que se desarrolló en el periodo conducente a la Primera Guerra Mundial, durante y después de ella.

Lo que caracterizó a este periodo no fue simplemente que hubiera luchas de envergadura sobre cuestiones sindicales y económicas —aunque éstas, de hecho, tuvieron lugar a escala masiva. Fue el desarrollo de una crisis social, económica y política *general* de dimensión no meramente nacional sino internacional.

Primero fue el desarrollo de la lucha, y posteriormente guerra, de liberación nacional sostenida por el pueblo irlandés contra el imperialismo británico —la primera guerra anticolonial contra el estado británico que obtenía éxito desde la guerra de independencia americana. En segundo lugar fue el ascenso del movimiento sobre un problema decisivo de la opresión de la mujer en aquel tiempo: la lucha sufragista por el derecho al voto. Una tercera dimensión fue el impacto de la guerra misma, tanto los efectos directos de la matanza como las repercusiones que atravesaron la sociedad británica. En cuarto lugar, hubo grandes cambios en el sistema político de partidos, con la escisión y declive de los liberales y el ascenso del Partido Laborista. En quinto lugar, estuvo el impacto de la Revolución rusa y el papel que ésta jugó en el alumbramiento del Partido Comunista Británico. Finalmente, todo esto se fundió con un ataque al nivel de vida y las organizaciones sindicales de la clase obrera.

En resumen, este periodo, en grado menos desarrollado, presentó las características de toda crisis revolucionaria seria: la coincidencia de multitud de elementos económicos, sociales, políticos, nacionales e internacionales que crean la desorganización en la clase dominante, la radicalización de los estratos intermedios de la sociedad y luchas de envergadura de la clase obrera. Lo que diferenció a esta crisis política británica de las crisis revolucionarias en Alemania, Rusia o España fue, primero, que la crisis no fue cualitativamente tan profunda, y, segundo, la falta de perspectivas de las direcciones aplastantemente mayoritarias y de las tradiciones de la clase obrera. Descontando algunas excepciones individuales honrosas, hubo un fracaso casi absoluto a la hora de desarrollar una estrategia revolucionaria coherente combinando la lucha en torno a todos los elementos de la crisis.

No hubo ninguna campaña seria de solidaridad con la guerra de independencia irlandesa —ni siquiera el joven Partido Comunista consiguió en esto un expediente particularmente brillante. El movimiento sufragista fue tratado con indiferencia y, a veces, incluso con hostilidad por la dirección mayoritaria del movimiento obrero. Como en otros países beligerantes, hubo una capitulación generalizada ante la guerra imperialista; el hecho de que decenas de miles de mineros comprometidos en tremendos combates de clase antes de 1914 se lanzasen a alistarse al estallar la guerra, proporciona un símbolo trágico de aquélla. Muy pocos de los que eran activos sobre un aspecto particular hicieron intentos serios de vincularse a la gente que luchaba por otros aspectos.



El resultado de estos fracasos no fue simplemente que la clase obrera desperdiciase sus oportunidades objetivas, sino que la clase dominante fue capaz de transformar estas oportunidades positivamente en armas contra el movimiento obrero y los oprimidos. En Irlanda, la clase dominante británica había sido conducida para 1914 a la encrucijada de la guerra civil, que planteaba la más seria crisis interna a la que se había enfrentado desde 1832. La incapacidad de la clase obrera para poner en pie una solidaridad masiva

con la lucha de liberación nacional que se desarrolló a partir del levantamiento de Resurrección de 1916 y de la victoria electoral de Sinn Fein en 1918 permitió a la clase dominante crear el profundamente reaccionario Estado de Orange en el norte de Irlanda. El resultado fue el establecimiento de una hegemonía reaccionaria en la clase obrera protestante y la creación de una fuerza contrarrevolucionaria permanentemente dirigida en potencia contra la lucha irlandesa y la clase obrera británica.

En relación a las sufragistas, la clase obrera tuvo una oportunidad todavía más clara. La dirección del movimiento gravitó inicialmente de manera espontánea hacia el movimiento obrero y sus organizaciones políticas. Pero la dirección y la mayoría del movimiento obrero rehusaron hacer suya la causa. El resultado fue el hecho históricamente ridículo de que fuese un gobierno liberal-conservador el que, después de décadas de agria oposición, legalizara el voto de la mujer. Si el Partido Laborista hubiese sido identificado como el partido de los derechos de la mujer, todo el aspecto de la política británica del periodo de entreguerras podría haber sido significativamente distinto. En lugar de ello, el Partido Laborista regaló positivamente al partido Tory un nuevo e importante elemento para su bloque electoral con las mujeres, incluidas las mujeres trabajadoras, que proporcionan a los partidos burgueses un voto muy superior al de los hombres.

Finalmente, la dirección del movimiento obrero en su totalidad fue absolutamente incapaz de encarar la crisis política creada por la guerra. La explosión de huelgas, descontento masivo en el ejército y dislocación de la policía en el periodo inmediatamente posterior a la guerra fue dejada pasar, o mejor apagada, por los dirigentes laboristas y de los sindicatos. Así permitieron a los sucesivos gobiernos —laboristas y conservadores— hacer preparativos para la huelga general de 1926 y aseguraron con su acción que la huelga no tuviese éxito. El resultado fue la derrota del movimiento obrero para una generación.

La incapacidad de la clase obrera para aprovechar sus oportunidades ilustra gráficamente una ley fundamental de la política. En sí misma, la existencia de una crisis del sistema capitalista no determina nada sobre sus resultados; indica simplemente que la situación existente es insostenible y que debe ser alterada. *Si la clase obrera no logra explotar las contradicciones y las crisis de la sociedad burguesa, éstas serán utilizadas por la clase dominante para atacar y debilitar a la clase obrera y a los oprimidos.*

La crisis del imperialismo británico

Volviendo ahora al presente, no pretendo tratar todos los elementos que van a desarrollarse antes de la emergencia de una crisis revolucionaria profunda que amenace la dominación de la clase capitalista. En primer lugar, nadie puede decir por adelantado exactamente cómo serán, y, en segundo, falta bastante tiempo, en todo caso, para tal crisis. Lo que quiero tomar en consideración son las líneas políticas de fisura a lo largo de las cuales se preparan las luchas de mañana; en este punto, las tendencias básicas están claras ya.

La primera es una crisis política incipiente en el Partido Tory. El gobierno Thatcher no es un simple gobierno conservador "ordinario", sino un último intento de mantener unido al bloque histórico Tory. Su fracaso está escrito en la relación general de fuerzas; no solamente marcará el final de una administración particular, sino de toda la base del partido, especialmente si tiene lugar en el contexto de una explosión de la militancia y la lucha de la clase obrera. Este será el último gobierno del Partido Tory en su forma actual.

No quiero que esto sea malentendido. No estoy prediciendo que la derrota de Thatcher vaya a ser seguida por una gloriosa sucesión de gobiernos obreros; más bien al contrario. Tampoco estoy sugiriendo que los Tories vayan a desaparecer para no volver

jamás al poder. Lo que señalo es simplemente que la caída de Thatcher no conducirá solamente a una "oscilación del péndulo", sino que iniciará más bien un proceso de ruptura con los viejos patrones de la política británica.

La crisis de los Tories

Para entender este punto, es necesario rechazar completamente la idea de que los intereses del Partido Tory y los de la clase dominante son idénticos, que una derrota de los Tories es lo mismo que una derrota de la clase dominante, que "Tories" es igual a "burguesía" y "laborismo" es igual a "clase obrera". Al contrario, tal como ya hemos visto, el Partido Tory *no representó* históricamente a los sectores más importantes y dinámicos de la burguesía doméstica, sino a intereses particulares y sectoriales. Su llamamiento a la clase dominante como un todo se basa en su éxito en contener a la clase obrera. Su fórmula de *reacción política más concesiones económicas* a la vez encarnaba la dominación del capital bancario e invertido en el extranjero, que es la forma históricamente específica del imperialismo británico, y daba una tremenda hegemonía política a la burguesía.

El problema al que se enfrentan ahora el Partido Tory y la clase dominante es que esta limpia combinación de orientación económica y estrategia política ha sido socavada por la erosión de los colosales beneficios británicos provenientes de las operaciones financieras en ultramar y por la ineficacia de la economía doméstica. Hoy, la estrategia económica más racional para el imperialismo británico es, de manera tosca, la representada por el ala Heath del Partido Tory y por los liberales: control de los salarios, intervención estatal para poner en pie la inversión, fuertes aumentos en la tasa de explotación, etc. Estas fuerzas, sin embargo, no tienen ninguna estrategia política de cara a la clase obrera, como lo mostró de manera concluyente el gobierno Heath de 1970-74.

Thatcher, en contraste, tiene una estrategia política que ha empleado con extrema habilidad en el periodo que condujo a las elecciones de 1979. Es una estrategia cuyo precursor desde 1968, en una forma más grotesca, fue Powell. Consiste en utilizar la fuerza política de la clase dominante para regenerar toda suerte de campaña reaccionaria imaginable —contra "la amenaza comunista", "los asesinos irlandeses", "los gorrones de la asistencia pública", "los inmigrantes", "la crisis de la ley y el orden", etc.— para superar tácticamente a la dirección laborista; en resumen, utilizar el atraso histórico del laborismo y el Partido Laborista para ganar apoyo para los Tories.

El problema de esta orientación es que no cuenta con una política económica coherente y aceptable. Este fue obviamente el caso de Powell, cuyo intento de crear una dinámica política real comportaba políticas —retirada de la CEE, ultramonetarismo, etc.— económicamente bastante inaceptables para la clase dominante. Thatcher está tratando de sacar lo mejor de ambos lados con campañas reaccionarias en las que falta la incitación de Powell a la movilización de masas más una política económica monetarista menos extrema, que no supone la deflación total ni el enfrentamiento buscado por Powell. En realidad, claro está, terminará por coger lo peor de ambas: una política económica incapaz de inclinar decisivamente la correlación de fuerzas, y cada vez más tendente al pragmatismo, junto con una movilización reaccionaria insuficiente para protegerla de las impopulares conse-

cuencias de su política económica. Todo el paquete thatcherista está condenado, aunque esto no le va a impedir infligir algunas serias derrotas a la clase obrera antes de colapsar. Su incapacidad para encontrar una combinación coherente de fórmulas política y económica es la que está creando una crisis política de envergadura para la clase dominante.

La crisis del estado nacional

El Estado burgués británico es, sin comparación, el que cuenta una existencia más larga y continuada en el mundo. Con la respetable excepción de la liberación del sur de Irlanda, su forma esencial no ha cambiado desde la revolución burguesa del siglo XVII y la unificación de los Estados escocés e inglés que le siguió. Los principales cambios posteriores, sobre todo la extensión del sufragio y la incorporación política de la clase obrera al sistema, tuvieron todos lugar dentro del marco institucional básico surgido de las victorias finales burguesas de 1688 y 1707. Sus características principales fueron la eliminación de cualquier burguesía galesa seria y la unificación con la escocesa, el mantenimiento de una democracia burguesa con una monarquía, un fuerte sistema bipartidista basado en un arreglo electoral estable y un funcionariado "apolítico". El último problema de importancia para el Estado británico, el de integrar a la dirección y a la burocracia de la clase obrera, fue resuelto con éxito dentro de este marco durante el periodo anterior y posterior a 1945.

La combinación de la decadencia económica británica con los problemas del Partido Tory amenaza con sumir en la crisis a este sistema. El primer efecto consiste en que, en las áreas más golpeadas por la decaden-

cia económica, el Partido Conservador es incapaz ya de mantener unido a su bloque histórico. Donde más obvio resulta esto es en Escocia, en la que se ha visto reducido de ser el partido mayoritario a ser una fuerza periférica; incluso en las elecciones de 1979, Escocia se inclinó hacia los laboristas y en contra de los *tories*. El mismo proceso de base, en cualquier caso, está afectando también al norte industrial de Inglaterra. A medida que golpea con más fuerza la decadencia económica, el Partido Tory se ve amenazado con la pérdida de su base histórica en la clase obrera.

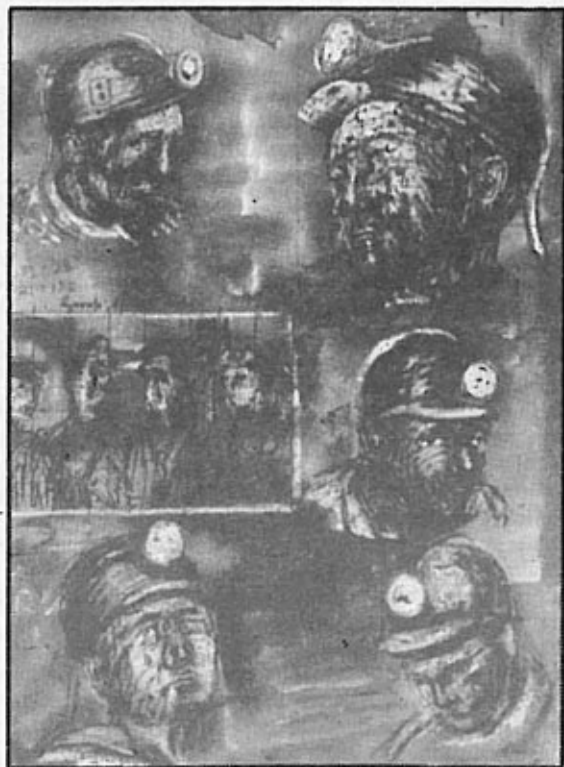
El segundo efecto es la promoción de partidos burgueses escindidos. En tanto que el Partido Tory era fuerte y su base obrera estaba intacta, operaron fuertes constricciones contra los demás partidos de la burguesía, tanto contra los liberales como contra cualesquiera otras formaciones nuevas. Con el debilitamiento del bloque Tory, hay una nueva tendencia al surgimiento de grupos escisionistas burgueses en correspondencia con las fisuras dentro de la clase dominante.

El primer ejemplo de este proceso es el firme ascenso del Partido Liberal desde que alcanzara su punto más bajo en los primeros cincuenta. En el plano parlamentario, esto se ve oscurecido por el sistema electoral, diseñado precisamente para impedir el surgimiento de terceros partidos, y por los rasgos distintivos específicos de las elecciones de 1979. Sin embargo, tomando en consideración las tendencias subyacentes el esquema está claro. A lo largo de la década de los cincuenta los liberales fueron una insignificancia burguesa. En los últimos años del gobierno Macmillan de 1959-63, con el afrontar los primeros problemas económicos del periodo postbélico y el emerger de crisis dentro del Partido Tory, comenzaron a revivir. En 1970, y más llamativamente en 1974, su participación en el voto comenzó a elevarse. El pacto *Lib.-Lab.* les permitió poner pie *de facto* en el gobierno por primera vez desde la guerra.

La política económica del Partido Liberal, como ya hemos señalado, corresponde hoy más estrechamente que la de cualquier otro partido a los intereses del capital industrial; por consiguiente, no sorprende en absoluto que en 1974 recibiesen por vez primera algunas contribuciones económicas de fuentes burguesas. Lo que es más, sus tradicionales problemas financieros se verán significativamente reducidos con la introducción de la subvención estatal a los partidos políticos. La instauración de cualquier forma de representación proporcional supondría para ellos un papel casi permanente en gobiernos de coalición burgueses.

El segundo proceso escisionista es interno a la alianza que constituyó el mismo Partido Tory. El reaccionario bloque de Orange en el norte de Irlanda ha sido históricamente el más firme aliado del núcleo Tory en Inglaterra. Incluso se presentaba a las elecciones como "Partido Conservador y Unionista". El nuevo ascenso de la lucha en Irlanda a partir de 1968 ha hecho añicos el contacto unionista —primero escindiéndolos de los Tories y después marginando al viejo Partido Unionista oficial.

El tercer proceso similar está teniendo lugar en Escocia. El retroceso sufrido por el Partido Nacionalista Escocés (SNP) en las elecciones de 1979 llevó a los medios de comunicación burgueses y a un sector significativo de la izquierda a concluir que la cuestión de la devolución y el nacionalismo estaba cerrada. La falta de visión y el absurdo de semejante perspectiva ha sido indicada por los resultados del SNP en las primeras elecciones parciales en Glasgow bajo el gobierno Thatcher y por la adopción en sucesivas conferencias



Cabezas de mineros y estudio para "Poceros en la bocamina". 1942.

del Partido Laborista Escocés de sus posiciones sobre la devolución. En realidad, el SNP ha evolucionado durante los setenta de ser una secta lunática marginal a ser un partido serio, mientras los Tories se han convertido en una fuerza marginal en Escocia.

Más importante todavía: hay una base social real para este desarrollo. Económicamente, sectores de la burguesía y la pequeña burguesía escocesas, particularmente los vinculados al surgimiento del petróleo como un elemento clave de la economía, tienen intereses claramente diferentes a los de los banqueros londinenses de la City, que juegan un importante papel en la decisión de la política Tory. Políticamente, el intenso odio de la clase obrera escocesa hacia los *tories* hace imposible para éstos lograr una participación importante en el voto urbano en un periodo de declive. Solamente un partido burgués distinto puede impedir que el Partido Laborista barra limpiamente en Escocia. Finalmente, en la base de todo lo demás, Escocia es una nación distinta de Inglaterra, aunque no sea una nación oprimida. La "cuestión escocesa" no va a remitir, sino a convertirse en un elemento más prominente de la política británica a medida que avancen los ochenta.

El efecto central de todos estos procesos y otros que tienen lugar en Gales no se reduce a romper el bloque histórico Tory. Combinados con una crisis en el Partido Laborista, remodelarán toda la política británica y amenazan la forma actual del estado democrático burgués británico.

La crisis en el Partido Laborista

La crisis del imperialismo británico no afecta solamente a las instituciones de la clase *dominante*. Puesto que todas las clases han sido formadas y moldeadas por la grandeza imperial de Gran Bretaña, también todas ellas son sacudidas y transformadas por su declive. No resulta sorprendente, por tanto, que estemos entrando en un periodo crucial de la crisis y el desarrollo del Partido Laborista, dentro del cual la actual escisión es una mera etapa. La base de esta escisión es la existencia en el interior del Partido Laborista, especialmente a partir de 1945, de una capa, representada por Jenkins, Williams, etc., que tiene una base social fundamentalmente distinta de la base tradicional del partido. Esta base no está en la burocracia sindical de la clase obrera, sino en partes del aparato estatal y de la industria nacionalizada e incluso en sectores marginales de la misma burguesía.

El por qué de que la escisión se desarrolle ahora no está simple, ni siquiera principalmente, determinado por los giros del sector Jenkins, sino por la situación dentro de los sindicatos. No ha sido nunca el fabianismo, cuyos legítimos herederos son los jenkinsianos, quien ha dominado al partido. Este es un mito de la capa intelectual pequeño burguesa a la que representan. Fue la burocracia sindical quien estableció el Partido Laborista, y, en última instancia, siempre lo ha controlado. Estaban dispuestos a dar una situación prominente dentro del movimiento a gente cuyas ideas se adecuasen a las suyas propias, pero *nunca* han cedido a nadie que no fuesen ellos mismos el poder final de decidir lo que ocurriera dentro del partido. Cuando han adoptado una actitud firme, como por ejemplo hicieron en 1968 sobre *In Place of Strife* (*), la dirección del partido ha tenido que aceptarla.

A lo largo de los cincuenta y primeros sesenta, la situación no supuso ningún problema para gente como

Jenkins o Gaitskell. Al contrario, se encontraron alineados con los burócratas contra los bevanistas y la izquierda electoral. En tanto que la "nueva derecha" no fuera demasiado lejos —como hicieron, por ejemplo, al intentar eliminar la cláusula cuarta del documento constituyente del partido— los bonzos del sindicato estaban satisfechos de dejarles dominar el partido.

El declive acelerado del imperialismo británico, no obstante, minó la base de esta alianza. Cronológicamente, el punto de inflexión fue la lucha en torno a *In Place of Strife*. Para 1968, la burguesía no ofrecía concesiones, sino que exigía más bien un ataque abierto contra las organizaciones del movimiento obrero. Los jenkinsianos, naturalmente, se apresuraron a complacerla. La burocracia sindical, por otra parte, bajo la presión de su base y temiendo por su propia posición, rechazó las propuestas. Como siempre, cuando le alcanzó el punto decisivo la dirección del partido terminó por alinearse con la burocracia sindical, dejando aislados a los jenkinsianos y enfureciendo a la clase dominante. A partir de entonces, los jenkinsianos, para su sorpresa, se han encontrado con que eran una clique relativamente impotente, y la escisión solamente era cuestión de tiempo.

Los temas políticos sobre los que han luchado en el partido han sido aquellos que resultan más inaceptables para la clase dominante: la retirada de la CEE, el rearme nuclear unilateral y cualquier amenaza de que el movimiento obrero pueda desarrollar una estructura interna democrática. La combinación de una presión continuada en los sindicatos, que impide una retirada total por parte de la burocracia e impone tomas de posición "izquierdistas" sobre ciertas cuestiones, y la necesidad por parte de la burguesía de una confrontación cada vez más abierta crea las condiciones para una crisis explosiva en el Partido Laborista.

El Bennisismo

Este es el telón de fondo contra el cual debemos analizar el surgimiento de Benn y del "bennisismo". Un ala izquierda dentro del Partido Laborista no es ni nada nuevo: ejemplos previos fueron la Liga Socialista de la década de los treinta y los bevanistas de los primeros cincuenta. Pero estas izquierdas anteriores surgieron generalmente o bien cuando la clase obrera había sufrido serias derrotas —como tras 1926 ó 1931— o bien cuando el capitalismo estaba entrando en un periodo de *boom* —como en los cincuenta. Su organización se vió ampliamente reducida a las elecciones, que cuentan poco dentro del partido. La dirección parlamentaria, de acuerdo con una burocracia sindical derechista, pudo mantener fácilmente el control sobre la situación.

Desde el Movimiento Nacional de Izquierda (*National Left Wing Movement*) de los años veinte no se había desarrollado en el Partido Laborista un ala izquierda en una situación en que la clase obrera no hubiera sido decisivamente derrotada ni la clase dominante pudiera garantizar concesiones serias y duraderas. Lo que es más: hoy, como en los años veinte, la radicalización se extiende dentro de los sindicatos hasta el punto de que existe una importante presión sobre la burocracia desde abajo.

Es este último aspecto el que más alarma a la clase dominante y el que da su verdadera significación al bennisismo. Unas cuantas protestas en las elecciones pueden ser fácilmente sobrellevadas, pero los

sindicatos son algo muy distinto. Son instrumentos de lucha enormemente poderosos; potencialmente más poderosos que los gobiernos, como redescubrió amargamente la clase dominante en 1972 y 1974. Por supuesto que la burguesía teme poco que estos "lugartenientes obreros del capital" sean ellos mismos los indicados para derrotar el orden burgués. Pero teme realmente las consecuencias de las acciones a las que se ven empujados tanto en el terreno de la lucha de masas como a través de su control sobre el Partido Laborista. Sobre todo, teme la creación de expectativas que pudieran conducir al descontrol de su base.

La característica distintiva del mismo Benn es precisamente que ha comprendido que la izquierda debe basarse principalmente en los sindicatos. Esto se refleja no sólo en los temas políticos con los que se identifica —estrategia económica alternativa, cooperativas obreras, "control" obrero, etc.—, sino también en su orientación organizativa. A partir de 1968, Benn se ha puesto a construir una base política dentro de los sindicatos con la perspectiva de forjar una alianza con los sectores de "izquierda" que emergen de la burocracia, algo simbolizado por su marcha a la cabeza de la manifestación de los trabajadores navales de Upper Clyde. Toda su orientación, desde su lenguaje izquierdista a su decisión de permanecer en el gobierno en 1975 en función de la posición de Jack Jones, ha estado calculada para ganar el respaldo de los dirigentes sindicales para su candidatura a la dirección del partido. Dada su falta de apoyo en el grupo parlamentario laborista, tenía que formar parte integral de su estrategia arrancar la elección de la dirección a su dominio exclusivo —una política que, de paso, cimenta la alianza deseada por él en cuanto que aumenta el poder directo de la burocracia sindical dentro del partido.

Lo que alarma a la clase dominante es que esta orientación impedirá la inflicción fácil de cualquier derrota seria a los bennistas. El éxito del ala derecha y su consolidación en la AUEW fue una victoria significativa, pero, considerada en su totalidad, la actual burocracia sindical se halla todavía muy lejos de la confiable derecha monolítica que derrotó a Bevan. Confrontados con los ataques de Thatcher y ante una radicalización en sectores de su propia base, aunque no hagan todo el recorrido con Benn, algunas franjas de la burocracia sindical irán pese a todo demasiado lejos para la clase dominante. La orientación inmediata de la dirección del Partido Laborista, por supuesto, será la de buscar una alianza directa con la clase dominante, en particular con la Confederación de la Industria Británica (CBI), contra la "locura tory". Pero, a medio plazo, una orientación semejante es inviable, y sólo la capitulación total al estilo de 1975-79 ó el bennismo representan alternativas coherentes. La elección entre estas opciones aumentará dramáticamente las tensiones tanto en la base como en la dirección de los sindicatos y del Partido Laborista.

La combinación de una escisión derechista y el surgimiento de una "nueva izquierda" es un grave elemento desestabilizador dentro del Partido Laborista. Por vez primera en varias décadas, la masa de la clase obrera puede ver una clara alternativa de "izquierda" a la política tradicional de los recientes gobiernos laboristas. No cabe exagerar la importancia de este hecho. Dentro del marco del Estado democrático burgués, el Partido Laborista es para el movimiento obrero el *elemento decisivo* en política. El hecho de que una cuestión sea discutida dentro del partido determina para cientos de miles de trabajadores si se trata de

algo políticamente legítimo o "marginal".

La combinación de la decadencia objetiva del imperialismo británico con la crisis en el Partido Laborista contiene un enorme potencial para acelerar el proceso de politización en la clase obrera. De hecho, es la condición previa para construir un partido revolucionario de masas en Gran Bretaña. Como decía Trotsky, cuando se habla de la revolución cualquier cifra de menos de diez millones de personas carece de significación. Una vez que se comienza a hablar de la politización de *las masas*, solamente una diferenciación dentro del Partido Laborista tiene importancia. No obstante, todavía no están próximos en absoluto los tipos de crisis y diferenciación que plantean la cuestión de un partido revolucionario de masas. Pero no por ello es menos cierto que los procesos dentro del Partido Laborista y, en particular, el surgimiento del bennismo, son los que van a dominar la política obrera en la Gran Bretaña de los ochenta.

Esto puede verse con claridad si se compara la situación actual con la de la lucha contra el gobierno Heath en 1970-74. La situación política estaba entonces abrumadoramente dominada por la acción sindicalista abierta: las huelgas contra la Ley de Relaciones Industriales, la huelga minera de 1972, la liberación de los "cinco de Pentonville", la segunda huelga minera de 1974. Los procesos dentro del Partido Laborista tenían cierta influencia, pero no determinante; el desarrollo de una nueva izquierda bennista había comenzado, pero estaba todavía relativamente limitado como factor activo en la política.

Hoy la situación está bastante transformada. No es que la lucha de masas haya desaparecido; simplemente se encuentra en un nivel más bajo que en 1970-74, pero la clase obrera no ha sufrido ninguna derrota cualitativa. Hoy, sea como sea, se *combina* con los efectos más generales de la crisis política y, en particular, con los procesos dentro del Partido Laborista. Hemos visto y vamos a ver no solamente grandes huelgas económicas, como la de los trabajadores siderúrgicos, sino también luchas contra el militarismo, contra la opresión de la mujer y el racismo, confrontaciones en torno a la democracia dentro del movimiento obrero y una profunda crisis continuada en el norte de Irlanda, con la penetración creciente de todos estos temas en los debates políticos y programáticos del Partido Laborista.

La representación proporcional

El proceso más dramático de los ochenta tendrá lugar en el terreno *político*. Algunos de sus elementos cruciales ya han sido tratados; entre otros se incluye una crisis progresiva en relación a la CEE. Estos elementos, sin embargo, no van tan sólo a acumularse individualmente de modo cuantitativo. *Llegará un punto en que se combinen con la profundización de la crisis económica y social y con el potencial para una explosión de masas en la clase obrera, produciendo un desplazamiento cualitativo en la configuración de la política británica.*

La ocasión más adecuada para tal desplazamiento será la introducción de un sistema electoral basado en alguna forma de representación proporcional. Puede parecer sorprendente argumentar que, lo que parece ser una cuestión técnica, pueda traer consigo cambios políticos decisivos, pero de hecho la reforma actual implica cuestiones extremadamente sustanciales. La forma actual de la política burguesa británica se basa en su totalidad, históricamente, en la premisa de que

dos partidos estables, defensores ambos de los intereses fundamentales de la clase dominante, puedan asumir el ejecutivo y formar gobiernos fuertes. Todos los detalles del sistema político —la cabeza “apolítica” de la burocracia estatal y administrativa, la evitación de las coaliciones fuera de tiempos de guerra, la estructura unitaria del Estado, la supervivencia de la Cámara de los Lores, la ausencia de una casta militar-policial fuertemente dominante— se basan en esta premisa.

En el periodo anterior al siglo XX, la estabilidad fue asegurada por medio de una alternancia en el gobierno entre dos partidos de la burguesía. En este siglo, la clase dominante británica se ha encontrado en la afortunada posición de contar con una burocracia obrera tan domesticada y bajo control que se la podía dejar gobernar sola; en la mayor parte de los demás países, la burguesía ha considerado que sus burócratas obreros no eran lo bastante dignos de confianza ni su dominio de la clase obrera lo bastante firme como para permitirles acceder al gobierno no siendo en coalición con un partido capitalista.

De 1923 a 1979, los diversos gobiernos laboristas sirvieron bien a los capitalistas, y, cuando surgían problemas o pasaban a primer plano otras consideraciones, los laboristas podían ser sustituidos por los *tories*. En uno y otro caso gobernaban equipos fuertes y estables con poca necesidad de coaliciones, de gobiernos de unión nacional fuera de tiempos de guerra, de frentes populares, de desarrollar fuerzas de consideración a la derecha del Partido Tory ni de otros peligrosos experimentos similares.

El problema de la situación actual estriba en que, por razones distintas, los dos partidos potencialmente gobernantes están dando muestras de fuertes tendencias a la inestabilidad. La base *tory* amenaza con convertirse en demasiado exigua socialmente para encarar un ascenso de envergadura de la clase obrera, mientras que el laborismo podría crear en su base expectativas peligrosamente elevadas y potencialmente incontrolables si se-le permitiese acceder por sí solo al gobierno. La vieja alternancia de partidos se está volviendo cada vez más difícil, incluso peligrosa, para la clase dominante. Necesitan movilizar alianzas burguesas más amplias y potentes que las ofrecidas por las direcciones de partidos aislados.

La respuesta no es, como alguna gente ha sugerido, incluido Tom Nairn, un gobierno de unión nacional. En primer lugar, esto sería solamente una solución temporal —ninguna burguesía en la historia ha creado jamás una coalición semipermanente de todos los grandes partidos. En segundo lugar, el efecto probable de formar un gobierno de unión nacional con una clase obrera no derrotada sería una peligrosa radicalización dentro del Partido Laborista y una politización general de la clase obrera tendente a una ruptura con todos los partidos establecidos. El único gobierno de unión nacional que ha existido en tiempo de paz, el de 1929-31, sólo fue un riesgo asumible porque la clase obrera había sufrido una derrota aplastante cinco años antes (y, en cualquier caso, no fue tanto un gobierno de unión nacional como un gobierno conservador con un apéndice escindido de la dirección laborista).

Cosa muy distinta sería, sin embargo, un cambio en el sistema electoral que introdujese la representación proporcional —lo que, en realidad, significa ir hacia un sistema de permanentes pero cambiantes gobiernos de coalición. A medio plazo, esto ofrece considerables puntos de apoyo para la clase dominante.

En primer lugar, proporcionaría la mejor oportunidad, dentro de un marco democrático burgués, de

impedir gobernar en solitario al Partido Laborista. La proporción de votos de la clase obrera que van a un partido obrero es en Gran Bretaña una de las más bajas de cualquier gran país europeo. El Partido Laborista no ha obtenido nunca en su historia el 50 por ciento de los votos en unas elecciones. A menos que hubiera una gigantesca crisis burguesa o que el Partido Laborista adoptase una perspectiva socialista clara y lograse movilizar en torno suyo a la masa de la clase obrera con la perspectiva de conquistas reales, el sistema proporcional ofrecería a la burguesía prácticamente una garantía de que el laborismo solamente iba a poder acceder al gobierno en coalición.

También ofrece el mejor medio, después de una escisión, de volver a crear un ala derecha clara y fuerte dentro del Partido Laborista. El sistema proporcional forzaría al Partido Laborista a optar entre dos posibles estrategias. O bien orientarse abiertamente hacia la izquierda tratando de ganar la mayoría y de gobernar en oposición a todas las fuerzas burguesas —una política llena de riesgos para la burocracia, puesto que desataría grandes luchas, y que por tanto intentará evitar a cualquier precio—; o bien buscar una alianza con un partido burgués —lo que, por supuesto, significa adoptar como precio una orientación procapitalista. En torno a la “necesidad” de coaliciones de este tipo, impuesta por el sistema proporcional, la clase capitalista puede ejercer una presión inmensa dirigida a la cristalización de una nueva ala derecha en el Partido Laborista y a hacer que se incline hacia la derecha el centro de gravedad de la burocracia en su conjunto.

Finalmente, un sistema de representación proporcional es una necesidad absoluta si se quiere mantener los efectos de las escisiones en el Partido Laborista. El actual sistema electoral de “pasar primero la prueba” no solamente está dirigido contra los terceros partidos en general, sino que, en particular, aniquilaría electoralmente a un partido “socialdemócrata” sin ninguna base en los sindicatos, una vez desaparecido el interés inicial.

Existen, desde luego, problemas considerables para la clase dominante en la introducción del sistema proporcional. En primer lugar, haría estallar al bloque *tory* mucho más que al laborista; saldrían ganando los liberales, el Partido Nacionalista Escocés, los nacionalistas galeses y los socialdemócratas. Encontraría una violenta oposición por parte del viejo aparato del Partido Conservador. En segundo lugar, todo el sistema de coaliciones constantes implicaría mucho más clara y directamente en política a la monarquía y crearía nuevas tensiones en el aparato del Estado. Resumiendo, la introducción de la representación proporcional no es algo en lo que la clase dominante vaya a embarcarse a la ligera; es, más bien, algo a lo que se está viendo abocada por la decadencia y la crisis del imperialismo británico y del sistema de partidos por él creado.

Las tareas de los revolucionarios

Los procesos de que hemos tratado ofrecen grandes oportunidades y plantean un importante desafío a los revolucionarios. Sería bonito poder decir que la clase obrera, inevitablemente, frustraría todos los planes de la clase dominante y dispersaría su ofensiva como cenizas al viento. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Para derrotar todos los ataques de la burguesía, la clase obrera necesitaría una dirección, una organiza-

ción y una conciencia revolucionarias; un partido revolucionario de masas, en realidad.

Indudablemente, las grandes crisis y luchas que se aproximan crearán oportunidades para construir una organización revolucionaria e implantarla en la clase obrera; no existe ninguna razón objetiva para que algunas decenas de miles de trabajadores, con influencia en la acción sobre cientos de miles de otros, no puedan ser ganados para tal organización en el transcurso de la próxima década.

Pero estas cifras, muy grandes si se comparan con los grupos revolucionarios que hoy existen, no representan una situación en la que los revolucionarios puedan dirigir a la gran masa de la clase obrera. La toma del poder en un país como Gran Bretaña exigiría un partido de *cientos de miles* de miembros dirigido quizá a unos *veinte millones* de personas. Sería infantil pensar que un partido de este tipo pueda ser construido en la década de los ochenta. Y sin una fuerza así, los revolucionarios *no determinarán* el curso de la política nacional en sus aspectos más básicos.

Por consiguiente, debemos asumir que, bajo una dirección reformista continuada, a pesar de luchas de masas, la clase obrera sufrirá derrotas y la clase dominante obtendrá éxitos en aspectos importantes de su estrategia. La tarea de los revolucionarios será la de intervenir y construir una organización potente en una situación real en la que van a ser una fuerza creciente pero en absoluto la fuerza dominante. ¿Cuáles son, entonces, los cambios para los que deben prepararse?

La tendencia de fondo será que los sectores más fuertes y decisivos de *ambas* clases avancen al primer plano. Ya la escala de los ataques lanzados por la burguesía con Thatcher, e incluso bajo el gobierno Callaghan, habría parecido imposible hace diez o quince años. Si alguien hubiese dicho en 1966 que hoy habría tres millones de parados en Gran Bretaña, que los gobiernos iban a intentar reducir el nivel de vida a un ritmo del diez por ciento anual —como lo hizo el último gobierno laborista—, que el Servicio Nacional de la Salud se vería reducido a niveles de caridad, que todo el gasto público de la postguerra iba a estar amenazado, que nos encontraríamos en medio de una carrera armamentista que supera enormemente la de los peores momentos de la *guerra fría*, que brutales dictaduras militares y la tortura masiva cubrirían prácticamente todo el continente latinoamericano y la mayor parte del mundo colonial, con el apoyo cada vez más abierto del gobierno imperialista “democrático” de los Estados Unidos de América, todo esto habría sonado como un mal sueño. De hecho, incluso sectores de la clase dominante se habrían sentido honestamente indignados,

Pero ésta es la *realidad* del actual ataque lanzado por la clase capitalista, y va a empeorar bastante durante los ochenta. Al final de la década es probable que haya como mínimo cinco millones de parados —con importantes efectos sobre la militancia y la fuerza de los sindicatos—, una caída del veinte por ciento en el nivel de vida, declives drásticos de la asistencia social y los derechos democráticos, y posiblemente una nueva proliferación en ciertas partes de Europa de regímenes dictatoriales sin precedentes. Esto no son fantasías, sino las *perspectivas realistas* de la lucha de clases en la década de los ochenta, de las que la burguesía es bastante consciente y para las que se está preparando. Cada vez saldrán a escena sectores más decisivos, potentes y derechistas de la clase dominante. Está será más la década de sus halcones que la de sus “palo-

mas”.

Esto tiene consecuencias importantes para la clase obrera. La política no es cuestión de cantidades de votos pasivos, sino de *fuerza*. Es lamentable, pero cierto, que en una sociedad capitalista los millones de pensionistas tienen bastante menos fuerza y son bastante menos decisivos en la lucha de clases que un cuarto de millón de mineros del carbón. El peso de todos los maestros, trabajadores sociales, profesores y estudiantes universitarios combinados no representa nada comparable a un sólo sindicato de industria significativo. Lo que es más, las capas intermedias se van a ver crecientemente confrontadas y desorientadas como las víctimas más fáciles de los ataques de la clase dominante.

También dentro de la clase obrera, por tanto, el protagonismo pasará a manos de los sectores más fuertes y decisivos. Esto significa, sobre todo, los trabajadores industriales y los sindicatos de industria. Estas son las capas en que deben estar decisivamente implantados y tener a la mayoría de sus miembros los revolucionarios, si es que quieren participar en las luchas clave de los ochenta, que decidirán tanto la relación de fuerzas entre las clases como el resultado de la lucha en el Partido Laborista. Será especialmente entre los jóvenes trabajadores donde los revolucionarios encuentren una audiencia más receptiva para sus ideas. Se olvida a menudo algo tan simple como cuán joven es la gente que hace las revoluciones. La edad media del Partido Bolchevique estaba en torno a los 23 años, la de los sandinistas en Nicaragua era de 24, y otro tanto la del masivo PC Alemán en los primeros años veinte.

Sin embargo, el giro hacia la construcción de un partido entre los trabajadores industriales en absoluto es suficiente por sí solo. Como ya hemos señalado, los ochenta serán una década de creciente “dislocación social y crisis política; verán luchas en aumento contra los intentos de reforzar toda forma de opresión, y esto define el tipo de partido que debe ser construido: *un partido enraizado y con la mayoría de sus miembros en la clase obrera industrial y, simultáneamente, capaz de hacer suyo cualquier tema de la lucha de clases.*

Es importante hacer notar que esto no es simplemente una cuestión de *programa* y de *consignas*, sino también de *organización*. Los oprimidos no pueden luchar a menos que estén organizados, y también el movimiento obrero tendrá que ampliar y transformar sus organizaciones para abordar los nuevos aspectos a los que deberá enfrentarse en los ochenta. Organizaciones como las del movimiento de mujeres, los grupos negros y asiáticos, y las campañas de frente único no pueden ser algo secundario en la política revolucionaria. No pueden ser relegadas al cuarto trastero en relación con las reivindicaciones salariales, la lucha contra el paro o la propaganda por la nacionalización de la industria.

La importancia relativa de cualquier tema particular de la lucha de clases, por supuesto, cambia según el momento. El movimiento contra el racismo y el fascismo relanzó la lucha bajo el gobierno Callaghan, para ser seguido por el “invierno de descontento” en torno a cuestiones salariales. Hoy ocupa la escena la lucha contra el paro y contra el militarismo. En el futuro, los temas dominantes pueden ser nuevas guerras, nuevos ataques a los derechos de la mujer, una explosión masiva por motivos salariales o un nuevo ascenso del combate contra el racismo o la lucha en Irlanda. No podemos decir a pesar de estos indicios, sino que solamente podremos hacerlo a la vista de las situaciones

concretas, cuáles serán los temas más significativos. Pero lo que definitivamente *no* es el caso es que la lucha contra las diferentes formas de opresión vaya a desaparecer para ser sustituida por simples temas económicos y sindicales "contra los *tories*".

Las formas de organización de los oprimidos y de la lucha sobre cuestiones internacionales, pueden, por supuesto, cambiar. Estos temas han penetrado de manera creciente en los sindicatos y en el Partido Laborista y han conducido a la formación en ellos de organizaciones específicas; esta tendencia aumentará enormemente. *Poner en pie los movimientos y luchas de los oprimidos, poner en pie campañas específicas de frente único, hacerlo crecientemente en el seno del movimiento obrero: éste es un elemento no secundario, sino fundamental de cualquier estrategia revolucionaria en Gran Bretaña. Forman parte del objetivo clave de crear un ala izquierda de lucha de clases en el movimiento obrero.*

Así como el poder del imperialismo británico moldeó las características de todas las clases de la sociedad y de sus partidos políticos, así también ha moldeado la tradición marxista en Gran Bretaña. Mientras bajo el impacto de la revolución rusa se construyeron partidos comunistas de masas en Francia, Italia, Alemania y otras partes, en Gran Bretaña solamente se creó una diminuta organización revolucionaria con unos miles de miembros. Desde el declive del cartismo no ha existido en Gran Bretaña ninguna tradición ni organización revolucionaria de masas.

Más aún, el pequeño movimiento marxista que ha existido en Gran Bretaña ha sido reforzado por dos tradiciones contradictorias pero que se han reforzado mutuamente. La tradición mayoritaria ha unido un economismo y oportunismo derechista en política con un sectarismo organizativo; el primero ha surgido de la acomodación al imperialismo y su burocracia obrera; el segundo de la dialéctica, señalada por Marx, por la que un nivel bajo de lucha de clase siempre produce un alto nivel de sectarismo. La tradición minoritaria ha consistido en una corriente política revolucionaria que siempre ha sido socialmente marginal e incapaz de construir una organización revolucionaria seria.

Estas tradiciones que se refuerzan mutuamente de manera negativa sólo han sido siquiera parcialmente superadas en momentos de aumento de las luchas: en 1889, con Eleanor Marx y el ascenso de la sindicación; en la década y media hasta 1916 en Irlanda —entonces parte del Estado británico— con James Connolly; en Escocia con John Maclean; en una forma más distorsionada con Sylvia Pankhurst. Con todas sus particulares limitaciones individuales, cada uno de ellos empezó a unir una política internacionalista revolucionaria seria con una base real en la clase obrera.

El temprano Partido Comunista Británico, surgido de la profunda crisis internacional de la Primera Guerra Mundial, representó la evolución más avanzada de este proceso. Su desarrollo tuvo lugar en un momento de profunda crisis en Gran Bretaña. La política del temprano Partido Comunista representó un gran avance sobre cualquier cosa que hubiera existido previamente en Gran Bretaña. Entre lo más importante de su política estaban la lucha por el poder de los soviets, la participación en las elecciones, un combate por la afiliación al Partido Laborista, la política exterior antiimperialista y una orientación sistemática de frente único dentro de los sindicatos, como el Movimiento Minoritario y el Movimiento Nacional de Izquierda.

Muchas de estas ideas las aprendió de su participación en el movimiento comunista internacional y de las lecciones de las experiencias más avanzadas de la lucha de clases a escala internacional. El trotskista americano Jamen P. Cannon citaba en uno de sus libros a un famoso bandido, Jimie Sutton, al que una vez preguntó un reportero por qué se había especializado exclusivamente en robar bancos. "Porque ahí es donde está el dinero", fue su respuesta.

El asunto es obvio. Durante casi siglo y medio, Gran Bretaña ha tenido el nivel más bajo de lucha política de clases de los grandes países europeos. Creer que de esta experiencia vayan a surgir las más adecuadas y avanzadas ideas revolucionarias es poner el materialismo histórico cabeza abajo —aunque la cantidad de gente que se dedica a "reconstruir" el movimiento obrero mundial desde Londres muestra, por desgracia, que este elemental asunto no ha sido todavía completamente apreciado. Los revolucionarios tienen que empezar a partir de las experiencias internacionales, y sobre todo de las de las clases obreras que han hecho efectivamente revoluciones.

En Gran Bretaña, quizás más que en cualquier otro lugar, la creación de una organización revolucionaria nacional no puede separarse de la construcción de una organización internacional. No es el marxismo revolucionario e internacionalista, sino el excepcionalismo y provincianismo británico tal como ha existido por más de un siglo lo que se va a ver condenado por lo que ocurrirá en los ochenta.

Conclusiones

¿A dónde conducen, en suma, los procesos políticos que hemos bosquejado? Llevan al cambio más radical en la política británica desde el ascenso del imperialismo británico y la extinción de la tradición revolucionaria de masas en la clase obrera. Después de 130 años, la política británica va a retomar las tradiciones políticas que su burguesía y su burocracia obrera creían desaparecidas para siempre. No será una evolución rápida de la noche a la mañana, aunque habrá momentos particulares en que las cosas cambien rápidamente. En cualquier caso, el proceso todo está tan inevitablemente inscrito en el declive del capitalismo británico como la actual situación política es un resultado de su ascenso.

Pero estas transformaciones crearán una crisis de cada una de las instituciones y tradiciones enraizadas en el pasado imperialista británico: el Partido Tory, el Estado británico, el Partido Laborista y la tradición dominante en el marxismo. Esta crisis presentará enormes oportunidades objetivas, pero no tendrá *ningún* desenlace positivo automático. Al contrario, el desastre de las que han intentado ser fuerzas revolucionarias en un país como Italia, o como Portugal en 1975, muestra que abandonada simplemente a su propio impacto una crisis produce desorientación, no soluciones. El movimiento obrero en Gran Bretaña en los ochenta se verá enfrentado a problemas que no ha experimentado durante décadas. En qué medida tenga éxito en afrontar el tipo de desafíos que hemos diseñado, determinará no solamente la naturaleza de la política británica en los ochenta, sino, lo que es más importante, el desenlace final de la crisis política que estos años inaugurarán. ■

(Internacional, mayo de 1981).

II Congreso de CCOO: un sindicalismo más moderado, menos democrático y más ineficaz ante la crisis.

“La resolución aprobada por el I Congreso Confederado de Comisiones Obreras y que de alguna manera resumía el contenido del mismo, centraba las perspectivas de actuación de la Confederación para el inmediato futuro en cuatro grandes cuestiones: la consolidación de la democracia, la actuación ante la crisis económica por un Plan de Solidaridad Nacional contra el paro y por el empleo, el reforzamiento organizativo de la Confederación desde los delegados y secciones sindicales de empresa hasta los órganos de dirección confederales, la defensa de los derechos sindicales y de las condiciones de trabajo y salario a través de la negociación colectiva”.

Joaquín Nieto

Con estas palabras iniciará Marcelino Camacho su informe a los delegados y delegadas al II Congreso Confederado de CCOO reunido en Barcelona durante los días 18, 19, 20 y 21 del mes de junio. Y, efectivamente, esos eran los cuatro grandes objetivos que en 1978 se proponía llevar a cabo el primer sindicato del país. Hoy, al cabo de tres años, analizando los resultados obtenidos la conclusión es diáfana: la dirección confederal de CCOO ha sido incapaz de cubrir con éxito esas perspectivas de actuación.

El 23 de Febrero hubo una intentona golpista protagonizada por mandos del Ejército y de la Guardia Civil; las libertades están en peligro; vivimos en una democracia vigilada; la Ley de Defensa de la Constitución y la ley sobre los estados de Alarma, Excepción y Sitio suponen un verdadero secuestro de las libertades; los poderes fácticos intervienen abiertamente en la vida política; la represión y los continuos recortes a los derechos democráticos refuerzan peligrosamente a aquellos que desde unos aparatos de estado que nunca han sido depurados pretenden acabar con las libertades.

La dirección confederal de CCOO ha fracasado también en su actuación ante la crisis económica, contra el paro y por el empleo. Desde mediados de 1978, en que se celebró el I Congreso, hasta finales de 1980, se perdieron 761.000 puestos de trabajo. Si a éstos le añadimos los doscientos mil que probablemente se han perdido en el primer semestre de 1981, el resultado es que el empleo ha caído en un millón de puestos de trabajo.

En cuanto al reforzamiento del sindicato, tanto por la desafiliación, como por el languidecimiento de la vida sindical, para todos es claro que hoy CCOO es bastante más débil que antes. Además ha decrecido su capacidad de convocatoria y movilización entre los trabajadores. Comisiones ha perdido —según el IMAC— 15.144 delegados en las últimas elecciones sindicales. E incluso su capacidad de negociación es menor: la CEOE se permite con una arrogancia desconocida el negarse a recibir a CCOO en las negociaciones sobre el empleo.

Los derechos sindicales se han visto mermados sensiblemente: se han recortado las horas sindicales, la democracia todavía no ha entrado en las empresas y sigue sin ser devuelto el patrimonio sindical.

Los salarios, desde la firma de los Pactos de la Moncloa, han ido perdiendo su poder adquisitivo. Aunque sea prácticamente imposible cuantificar esta pérdida,

en estos tres últimos años los salarios han crecido anualmente de 2 a 3 puntos menos en relación a lo que el IPC se ha ido incrementando. El aumento del paro ha hecho descender significativamente la participación de los salarios en la renta nacional.

Las condiciones de trabajo se han venido deteriorando progresivamente. Los mecanismos de este deterioro han sido fundamentalmente la ofensiva emprendida por la patronal para incrementar el aumento de la productividad elevando los ritmos de trabajo y la aplicación cada vez más generalizada de la movilidad de plantillas. Nada se ha avanzado en el terreno de las jubilaciones, muy poco en la reducción de la jornada, ni en la supresión de las horas extras. Sin embargo, el trabajo precario se está extendiendo y ya empiezan a existir proyectos claros de implantar de forma generalizada el trabajo a tiempo parcial, sin que ni siquiera estén encontrando una seria oposición por parte de las centrales sindicales.

Los motivos del fracaso

Estos datos muestran con claridad que los cuatro grandes objetivos que la Confederación se había marcado en su I Congreso no se han cubierto. La dirección confederal de CCOO ha fracasado en estos tres años al frente del sindicato. Es necesario preguntarse por qué.

Es cierto que desde 1977 la burguesía y la UCD han venido llevando a cabo una ofensiva de gran envergadura contra los trabajadores en todos los terrenos. Pero esto no explica por sí mismo los resultados obtenidos. Si la derecha está logrando triunfar uno a uno en la mayoría de sus proyectos antiobreros es porque no está encontrando una firme resistencia por parte de los sindicatos de clase.

CCOO apoyó la política de consenso. Esta política es la que evitó la ruptura y trajo la reforma. La que impidió que se depurara a todos los aparatos del estado de franquistas que han seguido conspirando contra las libertades como lo ha demostrado el 23 de Febrero. La que permite que el Gobierno se dote de un arsenal de leyes tan represivas como la Ley Antiterrorista bajo cuya aplicación murió salvajemente torturado Joseba Arregui. Ha sido también el consenso el que ha permitido que se sigan negando sus derechos a las nacionalidades oprimidas, que es la causa real de la situación que hoy se vive en Euskadi, y que pueda ha-

ber proyectos como el de la "armonización de las autonomías" que no es otra cosa que un insulto para la lengua, la bandera y la cultura de naciones como Catalunya o Euskadi a las que se les niega hasta el derecho de utilizar los términos nación o nacional al referirse a sus propios territorios. En definitiva, el hecho de que hoy las libertades están más amenazadas es posible entre otras cosas porque CCOO no ha llevado una lucha incansable por defenderlas y ha venido apoyando en este terreno la política del PCE en el Parlamento, cuyos diputados votaron sí a la Ley de Seguridad Ciudadana o Antiterrorista (que está siendo aplicada también contra militantes de CCOO), han votado afirmativamente a la Ley de Defensa de la Constitución que es un atentado a la libertad de expresión, y ni siquiera han votado contra la Ley sobre los estados de Alarma, Excepción y Sitio. Mientras tanto, CCOO se ha negado reiteradamente a exigir la depuración de los golpistas de la Administración y los aparatos del estado, llegando incluso a decir que esta depuración favorece a la derecha, como afirmó A. Piñedo en Sevilla ante los delegados y delegadas al II Congreso de la Federación metalúrgica de CCOO.

Pero el error más grave de la dirección confederal ha estado sin duda en el *abandona de sus tareas de preparar, organizar y convocar a los trabajadores a la movilización*. Ya en la negociación colectiva 1978-79, frente a los topes salariales decretados por Abril Martorell tras las tan famosas como estériles "jornadas de reflexión", la dirección confederal de CCOO optó por llevar una táctica de convenio a convenio, empresa e empresa, en vez de articular una confluencia de las acciones reivindicativas de todos los convenios que era lo único que hubiera permitido echar abajo los topes salariales. Después, esta misma dirección se negó reiteradamente a convocar una *jornada de huelga general* a nivel estatal frente al Estatuto de los Trabajadores, permitiendo sólo movilizaciones simbólicas como la concentración del 14 de octubre de 1979 en la Casa de Campo de Madrid, o movilizaciones descentralizadas por nacionalidades o regiones. El hecho de que en estas últimas participaran millones de trabajadores, demostró que la convocatoria de una jornada a nivel estatal era posible. Frente al AMI, tampoco la dirección confederal fue capaz de hacer valer la movilización en las negociaciones previas a su firma sencillamente porque no la preparó ni convocó. Posteriormente, en los convenios ha venido aplicando una táctica que en 1981 ha llevado a *aceptar de hecho el marco del AMI* con todas las secuelas negativas que esto suponía, abandonando casi por completo toda crítica pública a sus contenidos.

En estas condiciones, sin recurrir a la movilización, permitiendo solamente las huelgas de uno o dos días de duración, evitando las convocatorias estatales, era imposible detener la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos sindicales.

Más moderado, menos democrático

Lejos de aprender de un balance tan negativo, lo que implicaría dar un giro a la izquierda, la dirección confederal de CCOO en las ponencias presentadas para el II Congreso insiste en proseguir el mismo camino. Más aún: *el contenido de las ponencias expresa un profundo viraje a la derecha*, asumiendo la línea sindical adoptada por el PCE en el Comité Central de Mayo de 1980 y que el sindicato ha venido practicando desde

aquella fecha.

Este viraje lleva además consigo la práctica de un sindicalismo *menos participativo y más burocrático*, tanto en las relaciones de CCOO con los trabajadores, como en la vida interna del sindicato, en las relaciones de la mayoría con las minorías y de la dirección con los afiliados.

El clima más o menos democrático en que se ha venido desarrollando la vida interna de CCOO es analizado por algunos sectores de la dirección como un obstáculo para sus proyectos. De ahí que hayamos asistido en todo el debate precedente al Congreso a un rosario de ataques burocráticos dirigidos contra los sectores que tradicionalmente han representado la izquierda en el sindicato.

Ya antes se habían producido hechos tan escandalosos como los de *Navarra*, donde fueron disueltos los órganos democráticamente elegidos y sustituidos por gestoras minoritarias. Después vino la destitución de la dirección de CCOO de *Gijón* sustituyéndola también por una gestora. En este caso la destitución fue la respuesta burocrática del aparato regional de CCOO contra una *corriente de izquierdas* que estaba extendiéndose por todo Asturias y ganando cada vez más apoyo entre los trabajadores.

En el debate precongresual se han dado casos como los de *Euskadi*, donde se ha borrado de los Estatutos la posibilidad de presentar listas alternativas para elegir los órganos de dirección avaladas por el 10% de los congresistas. En el *Metal, Artes Gráficas, Aragón...* se han impugnado listas alternativas presentadas conjuntamente por militantes de la LCR y el MC. Muchos congresistas no han sido elegidos sino nombrados por las estructuras...

Con todas estas medidas, la Confederación está perdiendo sus mejores tradiciones democráticas. *Borrar el derecho de las minorías cualificadas a presentar listas alternativas y sustituir direcciones democráticamente elegidas por gestoras nombradas a dedo es anular el carácter democrático de CCOO.*

Más ineficaz ante la crisis

Frente a ese sindicalismo más moderado y menos democrático la corriente que representan el MC y la LCR, la corriente de izquierdas de las CCOO asturianas y otros sectores críticos han presentado batalla. Han propuesto un *cambio de rumbo* en la política del sindicato, han combatido porque CCOO recupere sus mejores tradiciones combativas en la lucha contra el paro, contra los expedientes y las reestructuraciones, en la defensa del empleo y los salarios.

Política de empleo

Después de reiterar que el paro es el problema número uno para los trabajadores, la salida que presentan las tesis oficiales en el Congreso de CCOO parte de que *"... es preciso lograr una negociación para salir de la crisis entre las distintas fuerzas económicas y sociales y el propio Gobierno y, en consecuencia, reclama una amplia convergencia de fuerzas sociales y políticas de diversos sectores de la población, de reducir drásticamente las tasas de paro, de asegurar un subsidio mínimo a los parados actuales, todo ello al mismo tiempo que se abordan otros problemas cuya resolución está situada a medio y largo plazo, pero que tienen y tendrán gran incidencia sobre el empleo"*. (Gaceta Sindical nº 11, pag. 13).

Esta base de partida es falsa: está basada en presentar como compatible algo que es incompatible. Los intereses de la patronal y el gobierno hoy sobre el empleo, dado el tipo de crisis que afecta al sistema, son *abiertamente contradictorios* con los de los trabajadores. La depuración del aparato productivo eliminando a las empresas menos competitivas y el aumento de la productividad, que son los objetivos patronales se basan en mantener unas *elevadas cifras de paro estructural*. A pesar de su demagogia sobre el tema, tanto a la patronal como al Gobierno no les interesa detener la caída del empleo, pues necesitan mantenerla para salir satisfactoriamente de la crisis. Cualquier medida de contención del paro y generación de nuevos puestos de trabajo sólo puede llevarse a cabo *imponiéndola* por la fuerza en contra de los objetivos actuales de los capitalistas. No existe pues un "interés común" de todas las fuerzas sociales y políticas en acabar con el paro. Y elaborar sobre este punto de vista erróneo la política de empleo de CCOO sólo puede llevar a un error mayor.

Así, el *Plan de Solidaridad Nacional* elaborado por CCOO y el método propuesto para llevarlo a cabo, son incapaces de solucionar el problema del paro. Tomemos como ejemplo las *negociaciones sobre el empleo* que se han venido llevando a cabo entre CCOO y UGT, la Administración y la CEOE. A pesar de las ilusiones que algunos pretendieron crear en torno a estas conversaciones, las negociaciones están siendo un fraude. La CEOE se ha descolgado exigiendo una serie de medidas intolerables: fuerte reducción salarial, desgravaciones fiscales, etc. El Ministerio de Economía ha dejado bien claro que no va a aumentar sensiblemente el gasto público. Y en este contexto la Ejecutiva Confederal de CCOO, al igual que UGT, aparece ofreciéndose a que los salarios pierdan un 2% de poder adquisitivo en las empresas con beneficios y pérdidas aún mayores en las empresas en crisis. ¡Como si así se solucionara el problema del empleo! En los cuatro últimos años la caída del empleo ha venido acompañada de una caída del poder adquisitivo. La moderación salarial ni genera empleo, ni evita que aumente el paro.

Expedientes de crisis

"La actuación más apropiada en los expedientes es el planteamiento de una política de negociación y presión que garantice el empleo a medio plazo (...) la actuación del sindicato tiene que partir de la base de constatar la situación de crisis de la empresa; a partir de ahí, exigir un planteamiento del conjunto de medidas necesarias para superarla, una de las cuales será el expediente, exigiendo un reparto del coste (...) Las regulaciones temporales son negociables..." (G.S. n° 11, pág. 15).

Salvo en los casos en que se planteen despidos forzados (a los que se propone medidas alternativas como jubilaciones anticipadas o bajas incentivadas, perdiéndose los puestos de trabajo) la línea general que se propone es la *aceptación de los expedientes*. Para hacerse una idea de lo que significa esto, basta decir que desde el I Congreso los expedientes han afectado a *alrededor de un millón* de trabajadores. Sus efectos sobre la clase obrera están siendo destructivos. Con ellos no se salvan puestos de trabajo, sino que su aplicación ejerce un efecto de desgaste entre los trabajadores. Por lo general, después de un expediente, viene otro peor, o bien medidas más duras y de efectos más irreversibles. *"La acción del sindicato debe ser de oposición tenaz a toda clase de expedientes"* afirmaba la Co-

missió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) en las ponencias de su último Congreso y proseguía: *"oposición en primer lugar de los trabajadores afectados, pero también desarrollando acciones solidarias de los trabajadores del mismo sector, de la localidad, de la comarca. Coordinando los trabajadores de las diferentes empresas afectadas por expedientes. Estimulando el conocimiento, la sensibilización, el apoyo del conjunto de la población"*.

Esta es, efectivamente, la orientación general a partir de la que afrontarlos. El estudio sobre la situación financiera, los planes de inversión, beneficios..., de la empresa que plantea expediente han de servir para reforzar los argumentos de los trabajadores frente al plan de la empresa, para proponer medidas alternativas que *no signifiquen sacrificios* como la reducción de jornada y la supresión de las horas extras. En todo caso, la oposición y resistencia al expediente es la que permite que de aplicarse, se haga en las condiciones menos desfavorables para los trabajadores (rotatividad, etc.) y disuadir a la empresa, evitando que después del expediente se vea con las manos libres para emprender medidas más duras.

Reestructuraciones

En cuanto a las reestructuraciones sectoriales, según las tesis oficiales, para CCOO *"el primer objetivo es lograr la negociación de los planes de reestructuración en todos sus aspectos y con los interlocutores válidos: Gobierno, patronal y sindicatos (...)* En general, salvo excepciones, la orientación no puede ser la reducción estructural y definitiva de la actividad productiva y plantilla, sino la mejora de la competitividad (...) en el marco de un plan de empleo satisfactorio es posible negociar regulaciones temporales de empleo y medidas de movilidad" (G.S. n° 11, pág. 16).

La idea de la que parten las tesis, es la de aceptar que la elevación del nivel de competitividad es la clave para la resolución de la crisis. En esto aceptan de lleno la lógica capitalista. A partir de ahí, las diferencias con patronal y gobierno se centran en exigir que las reestructuraciones sean negociadas y no por decreto, y en plantear que el coste social sea "el menor posible". Es esta aceptación de partida de la necesidad de la reestructuración con el objetivo fundamental de mejorar la competitividad —sin analizar que la reconversión industrial puesta en marcha nos lleva a una mayor dependencia económica y tecnológica, a un mayor peso de las industrias degradadoras del medio ambiente y a una situación de paro estructural— lo que lleva a la dirección confederal de CCOO a aceptar también como lógicos los sacrificios que en las reestructuraciones se exigen a los trabajadores: disminuir plantillas, congelar salarios, aplicar la movilidad y el incremento de la productividad...

El ejemplo más descarnado de la política de reestructuraciones está siendo el *Decreto-ley sobre reconversión industrial* que da unas facilidades extraordinarias a las empresas para aplicar expedientes, reducir plantillas, contratar temporalmente y en condiciones precarias, recibir todo tipo de subvenciones y de exenciones fiscales. Pues bien, ante él, la postura de la dirección confederal de CCOO no ha sido la de organizar una amplia respuesta de rechazo para exigir la retirada del decreto, sino la de pedir su negociación. Negociar una ley de esas características en el marco del proyecto presentado por el Ministerio de Industria y Energía, sólo puede servir para dulcificar alguno de sus aspectos más escandalosos.

Al defender las tesis oficiales sobre reestructuraciones, la dirección del sindicato ha puesto

como ejemplo la *Siderurgia Integral*. Pues bien, este ejemplo es elocuente de a dónde lleva la política planteada: las centrales sindicales, la patronal y la Administración llegaron en el mes de abril a un acuerdo en el sector que significaba perder 8.500 puestos de trabajo, aceptar la movilidad de plantillas y congelar este año la reducción de jornada. Todo con el objetivo de reducir los costes salariales al 23% de la facturación. Es decir, se trataba de un simple plan de saneamiento consistente en hacer pagar la crisis a los trabajadores. A cambio, había una serie de promesas sobre inversiones y Comisión de Seguimiento con participación de los sindicatos que para CCOO y UGT justificaban plenamente los sacrificios. Pero, vista la poca resistencia que está encontrando, el Gobierno se descuelga con un real decreto en el que los 130.000 millones de pesetas de inversión prometidos, se han quedado en 25.000, donde la Comisión de Coordinación de la Siderurgia Integral, que es una comisión gubernamental nombrada por la Administración, acapara todas las competencias sobre el tema, dejando un papel puramente simbólico a la futura Comisión de Seguimiento.

Productividad

"La productividad aumenta fundamentalmente a costa de que haya más paro". Pero esta rotunda afirmación de las tesis del Congreso, no va acompañada de un pronunciamiento claro contra ese aumento, sino de considerar que *"... la mejora de la productividad de nuestro aparato productivo es una tarea que ligada a la lucha contra el paro, tiene una gran importancia en estos momentos. Pero abordarla con seriedad exige su discusión, dentro del Plan de Solidaridad, por el conjunto de fuerzas sociales y económicas implicadas. Esto no significa que en las negociaciones sectoriales (reestructuraciones) no pueda tratarse de una forma más específica siempre ligada al mantenimiento y creación de puestos de trabajo"*.

Resumiendo, patronal y sindicatos *deben esforzarse por aumentar la productividad*. Se debe negociar a nivel global, pero también a nivel sectorial.

Se intenta justificar esta posición diciendo que ese aumento ha de ir ligado al combate contra el paro. Pero esto último solo son palabras. En las actuales condiciones *es imposible compatibilizar el aumento de la productividad con el empleo*. Precisamente el objetivo del aumento de la productividad, en un momento en que las empresas producen lo mismo o incluso menos, es abaratar costes y aumentar la competitividad reduciendo la mano de obra. Y esto es válido no sólo para los aumentos conseguidos a través de elevar ritmos, sino también para los conseguidos por inversiones. La mayoría de las mejoras tecnológicas van dirigidas a sustituir mano de obra. Si los beneficios así obtenidos son reinvertidos, será de nuevo en tecnología que sustituye nuevos puestos de trabajo.

En 1978, el aumento del 2,7% del PIB estuvo acompañado de un incremento de la productividad del 4,3%, lo que provocó una caída del empleo valorada en 325.000 personas. En 1979 el aumento del PIB en un 0,8%, junto con el incremento de la productividad del 3,1%, determinaron una nueva caída del empleo de 270.000 personas. En 1980 esta caída llega a suponer 442.000 puestos de trabajo al combinarse un aumento del PIB del 1,2% con un 4,5% de aumento de la productividad. Si en 1981 se repitiera el mismo porcentaje de aumento de la productividad y el PIB creciera un 1,5% (probablemente será menos) el empleo caerá en otras 330.000 personas.

Estos son los datos. Colaborar en el aumento de la

productividad significa colaborar en la caída del empleo, por muy buenas intenciones que se tengan sobre que así se combate el paro.

La defensa del empleo requiere una *negativa a negociar incrementos de productividad* y una oposición sistemática a los mismos. Cualquier innovación tecnológica sustitutoria de mano de obra debería ir acompañada de la consiguiente *reducción de jornada* para así absorber el empleo liberado por dichas inversiones.

Paro, expedientes, reconversión industrial, productividad... en todos estos temas se puede observar cómo las tesis expresan un profundo viraje a una política sindical más moderada y menos combativa. Lo podríamos ver también en capítulos como la *negociación colectiva* —donde la defensa de aumentos salariales iguales al IPC del año anterior desaparece— y como las *formas de acción sindical*, donde se puede observar una indudable marginación del papel de la Asamblea, tan asumido tradicionalmente por CCOO, y un deslizamiento hacia un sindicalismo menos combativo en el que la movilización pasa a un segundo plano.

Un viraje contestado

Pero este viraje no se da sin contestación, no sólo de los sectores ligados a corrientes como las que la LCR o el MC representan y que han sido tradicionalmente la izquierda en CCOO, sino también de *cuadros y militantes del propio PCE*, que han visto cómo el sindicato se iba debilitando progresivamente desde los Pactos de la Moncloa y cómo la línea sindical mantenida no era útil ni eficaz ante la crisis.

Desde hace dos años, la *CONC* ha venido planteando unas posiciones sindicales a la izquierda de la dirección confederal. Se pudo constatar así cuando las CCOO de Catalunya plantearon la necesidad de una movilización coordinada estatalmente contra el Estatuto de los Trabajadores. Apareció a la luz pública en la celebración de su II Congreso, que hacía una severa crítica a la política de "acuerdos generales" llevada a cabo por el sindicato como el apoyo a los Pactos de la Moncloa. Se volvió a repetir en el planteamiento de negociación colectiva para 1980. Finalmente, esta posición más combativa de los dirigentes catalanes se expresó ante el 23 de Febrero con la convocatoria de una jornada de paro general como forma de responder al golpe de estado. Estas diferenciaciones están estrechamente ligadas a otras de más largo alcance que han aparecido entre el PSUC y el PCE.

De la misma forma, a nivel de estado durante todo el debate precongresual ha aparecido una *amplia contestación a las tesis oficiales por parte de sectores del mismo PCE*. Fundamentalmente por parte de los sectores que la prensa ha venido a llamar "prosoviéticos" y cuya característica más conocida es el rechazo del eurocomunismo. Es necesario comprender que estas diferenciaciones no son ajenas a discrepancias con la política sindical llevada a cabo por CCOO, al debilitamiento del sindicato y de los trabajadores, al viraje a la derecha emprendido por la dirección confederal.

No es en este II Congreso Confederal donde se va a llevar la gran batalla entre las diversas posiciones en el seno del PCE. Después del 23-F, el PSUC ha desandado parte del camino emprendido en el Vº Congreso, ha vuelto a reclamarse del eurocomunismo y a reanudar la política de unidad nacional con la derecha catalana.

El derecho de huelga y el Tribunal Constitucional

Es de sobra conocido que lo que llamamos Estado de derecho implica una profunda juridificación del tejido social. Casi todo queda sometido a la regulación prevista por la norma jurídica. Pero no hay que olvidar que en una sociedad de clases el derecho no es sino la coacción institucionalizada para la satisfacción de los intereses de las clases dominantes, al tiempo que una niebla ideológica enmascaradora de esa dominación y, por tanto, tendente a conseguir el consenso de los dominados imprescindible para el ejercicio del poder. Por ello, cuando en las modernas sociedades liberal-democráticas se observa el embadurnamiento jurídico con que se trata el fenómeno de la huelga no puede menos que producir una cierta preocupante interrogación a cualquier observador mínimamente crítico.

Joaquín Aparicio Tovar

EN efecto, la huelga es en sí misma un fenómeno de hecho que se utiliza por los trabajadores para la consecución de sus intereses en función de la valoración hecha por ellos mismos de la correlación de fuerzas con sus antagonistas sociales. Es un arma de extraordinaria potencialidad combativa porque, en sí misma, ataca el centro mismo del sistema: rompe la disciplina de la producción haciéndola imposible durante su desarrollo. Ahora bien, su juridificación en un Estado de derecho no es otra cosa que el intento de búsqueda de funcionalidad de la misma dentro del sistema, porque no cabe duda que su reconocimiento como derecho supone una innegable conquista del movimiento obrero.

Es sabido que el tratamiento dado por el Estado moderno a la huelga ha pasado por tres etapas claramente diferenciadas: la represión en una primera época, una cierta tolerancia en una segunda fase y, por último, después de la segunda guerra mundial aproximadamente (no en nuestro país, claro), su integración en el sistema productivo dominante. No se puede pasar por alto que el papel de la huelga en un sistema de relaciones laborales está íntimamente unido al del sindicato y la negociación colectiva, y en ese sentido resulta bastante clarificador resaltar el lugar que la Constitución española reserva al sindicato, pues él mismo se encuentra incluido entre los pilares sobre los que se asienta el Estado diseñado por la Constitución, ya que no otra cosa significa su inclusión (art. 7) en el Título Preliminar de la misma. Buen cuidado se ha puesto, además, en señalar que el ejercicio de su actividad debe desarrollarse dentro del respeto a las leyes y a la propia Constitución. Constitución que, por otra parte, deja intacta la constitución material heredada del franquismo (el reconocimiento de la propiedad privada y, sobre todo, las referencias a la productividad son bastante explícitos en este sentido). Es decir, no sólo parece que el sindicato con su actividad no debe poner en peligro un sistema de economía de mercado, sino que, además, es uno de los agentes fundamentales para que el sistema funcione (eso y no otra cosa significa su reconocimiento como uno de los pilares del estado). Puede afirmarse que la actividad de los sindicatos viene querida en la Constitución fundamentalmente a través de la vía de la negociación colectiva (importante conquista también de la clase obrera, pero llena de ambivalencias) reconocida en el art. 37 como derecho de los trabajadores y empresarios; lo que quiere decir

que, puesto que todo derecho lleva implícito un reciproco deber, existe también un deber de los representantes de los trabajadores de negociar (aunque no ciertamente a convenir) cuando así lo demande el ejercicio del derecho de los empresarios o sus representantes.

Sin embargo, frente a ese esquema de relaciones laborales que diseña la Constitución, que tiene como eje la negociación frente al conflicto, podría resultar un tanto disfuncional el tratamiento del derecho de huelga en los términos que se hace por el art. 28 (1) pues en él se sugiere un reconocimiento amplio del mismo. Naturalmente, ello implicaba que no podía entenderse constitucional el Decreto-Ley llamado de relaciones laborales de 4 de marzo de 1977, regulador del derecho de huelga en la etapa inmediatamente anterior a la Constitución, habida cuenta de las extraordinarias limitaciones que al ejercicio de este derecho imponía. El Gobierno y un importante sector de la doctrina jurídica no lo entendían así, especialmente después de la derogación parcial que del mismo se hizo en el Estatuto de los Trabajadores, pues se sacaba la consecuencia que lo no derogado expresamente, a sentido contrario, estaba vigente. Por ello se estaba en una situación ambigua en la que gobierno y empresarios no dudaban en aplicar el citado D-L aunque, en verdad, los tribunales venían entendiendo que algunos aspectos del mismo no eran compatibles con la nueva realidad constitucional (el derecho de un sindicato a llamar a la huelga, por ejemplo).

El recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, no fué con decisión planteado (este recurso sólo podía ser interpuesto por cincuenta diputados o senadores). Se interpuso tarde (el último día de plazo para recurrir) y sin mucha convicción, porque parte de la izquierda parlamentaria (el PSOE sobre todo) parecía embarcada en la idea de juridificar más la huelga mediante la promulgación de una ley de huelga "garantizadora" del derecho ya reconocido en la Constitución, ley que, naturalmente, tendría que estar hecha por el partido del Gobierno. Por contra otra corriente de opinión con escasa incidencia parlamentaria entendía imprescindible poner en claro la inconstitucionalidad de tal Decreto-Ley y dejar la regulación exclusiva del derecho de huelga a los dictados del art. 28 de la Constitución (artículo de directa aplicación). La autoorganización de los trabajadores y la autodisciplina sindical determinarían el resto de su ejercicio. El modelo no es nada extemporáneo pues algo semejante es lo que viene

practicándose en Italia.

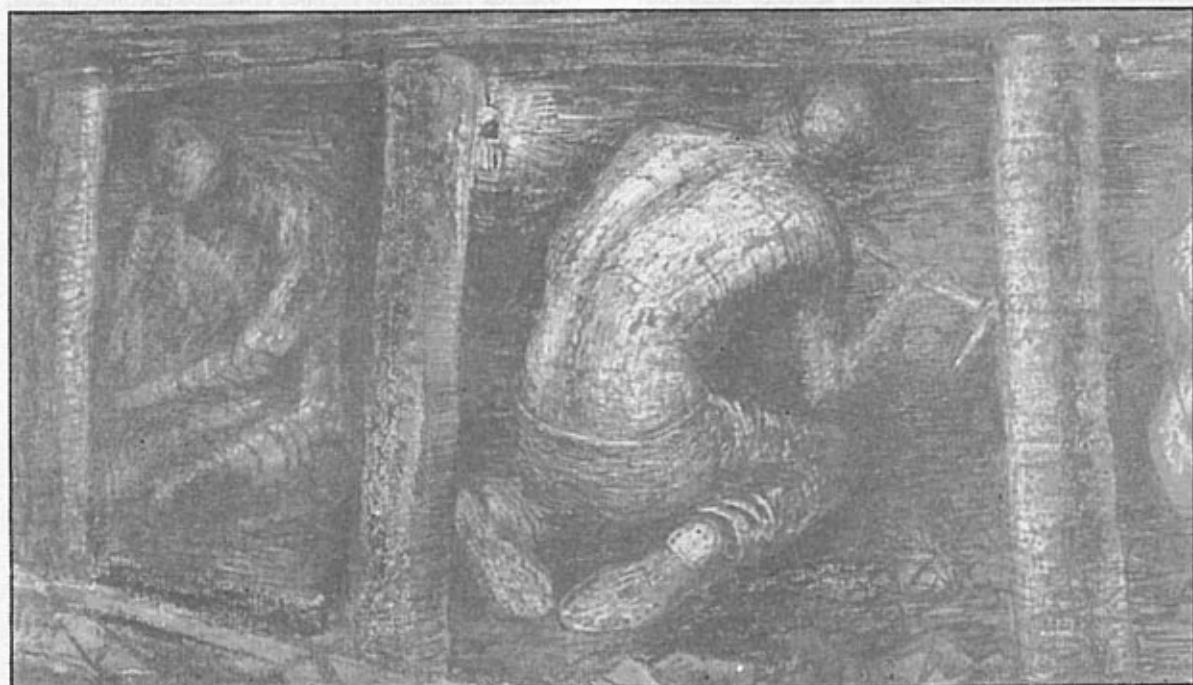
Sobre este panorama, el Tribunal Constitucional dictó su sentencia el 8 de abril de 1981 (BOE de 25 de abril), donde se pronuncia declarando la inconstitucionalidad de solamente algunos artículos del D-L recurrido, declarando acordes a la Constitución gran parte de los artículos no derogados expresamente por el Estatuto de los Trabajadores (2). Pero; más allá de la mera declaración de constitucionalidad o no de algunos artículos del Decreto-Ley recurrido, la sentencia es extremadamente reveladora en varios órdenes de cuestiones.

En primer lugar, se pone de manifiesto la notable altura teórica de la ciencia (si se puede llamar así) jurídica española, pues sin existir en el Tribunal Constitucional ningún experto en materia jurídico-laboral (lo que no deja de ser un tanto chocante) han aprovechado inteligentemente el cuerpo de doctrina existente para construir una sentencia bastante sutil. Esta altura teórica de los juristas al servicio del Estado no deja de contrastar muchas veces con aquellos otros al servicio directo de los empresarios privados, lo que no deja de ser también exponente de un aspecto del capitalismo español. La sutileza de la que se ha venido hablando resulta patente cuando el Tribunal hace una distinción entre lo que se considera político y lo que se considera jurídico. Recuérdese que se ha dicho antes que el Decreto-Ley recurrido era extraordinariamente restrictivo del derecho de huelga, que estaba reconocido, en principio, con amplitud por la Constitución. Pues bien, el Tribunal expresamente dice: "aunque admitiéramos que el RD-L 17/1977 pudiera considerarse como restrictivo, sería ésta una calificación derivada de un enjuiciamiento político. No es posible calificar jurídicamente el art. 28 de la Constitución como más liberal o más avanzado o más generoso. La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de huelga... Desde el punto de vista jurídico-constitucional lo único que hay que cuestionar es si sobrepasa o no el contenido esencial del derecho". Con lo que se está sugiriendo que los juicios técnico-jurídicos tienen sustantividad por sí mismos que les hace ser neutros políticamente.

Así, establece un concepto de huelga al definir como contenido esencial del derecho "la cesación del trabajo, en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que pueda revestir". Restrictivo o no restrictivo es una calificación que no tiene, pues, sentido para el Tribunal Constitucional. Repárese, sin embargo, en que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional en sentido estricto y, quiérase o no, en última instancia son criterios de tipo político los que determinan su propia constitución, pues debe recordarse que no es un órgano incluido dentro del esquema jerárquico del poder judicial, dentro de la clásica distinción de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).

Sin embargo, a pesar de ser un órgano no inserto en el esquema jerárquico del poder judicial, no cabe duda que la interpretación de las normas que hace el Tribunal puede llegar a ser una interpretación vinculante para todos los órganos jurisdiccionales. De esta forma se contribuye eficazmente a la uniformización en la interpretación de las leyes en el sentido marcado por el Tribunal Constitucional, que, no lo olvidemos, es un órgano en cuya génesis están criterios políticos. La sentencia que nos ocupa puede ser expresiva de lo que se viene diciendo, pues explícitamente afirma que "puede el Tribunal establecer el significado de un texto y decidir que es el conforme con la Constitución". Lo que, si bien se mira, va más allá de la consideración kelseniana del Tribunal Constitucional como legislador negativo que depura según criterios de lógica jurídica la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento. Aquí estamos ante un órgano de génesis política, pero que puede establecer una interpretación vinculante para todos los tribunales de justicia. Si tenemos en cuenta, por otra parte, que el Tribunal no cambia con cada legislatura (es decir: los técnicos que dicten esas sentencias e interpretaciones vinculantes no están en función directa de la soberanía popular expresada en la elección de los miembros del Parlamento) hay que concluir que él mismo es un factor de estabilidad bastante notable.

Esa interpretación vinculante del Tribunal es utilizada en la sentencia para declarar constitucionales



Minero trabajando en la superficie de la mina. 1942.

algunos artículos del RD-L recurrido, siempre que se interpreten en la forma que el propio Tribunal determina. Así, por ejemplo, señala los criterios por los que se pueden declarar abusivas las huelgas de celo, de reglamento o rotatorias y, por tanto, pueden ser lícitamente objeto de represión por parte del empresario (no por el Estado).

Al principio se decía que el reconocimiento del derecho de huelga en los términos que lo hacía el art. 28 de la Constitución podría resultar disfuncional con el modelo de relaciones laborales hacia el que abocaba la Constitución misma. Y, precisamente, la sentencia viene a deshacer esa duda, pues tal y como concibe el derecho de huelga éste no es sino un elemento de apoyo a la negociación o, si se quiere, a la composición de intereses. Ello por lo siguiente:

1º.— Expresamente, se afirma en la sentencia el papel del sindicato como uno de los pilares del Estado moderno a que hemos hecho antes referencia cuando se dice que "el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores el carácter de organismos básicos del sistema político". Lo que está en la línea de toda una corriente que discurre por toda Europa Occidental, que se manifiesta con extremada virulencia a la hora de adoptar las grandes decisiones de política económica, para las cuales los gobiernos recurren al consenso de las grandes organizaciones sindicales, o, para decirlo en otras palabras, al pacto social. Por ello algunos sectores se preguntan si no estamos en presencia de un neocorporativismo.

2º.— El contenido esencial de la huelga se cifra en la no prestación de trabajo como medio para conseguir los intereses de los trabajadores, pero deben existir unos muy concretos límites a la misma; porque como se dice en la sentencia "el derecho de los huelguistas es un derecho a incumplir transitoriamente el contrato, pero también un derecho a limitar la libertad del empresario. Exige por ello una **proporcionalidad** y unos sacrificios mutuos, que hacen que cuando tales exigencias no se observen, las huelgas pueden considerarse abusivas". Añadiéndose, además, que la huelga no hace desaparecer el deber de lealtad y honradez propio de la relación contractual. Con lo que se está implícitamente afirmando que los intereses de los trabajadores que se pueden conseguir mediante la huelga se tienen que satisfacer respetando los intereses de los empresarios. Con lo que, si no existe esa proporcionalidad, puede el empresario ejercer su poder sancionador.

3º.— En coherencia con lo anterior, se afirma expresamente que la huelga es "un instrumento puesto al servicio de la negociación colectiva", con lo que se hace manifiesta la interpretación adelantada al principio acerca del modelo de relaciones laborales al que aboca la Constitución. Por ello durante la vigencia de un convenio colectivo no es posible el ejercicio del derecho de huelga, a no ser que previamente haya sido incumplido por el empresario o que se hayan producido excepcionales circunstancias nuevas, tales que justifiquen su modificación; pero debe de ser un cambio "radical y absoluto". En definitiva, el convenio implica un deber de paz y la huelga sólo puede ejercitarse durante la negociación de un convenio colectivo; de manera que durante la vigencia del convenio se teoriza que existe una renuncia al ejercicio del derecho de huelga. Tema que es más que dudoso desde un punto de vista jurídico, porque la titularidad del derecho de huelga está reconocida en la Constitu-

ción a los trabajadores y no a sus representantes, y el sistema de determinación de las partes negociadoras en un convenio colectivo no está basado en los esquemas de representación del derecho privado.

Deber de paz durante la vigencia del convenio y licitud de la huelga durante el periodo de negociación del mismo; mas la huelga, se dice, "es un derecho a hacer presión sobre el empresario, colocándose los trabajadores fuera del contrato de trabajo, pero no es, ni debe ser en momento alguno, una vía de producir daños o deterioros en los bienes de capital".

4º.— La justificación de la prohibición de los daños en los bienes de capital puede deducirse no tanto en función del derecho de propiedad cuanto en la necesidad de la productividad, ejerciendo entonces el empresario un "poder de policía" velador del orden productivo. Naturalmente, habría que preguntarse de dónde trae el empresario esos poderes, o por qué los mismos no podrían estar encomendados a los propios trabajadores. Los poderes de policía justifican la legalidad del cierre patronal defensivo, es decir, no concebido como derecho autónomo sino como derecho de respuesta en determinados casos; negando el Tribunal, expresamente, la teoría de la paridad de las armas de lucha (huelga los trabajadores, cierre los patrones), pues se reconoce la disparidad real de poderes entre los empresario y trabajadores. De esta forma se reconoce definitivamente que el cierre patronal (con las limitaciones señaladas) está previsto entre las medidas de conflicto colectivo a que alude el art. 37.2 de la Constitución.

Ese poder de policía del empresario-velador del orden productivo es el que justifica medidas empresariales sancionatorias de las huelgas con ocupación del centro de trabajo, sin recurrir al antiguo argumento del derecho de propiedad sobre su empresa. Ciertamente, el Tribunal señala que la ilegalidad de la huelga con ocupación debe ser interpretada de una manera restrictiva, en base precisamente a los casos en que puedan darse daños, pero no cabe duda de que siempre es un poder con grandes dosis de discrecionalidad. Esta justificación ideológica del poder de policía del empresario, al tiempo que unos sindicatos colaboradores de las grandes decisiones de política económica ¿no refuerza aún más la idea del neocorporativismo en que estamos sumidos?.

Otros aspectos importantes toca la sentencia, entre ellos la declaración de inconstitucionalidad de los laudos dictados por la Administración en caso de conflicto colectivo, o la declaración de constitucionalidad de la facultad de los poderes públicos de dictar decretos de servicios mínimos en los casos de huelgas en los servicios esenciales para la comunidad, todos ellos en coherencia con el modelo de relaciones laborales basado en el consenso que dibuja como modelo la Constitución. Ahora bien, hay que recordar que las relaciones colectivas de trabajo, en general, y la huelga en particular, son, fundamentalmente, fenómenos de hecho, y el que se adecuen a las previsiones normativas es cosa que depende de los propios antagonistas sociales. ■

Notas:

1. Sobre este tema *vid.* Aparicio Tovar, J. y Baylos Grau, A. "Sindicación, huelga y contratación colectiva en la Constitución" en la colección dirigida por J.M. Ordoñez, "Comentarios a la Constitución española", Ed. Siglo XXI, en prensa.
2. Para un análisis valorativo de la sentencia *vid.* el trabajo de Baylos Grau y Desdentado Bonete en *Gaceta Sindical* nº 13.

X Congreso del PCE: la alternativa económica

Abandonar el marxismo como ideología transformadora de la sociedad capitalista conduce a los partidos obreros a renunciar a la lucha de clases como quintaesencia de la actividad política. Abandonarlo como método de análisis para entender la realidad y concebir una estrategia conduce a estos partidos a una desorientación y a una confusión política desastrosas. Es difícil determinar en cuál de estos aspectos el abandono resulta más peligroso para el movimiento obrero en cuanto a sus tareas reivindicativas, defensivas e históricas; pero, para el caso que nos ocupa, la cuestión no tiene sentido: la alternativa económica del PCE expuesta en la tesis 4 del X congreso carece ideológica y analíticamente de elemento marxista alguno. Intentar encontrar en ellas un camino para superar la crisis que aliente la esperanza de los trabajadores es una tarea vana. Descubrir los contrastes con lo que parece la ineluctable alternativa capitalista, que está propiciando el hundimiento del movimiento obrero, es una tarea harto difícil.

Pedro Montes

La alternativa del PCE parte de dos supuestos, ambos erróneos y ambos extremadamente peligrosos para elaborar una estrategia política. El primero, que es posible concebir una sociedad capitalista que elimine todas las secuelas que este régimen social conlleva. El segundo, que ante la crisis cabe una política económica que haga compatibles las leyes del sistema con las necesidades de los trabajadores, y que esa política puede establecerse mediante la colaboración de clases. De estos supuestos a reducir la lucha de clases a su expresión mínima y a confiar en la burguesía como un factor dinámico de avance social hay un paso inmediato. De estos supuestos se desprende una consecuencia política evidente, cuyos resultados saltan a la vista con dramatismo, y es la de que la burguesía encuentra un camino expedito para imponer la política económica que se adecua a sus intereses, los cuales, en una situación de crisis, vale la pena recordarlo, se concretan en aumentar la explotación de los trabajadores y en sanear o depurar el sistema productivo, ambos como expresión de la búsqueda de la elevación de la tasa de ganancia del capital. Esos supuestos vician toda la alternativa económica del PCE y la convierten en papel mojado como programa susceptible de movilizar y orientar la actividad política de los trabajadores.

Dado que las tesis económicas presentadas al X Congreso plasman la línea política seguida por el PCE desde el pacto de la Moncloa, y a la vista de los acontecimientos políticos ocurridos entonces, el juicio severo que merecen dichas tesis está de sobra justificado. Lo peor de ellas es que, a menos que se alteren en el transcurso de los debates y en el congreso, lo que parece improbable, seguirán sustentando la política del PCE en el próximo futuro, y en esas circunstancias no puede excluirse la posibilidad de un desastre en el movimiento obrero.

En lo que sigue, comentaremos el contenido concreto de las tesis económicas (1). A fin de facilitar la lectura crítica, mantendremos el orden expositivo de las propias tesis.

Los rasgos de la crisis económica en España

Parte del PCE de reconocer que la naturaleza de la crisis en nuestro país no es distinta de la "crisis mundial", aunque tenga rasgos específicos. Pobre y equívoca caracterización es la que hace. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que no se trata de una crisis mundial sino de una crisis generalizada del sistema capitalista. En segundo lugar, es preciso resaltar la naturaleza de esa crisis, que se trata de una crisis de sobreproducción capitalista inserta en una onda larga depresiva del capitalismo. Las deficiencias en la caracterización tienen importancia porque el PCE, por medio de ellas, pretende escurrirse de la denuncia obligada del sistema y porque trata de

no enfrentar su alternativa a las contradicciones y leyes que este sistema encierra e impone.

Las especificidades de la crisis en el capitalismo español, según el PCE, surgen de las características de la economía española durante el franquismo, con lo que hay que estar de acuerdo, y del papel desempeñado por los gobiernos post-franquistas, con lo que hay que estar en desacuerdo. Evidentemente la evolución del capitalismo en España durante la dictadura ha generado un sistema con una fuerte dependencia exterior (energía, materias primas, tecnología, capital), con un sector público insuficiente y orientado a proteger los intereses privados, con sector agrícola demencial y retardatario y con un aparato industrial comparativamente poco capitalizado y escasamente competitivo. La dictadura, creando unas condiciones inmejorables para la explotación, paradójicamente, sentaba las bases para el desarrollo de un sistema débil y muy vulnerable.

Respecto a la actuación de los gobiernos desde 1975, para el PCE, éstos, retrasando la toma de medidas y negándose a adoptar reformas estructurales han contribuido a agudizar la crisis. La interpretación de los hechos no puede hacerse así, por más que al PCE le interese presentarlos de ese modo para limitar su crítica a la mera actuación gubernamental. En todo momento la burguesía ha tenido conciencia clara, o cuanto menos el instinto despierto, de cómo enfrentarse a la crisis, evidentemente mirando siempre por sus intereses. Lo que ocurrió hasta 1976 es que la situación política, el ascenso del movimiento obrero y las reivindicaciones pendientes de las masas tras el fuerte desarrollo anterior no permitieron a los gobiernos recortar los salarios, reducir las prestaciones de la seguridad social y despedir a los trabajadores, sino que forzaron a todo lo contrario. ¿Cabe recordar como Villar Mir apuntaba a los salarios como causa y solución de la crisis? Hasta ese año, por otra parte se estaba en los comienzos de la crisis y sus secuelas, por tanto, eran incipientes. A partir de 1977, desde el pacto de la Moncloa, los acontecimientos son bien conocidos como para detenerse a detallarlos. Únicamente destacar que toda la política de los gobiernos de UCD ha estado orientada, fundamentalmente, a morder en los salarios y a facilitar y abaratar la flexibilización de plantillas. El retroceso del poder adquisitivo de los salarios y los 868.000 de puestos de trabajo que se han perdido desde 1978 son aspectos elocuentes de cómo la burguesía, cuando ha encontrado las circunstancias favorables, ha profundizado hasta el límite de lo posible en la política que conviene a sus intereses. Y esos intereses, en momentos de crisis, no son compatibles, como le gustaría al PCE, con la racionalización del sistema y

(1) El comentario se limita a los aspectos generales de la alternativa comunista. No se incluye el capítulo dedicado a la agricultura, que merece considerarse aparte.

su más justo funcionamiento. ¿Que no se han emprendido reformas estructurales necesarias y a tiempo? Pero esto no es por ceguera de la burguesía, sino porque no favorecían sus intereses (reforma agraria y fiscal), porque no podían imponerlas a los trabajadores (mercado de trabajo, reconversión de sectores) o porque implicaban fricciones entre la propia burguesía (sistema financiero, sectores industriales, gasto público). Poco a poco, los gobiernos han ido introduciendo las reformas que convienen a la burguesía (plan energético, reconversión, mercado de trabajo), en la medida en que se dirimen diferencias y luchas entre las fracciones burguesas y lo permite la relación de fuerzas frente al movimiento obrero.

En suma, la evolución de la crisis desde 1973 no es el resultado de la inoperancia, miopía o buena o mala voluntad de los gobiernos, sino que ha estado determinada por las peculiaridades del capitalismo español, la naturaleza de la crisis, las contradicciones del modo de producción capitalista y la lucha de clases. Las tareas políticas que se derivan de una u otra causa son las mismas. Según la primera, todo se reduce a una mera presión y crítica sobre la actividad gubernamental; la segunda entraña la movilización y la lucha de los trabajadores para no dejarse aplastar por la burguesía y sus intereses, lo que no entra en los presupuestos políticos del PCE.

El proyecto de sociedad del PCE y la alternativa económica

Este apartado de las tesis es el del despliegue de las banderas, las declaraciones de principios y la descripción de la tierra de promisión. Y hasta en esto, en las palabras, las tesis no pueden ser más decepcionantes y descorazonadoras. "Los comunistas defenderemos y lucharemos por un nuevo orden económico internacional y por un desarrollo que permita la independencia y el equilibrio en el concierto económico mundial de todas las áreas geográficas supranacionales". He aquí que el PCE ha descubierto en sus afanes teóricos un tipo de sociedad alternativo y distinto al capitalismo y el socialismo, *la sociedad del nuevo orden económico internacional*. Se incorporan así los comunistas a la legión de los demagogos que, incapaces de combatir al capitalismo y sus inexorables leyes, claman con buena voluntad e impotencia por redimirnos de sus secuelas. El PCE no reivindica el socialismo, sino una sociedad con los fundamentos sociales del capitalismo que mantenga los "equilibrios económicos", evite las "industrias contaminantes", "las ciudades gigantes", "el derroche", "la agricultura rentabilista degradadora del medio na-

tural", en resumen, una sociedad capitalista que evite "todas las manifestaciones del principio de eficiencia capitalista". Por mostrarse realistas, por dar a su alternativa una apariencia de accesibilidad, el PCE intenta cuadrar el círculo y se deja arrastrar al mundo de la utopía, intentando reformar un sistema que por su naturaleza no es reformable. Claro que en seguida llama al orden, por si alguno se hacía ilusiones, y nos recuerda que "sería irresponsable pensar que sólo hemos de ocuparnos de diseñar el tipo de sociedad futura, pasando por alto el tema de tratar de dar soluciones a los problemas de hoy día, dentro de la sociedad actual, y con las limitaciones que la actual correlación de fuerzas supone...". Poco más adelante, en las tesis las cosas se dejan claras del todo: "Es preciso, en suma, tener muy claro que la superación global de la crisis de sitúa en un horizonte temporal lejano, y que sólo podrá lograrse en el marco de un nuevo orden económico internacional". La sociedad soñada por el PCE queda así supeditada al cumplimiento imposible de unas condiciones en las que no se puede influir (nueva justificación de pasividad), y referida a un plano atemporal. Sin embargo, ello no le impide al PCE calificar ese objetivo como el plano supremo de una estrategia articulada en la que un segundo plano, o medio, representa las medidas necesarias de fondo que han de emprenderse para hacer posible su sociedad, y en la que en un primer plano se sitúan las acciones inmediatas que es preciso adoptar para la defensa de los intereses de los trabajadores, entre las cuales un plan contra el paro resalta como fundamental. El PCE cree haber formulado un programa coherente, gradualista y perfectamente articulado en etapas, cuando no presenta más que un catálogo de medidas inconexas entre sí e incoherentes política y económicamente con los fines que intentan lograr.

Las líneas fundamentales de una alternativa de progreso a medio plazo a la crisis económica

Ante la encarnizada lucha de clases que se libra en una sociedad capitalista en una situación de crisis, el PCE cree haber descubierto fórmulas mágicas con las cuales superarla y hacer compatibles los intereses contrapuestos y enfrentados de esas clases. Para el PCE, la clave de la solución de la crisis está en un fortalecimiento del sector público, así como en la puesta en marcha de mecanismos de acción concertada.

El reforzamiento del sector público, según el PCE, resulta necesario, por un lado para impulsar la inversión productiva para el desarrollo de los sectores estratégicos en la década de los años 80 (no señala cuáles son), pues la reconversión industrial (no se sabe por qué) no puede lograrse tan sólo mediante el mecanismo de mercado, y, por otro lado, para incrementar las funciones asistenciales del Estado. En estas propuestas no se puede discrepar con el PCE, aún cuando los móviles de las inversiones públicas no deberían supeditarse, en su lenguaje, a los criterios de eficiencia capitalista, sino destinarse a atender necesidades colectivas y a crear puestos de trabajo. Ahora bien, lo que es sustancial en este punto es entender que las inversiones públicas no estrictamente productivas y los gastos públicos asistenciales representan gastos que reducen la plusvalía y constituyen, por tanto, un aspecto esencial del conflicto entre las clases en las salidas a la crisis económica. No está de más resaltar cómo en las actuales negociaciones para la concertación de una política de empleo el gobierno ya ha hecho saber los límites que impone el déficit público, y cómo entre las reivindicaciones fundamentales de la CEOE se halla el control del gasto público. Estando ante uno de los puntos claves de la confrontación de intereses de clase no se entiende cómo el PCE puede encontrar una solución tan falsa como la de confiar en que un Consejo de Planificación dirima un conflicto de tal naturaleza. No se entiende desde una perspectiva de clase, pero se comprende inmediatamente si lo que se pretende es la colaboración de clases y, en última instancia, otorgar a la burguesía los balones de oxígeno que le sean necesarios para superar la crisis.

La comprensión del PCE por los problemas de la burguesía se pone de manifiesto también en la preocupación que tiene porque el déficit público no se descontrola, pero, como al mismo tiempo no exige una reforma radical profunda, el PCE está



Manos II. 1973.

poniendo los límites de su propia alternativa de aumentar los gastos públicos. Todo lo que tiene que proponer el PCE en materia fiscal es una insignificante reforma técnica (la implantación del impuesto sobre el valor añadido), la revisión del impuesto sobre donaciones y sucesiones (sin avanzar criterios) y hacer definitivo el ridículo impuesto existente sobre el patrimonio (el 0,9% de los impuestos de 1980). Y completando tan drásticas medidas para resolver la crisis, el PCE propone un conjunto de modificaciones administrativas tan decisivas como la reforma del Tribunal de Cuentas, el aumento de plantillas de los inspectores de Hacienda, la racionalización de los cuerpos funcionarios, una ley rigurosa de incompatibilidades, legislación sobre delitos económicos y reforma y estatuto de la empresa pública.

La moderación programática del PCE es desalentadora. Cuando se compara el pacto programa con el que Mitterrand accedió a la presidencia de Francia con las propuestas de las tesis del PCE, si éstas son reformistas, aquél es revolucionario. Por ejemplo, las nacionalizaciones. Frente a la nacionalización total de la banca, de las compañías de seguros, y de los nueve grupos industriales más importantes que llevará a cabo Mitterrand, el alcance socializador del PCE no llega más que a las energías de base del carbón y nuclear y a la red de distribución de la energía eléctrica.

El aspecto técnico de más envergadura en la alternativa del PCE, en este segundo plano, es la propuesta de reconversión de los sectores en crisis. Tal propuesta es compartida por la burguesía y se justifica estrictamente en términos de la eficiencia productiva necesaria para mantener y mejorar la productividad del sistema. O sea que, por expresarlo más correctamente, el PCE hace suyos los planteamientos de la burguesía y el gobierno, que se adecúan a las necesidades objetivas del capital para remontar la crisis. Lo que añade el PCE son algunos condicionamientos adjetivos al proceso de reconversión, que pueden mitigar las consecuencias de salvajes reestructuraciones, pero no alteran el sentido capitalista de la operación. La aceptación y cumplimiento, por lo demás, de esas condiciones —la concertación de los planes sectoriales, la dilatación en dos o tres años de los efectos negativos, la necesidad de inversiones complementarias para la creación de puestos de trabajo alternativos...— están relacionados con la capacidad negociadora de los sindicatos y la presión permanente que sea capaz de ejercer el movimiento; por lo que, aun para la política de colaboración de clases que propugna el PCE, el reforzamiento de la clase obrera es indispensable, y ese reforzamiento, lamentablemente para la coherencia política del proyecto comunista, no es independiente de las propias alternativas defendidas.

Por último, en el programa a medio plazo del PCE hay que destacar su apoyo a la incorporación a la CEE, por razones no explicadas de "estrategia política y económica", a excepción de las manidas "consolidación de la democracia" y "defensa de los derechos de los trabajadores españoles en los países de la CEE". Parece como si el PCE, incapaz de dirigir un auténtico proceso de consolidación de la democracia, intentara suplir las deficiencias de su política colocando las libertades de los pueblos del estado español bajo la protección de las burguesías europeas y de las instituciones de la CEE. Hay, en fin, en el programa del PCE una toma de posición contra las inversiones extranjeras ligadas a la alta tecnología, cuya justificación ni se da en las tesis ni alcanzamos a entender. El problema de las inversiones extranjeras, de cualquier tipo, es una cuestión de supeditación de sus actividades a los intereses de la población, lo que abre un tema que no se dirige por el carácter de las inversiones.

El programa a medio plazo contenido en las tesis del PCE, en suma, no presenta, a nuestro juicio, una alternativa sustancialmente distinta de la que está intentando imponer la burguesía —reconversiones industriales con criterios capitalistas, orientación al Mercado Común—, y, en los aspectos en que lo es, la moderación de sus propuestas resulta decepcionante. Difícilmente con ella se movilizaría a los trabajadores (si ésa fuese la intención del PCE) por lo que ha de juzgarse como políticamente inviable, ya que, pese a su moderación, esas propuestas entran en contradicción con las necesidades objetivas del capital para salir de la crisis. Ante esta hay dos alternativas, sendas de clase, una a favor de la burguesía, y

otra a favor de los trabajadores. El intento de hacerlas compatibles, articulado políticamente en la colaboración de clases, es un deseo que acabará frustrado, como ya inequívocamente lo han ido demostrando los acontecimientos posteriores al pacto de la Moncloa.

En este gran epígrafe de las tesis sobre las líneas fundamentales de la política a medio plazo se incluye el apartado de la defensa de los trabajadores parados, política de empleo y distribución de la renta, que debe entenderse como las líneas de acción inmediata que propugna el PCE para paliar los efectos de la crisis sobre los trabajadores. Lo que acaba de afirmarse para el plan a medio plazo es extensible a lo que se defiende como plan a corto plazo, resultando incluso más decepcionante, como consecuencia del contraste entre la gravedad de los problemas que asolan a los trabajadores y las falsas e inoperativas soluciones que se apuntan.

En este plano del programa del PCE y en lo referente al paro confraternizan las tesis con las posiciones defendidas por los dirigentes de CCOO, de modo que el plan de solidaridad nacional (PSN) del sindicato pasa a integrarse programáticamente en la línea del PCE. En esta revista (nº 3) ya se ha analizado críticamente dicho plan, por lo que se renuncia a repetir los argumentos que, en nuestra opinión, lo convierten en una alternativa inválida para solucionar el problema del paro en sus diversos aspectos (2). Baste decir que el objetivo declarado del PSN no es reducir los casi dos millones de parados sino impedir el futuro crecimiento del desempleo. En beneficio del PSN hay que resaltar la coherencia entre sus modestas proposiciones para generar empleo —reducción mínima de la jornada y de la edad de jubilación, supresión de horas extras, penalización del pluriempleo— con la clara conciencia de que el paro no se reducirá, no obstante, cabe dudar de que con esas medidas se detuviera su aumento. Tales objetivos, por otra parte, muestran lo impracticable, aparte de lo erróneo, de la orientación de hacer asumir sacrificios a los trabajadores ocupados como solidaridad con los parados. Como el PSN no resuelve el problema del paro y no defiende la cobertura indefinida y completa de los parados, resulta que el PSN y las tesis del PCE no dan respuesta a la miseria en que están sumidos cientos de miles de trabajadores que no gozan de asistencia pública y a la que se verán arrasados otros muchos a medida que caduquen los plazos del seguro de paro. Grave y funesta deficiencia programática de un partido que hunde sus raíces entre los trabajadores más desheredados.

La cuestión de la distribución de la renta como parte final del programa aparece como el descabello del mismo. Ni una idea concreta ni mucho menos clara sobre cual es la distribución de la renta que se pretende. Un punto de esta naturaleza, sobre el que gira permanentemente la lucha de clases, no da lugar a ninguna toma de posición comprometida del PCE. Es más, debe extraerse la conclusión de que la ambigüedad y confusión ideológica de las proposiciones responde al deseo de los dirigentes del PCE de dejarse las manos libres para en todo momento adoptar la política que consideren oportuna sin conculcar principios programáticos. Así, para el PCE, "adquiere especial importancia (...) una estrategia progresista de los aumentos de productividad general de la economía (...) el diseño de mecanismos de redistribución que, además de profundizar en la reforma fiscal, superen el ámbito tributario y permitan el trasvase desde unas áreas a otras y desde unas empresas a otras en forma directa", siendo "un aspecto fundamental (...) la distribución territorial". Frente a estas propuestas, ausencia total de referencia a la política salarial y nula mención a los gastos de transferencias del sector público.

Concluye de este modo, desahuido totalmente, un programa que resume expresivamente dos rasgos fundamentales de la política del PCE: la desorientación ideológica en que se mueve este partido y la falta de firmeza y convicción en la defensa de lo que propugna. Ambos rasgos, desde luego, están relacionados. ■

(2) Ver también el comentario en el número 225 de COMBATE.

El PCI y su papel en la situación política italiana

E. Pellegrini es miembro del Buró Político de la Lega Comunista Revolucionaria, sección italiana de la IV Internacional, y director de su semanario, Bandiera Rosa. El camarada Pellegrini ha estado largo tiempo en el PCI, proveniente de las filas de la juventud comunista (FGCI), a las que se afilió siendo un niño. De 1961 a 1968 fue redactor del diario del PCI, L'Unità, cubriendo también cargos de responsabilidad en la célula del periódico y en la sección local (la zona de Tiburtina, una de las pocas industrializadas de Roma).

Entrevista con Edgardo Pellegrini

SE ha hablado mucho de lo que se ha dado en llamar el "giro" de la dirección del PCI. ¿Se trata realmente de un giro? y, si es así, ¿de qué línea a qué línea?

—Yo no diría que se trata propiamente de un giro, salvo verbal. Berlinguer intenta convencer a la base del partido del hecho de que la oposición al gobierno será "firme". Pero "firme" es una palabra que tiene dos significados; puede significar "intransigente" y puede significar "inmóvil", y es más bien esto último lo que parece que corresponde a la línea adoptada por la dirección.

Porque, para el PCI, la base inquieta no es el único problema. El otro problema, de importancia igual, es el de la relación con las fuerzas de la burguesía, a las que el PCI quiere dar garantías de que está "maduro para gobernar".

Las dos exigencias son ampliamente contradictorias, y es por eso por lo que el PCI se encuentra en un punto muerto y no logra producir una línea política. Cualquier iniciativa que estimulase una recuperación del movimiento de masas levantaría un clamor sobre la "inmadurez" del PCI, sobre los "restos estalinistas", etc. Imposibilitado para jugar un papel movilizador, el PCI debe entonces refugiarse en la dureza verbal. Esto, sin embargo, no le evita la insatisfacción de amplios sectores de base, porque, en última instancia, es fácil endurecer los adjetivos pero con ello no basta para ocultar la falta de una línea política; o, mejor dicho, para ocultar el hecho de que la única línea política del partido es la subordinación a las exigencias de la burguesía en crisis.

Tomemos por ejemplo la cuestión del gobierno: a partir del terremoto de Irpinia y de que volvieran a saltar a la luz las escandalosas responsabilidades de los democristianos en la no reconstrucción de zonas ya devastadas en el pasado por movimientos sísmicos, así como las inmediatas operaciones especulativas de los democristianos en la administración y sus relaciones con los estafadores, el PCI ha lanzado la consigna de que "otra Italia debe gobernar". ¿Cuál? El PCI ha explicado que se debe ir a un "gobierno de los honestos". Pero ¿deben estar los democristianos en este gobierno, o no? Hay por lo menos tres tipos de respuestas: 1. no, no como partido; 2. los democristianos honestos sí; 3. sí, si la Democracia Cristiana se purifica de deshonestos.

Y no es que estas tres respuestas correspondan a tres orientaciones diversas existentes en la dirección del partido. ¡Unas y otras han sido utilizadas también por el mismo dirigente, según el momento y el lugar específico (televisión, prensa de esta o aquella tendencia) en

que tenían lugar la entrevista o según la plaza en que pronunciaba el discurso!

El que no se trata de un giro aparece todavía más claramente en la reunión que ha hecho el PCI con sus cuadros de FIAT, a cuatro meses de la derrota. También aquí hay dureza verbal, denuncia de las concesiones del Partido Socialista; pero ¿y la línea? La misma que ha llevado a la derrota: es fundamental —ha dicho Borghini, el nuevo teórico de economía industrial del PCI, que ya fue secretario de la juventud comunista— el saneamiento de FIAT y del sector del automóvil y su relanzamiento: La FIAT debe presentar un "plan empresarial creíble", y el gobierno... un plan de austeridad creíble. Si esto se hace, el PCI colaborará con el gobierno y con la dirección de la FIAT para resolver el problema del "necesario aumento de la productividad".

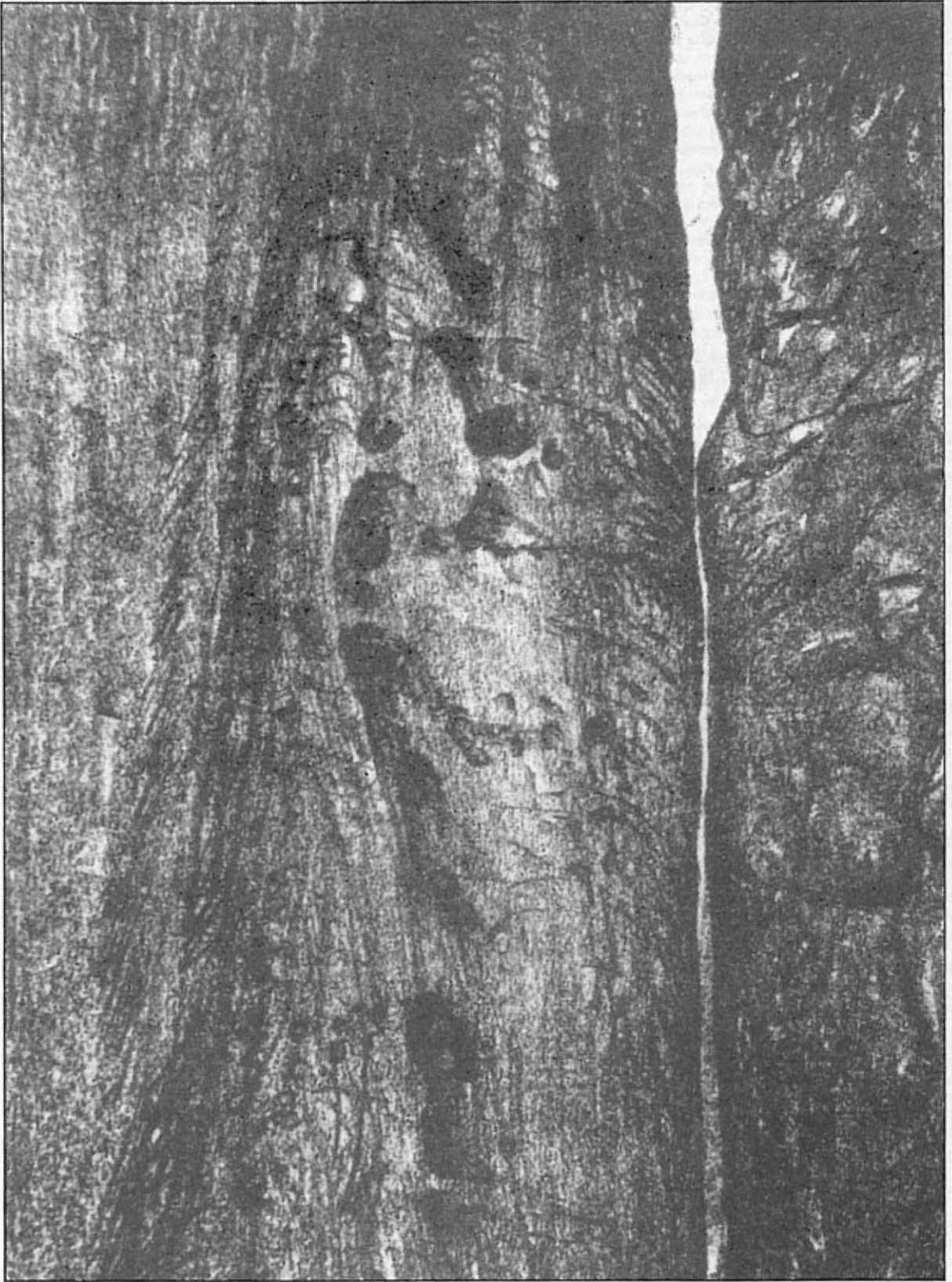
Sobre la austeridad, en fin, el PCI hace ya mucho tiempo que se ha convertido en su abanderado; en el parlamento y en el sindicato. ¿Qué es lo que pide como contrapartida? Que sea una austeridad "que implique a todos". En otras palabras, que los patronos sean comprensivos y hagan también ellos un pequeño sacrificio. Los trabajadores asumirán su parte, porque son responsables; más bien la han asumido ya.

—¿Cuáles son actualmente las relaciones entre el PCI y el PSI? ¿Existe o no, la posibilidad de avanzar, en un plazo razonable, la perspectiva de algo más o menos parecido a un programa común de los dos partidos?

La característica principal del comportamiento de la dirección del PCI frente al PSI es la de llamar a la secretarización de los propios militantes y denunciar y atacar al PSI mucho más de lo que se ataca a la misma DC. El PSI, por su parte, no se queda atrás. El secretario del grupo parlamentario socialista, Balzamo, ha llegado a escribir recientemente la "legitimidad democrática" del PCI queda gravemente comprometida por los juicios políticos negativos que emite sobre el gobierno y, en particular, sobre el PSI.

Y sería bueno no olvidar que el mismo presidente de la República, Sandro Pertini, socialista, ha llegado a declararse convencido de que la matriz internacional del terrorismo es la URSS. Y puesto que —y ésta es la otra acusación— el PCI no ha roto completamente los lazos con Moscú, he aquí que entonces se deduce que el padre espiritual del terrorismo italiano es el PCI.

Hay algo de grotesco en todo esto. El PCI ha empleado montañas de palabras y columnas enteras de plomo en *L'Unità* para describir al PSI como un partido subalterno al terrorismo, débil, sospechoso incluso por el "garantismo excesivo" de algunos de sus exponentes. La acusación le ha sido devuelta brutalmen-



Stonehenge. 1973.

te. Y es sobre todo en este terreno, no en el de la economía y la dirección política del país, en el que se desarrolla el debate (mejor sería decir la reyerta) entre los dos partidos obreros mayoritarios.

No es algo aislado: es precisamente en el terreno de la lucha contra el terrorismo donde el PCI puede pre-

sentarse ante la burguesía como el más firme sostenedor de este marco institucional, como el guardián más intransigente del orden establecido. Que esta tarjeta de visita no le sirve mucho, es algo que se ha visto precisamente en estos días, cuando la prensa burguesa ha convertido las declaraciones de Pertini en una verdade-

ra campaña contra el PCI...

En realidad, la única forma de arrastrar al PSI a una confrontación y de lograr un eco en su base sería proponer una línea de unidad de la clase, de ruptura del acuerdo DC-PSI, de rechazo a la austeridad. Cosas todas ellas que el PCI, por los motivos que expuse en mi primera respuesta, está bien lejos de hacer.

—**Más allá de las especulaciones sobre los lazos del PCI con Moscú, ¿cómo se ha caracterizado últimamente la línea de este partido en el campo internacional?**

Podemos ver específicamente algunos casos clamorosos: El Salvador, Polonia, el cuerno de África y la OTAN. Sobre El Salvador, hay que recordar que Italia es el único país de la comunidad europea que mantiene regularmente un embajador ante la junta de Duarte. No solamente por el importante papel que juega la DC italiana en la internacional democrática, sino porque Italia arma a los militares salvadoreños: los carros de combate de Duarte han sido fabricados por la FIAT, por ejemplo. Bien: pues el PCI pide que el embajador "sea llamado a consulta a Roma", pero no pide la ruptura de las relaciones diplomáticas; no escribe una sola línea sobre el papel de la industria armamentista italiana en El Salvador; distingue entre una DC alienada con los militares y una DC "democrática"; defiende la negociación como única solución, y, en particular, presenta al coronel Majano como una especie de héroe libertador. Está prácticamente ausente de los comités de solidaridad con el FDR y el FFMLN (en cuanto partido: hay, en cambio, militantes de base).

En cuanto a Polonia, es clarísimo que el PCI recomienda como solución una normalización negociada entre Kania, el episcopado polaco y *Solidarnosc*. Es cierto que trueno contra la URSS, llamando a que no intervenga, pero de hecho no apoya las reivindicaciones del proletariado polaco. Empuja a favor de la moderación. Admite repetidamente que en los sindicatos autogestionados existen sectores "extremistas" peligrosos para la paz social y para la paz *tout court*.

La posición sobre el cuerno de África es aún más singular. En Italia se trata de un problema bastante sentido, sea por el papel colonial que Italia ha jugado en este área hasta la segunda guerra mundial, sea por la presencia de un elevado número de trabajadores emigrantes eritreos y también etíopes. Hasta hace algún tiempo, el PCI apoyaba abiertamente la independencia de Eritrea, aunque no emitiese un juicio claro en contra de la dirección etíope. Después ha habido un giro: la Etiopía de Mengistu es exaltada acriticamente, aunque no se llegue a excomulgar a los frentes de liberación. En cualquier caso, tampoco aquí falta el llamamiento a la "normalización pacífica" de la cuestión.

Sobre la OTAN, para terminar, el PCI continúa repitiendo que Italia forma parte del "sistema democrático occidental" y que el partido acepta como marcos sus instituciones y tratados; también la OTAN, por consiguiente. Salvo que en su interior existirían, naturalmente, sectores "extremistas" a combatir, verdaderas excrecencias de un cuerpo que, si no del todo sano, es considerado al menos necesario. En la movilización reciente en una zona de la Italia del nordeste, San Vito al Tagliamento, próxima al lugar donde deberían instalarse los misiles *Pershing* y *Cruise*, el PCI ha apoyado la movilización popular a favor de que los misiles no fueran colocados "en la zona", ¡pero se ha guardado mucho de decir que no debiera haber en absoluto misiles americanos en Italia!

Es cierto que la llegada de Reagan a la presidencia y

el relanzamiento abierto a la agresividad imperialista plantean problemas a un PCI que, en los últimos años, había presentado el mundo en forma, digamos, un tanto idílica. Su política internacional era la prolongación pura y simple de su política interior de subordinación a las exigencias de la burguesía a cambio, no ya siquiera de reformas, sino de simples promesas de buena conducta.

—**¿En qué terreno tiene el PCI mayores problemas con su base, en el interno o en el internacional? ¿Existen diferencias significativas en la cumbre del partido?**

Los periodistas han inventado una fórmula para denominar a los "duros" del PCI: "kabulistas", es decir, defensores de la presencia de tanques de Moscú en Kabul. En suma: prosoviéticos. Pero si se habla con estos compañeros se ve enseguida que la mayor parte de ellos no serían de hecho "varsovistas", vale decir que no aceptarían la presencia de los tanques de Moscú en Varsovia. La lucha de los obreros polacos es vista con gran simpatía, aunque produzca mucho fastidio toda esa cantidad de vírgenes. De cualquier modo, no creo que hoy las principales contradicciones y reacciones en el PCI —aunque también las haya— tengan lugar en el terreno de la política exterior.

Es sobre todo en el sindicato donde crece una oposición de los cuadros obreros de base contra la política del partido. Hemos podido palparlo directamente en la FIAT, y volveremos a verlo en estos días en Montedison. Las opciones y comportamientos del PCI en las fábricas chocan duramente con lo que han sido las experiencias y adquisiciones de los obreros comunistas a lo largo de diez años de luchas.

La crisis —económica y política— de la dirección burguesa italiana impone una reflexión sobre qué salidas ofrecer, en términos de programa de gobierno; el militante comunista no encuentra respuesta a esto en su partido. Por eso ahora la disidencia no es ya sólo insatisfacción o desacuerdo con tal o cual punto, pero en el marco de la aceptación general de la línea; hoy la disidencia es mucho más profunda, y se refiere a problemas centrales.

Ahora no se polariza en una corriente precisa. El PdUP, cada día más a la zaga del PCI, no se presenta como una alternativa. Democrazia Proletaria está demasiado debilitada y, sobre todo, tiene una línea oscilante, no se pronuncia sobre los temas de fondo y, por lo tanto, no resulta atractiva. Nuestra sección, la LCR, no tiene todavía la dimensión ni la incisividad para aparecer como un polo de atracción. Así, los militantes más decididos no pueden hacer otra cosa que permanecer en el PCI. Pero esto no significa que no haya crisis, ni que dejen de acelerarse los desprendimientos.

En cuanto a la cima, la respuesta es negativa: es verdad que un desarrollo de la disidencia de base llevará a distintos sectores del aparato a tomar cuenta de manera desigual de las presiones y, por tanto, abrirá contradicciones de peso también en la dirección. Pero, hoy por hoy, ninguno de los dirigentes más importantes se ha hecho portavoz de un programa sustancialmente distinto del de Berlinguer. ■

Milán, 23 de febrero de 1981

(Traducción: M.F.E.)

El pablismo y la burocracia ugetista

El presente trabajo es un capítulo del libro de J. Andrade La burocracia reformista en el movimiento obrero, publicado en 1935 y no vuelto a editar desde entonces. Esté o no de acuerdo con sus ideas, el lector podrá comprobar que Andrade fue uno de esos ejemplos de rara avis que han sido los dirigentes de entidad teórica dentro del movimiento obrero español.

Juan Andrade

EL socialismo español tuvo desde sus comienzos un matiz especial, que le daba características completamente nacionales, mejor dicho, locales, incluso podemos decir que madrileñas. Basado genéricamente en una doctrina universal, en acuerdos internacionales de Congresos y Conferencias, sin embargo, en su aplicación local moldeaba la doctrina y los acuerdos de una manera restringida, estrecha, deformada. Se revestían los principios de todo un ropaje vulgar, que los hacía anticonfortables para las sensibilidades políticas vibrantes e inquietas; se los destruía en esencia al hacerlos pasar por unas reglas orgánicas limitadísimas y por el prevailecimiento de unas costumbres y hábitos retorcidos y adocenados. Precisamente por esa psicología peculiar del reformismo español, puramente autóctono en el fondo, puede calificarse al socialismo oficial en España de pablismo, es decir, debe y puede dársele el nombre de aquel que lo estructuró, lo creó espiritualmente y dió la educación política a los primeros cuadros, e incluso a la mayoría de sus dirigentes actuales, que orgullosamente reivindicaban su nombre.

El socialismo, el ugetismo español, durante el proceso de su desarrollo ha revestido frecuentemente en su actuación práctica los caracteres de una organización obrera de tipo filantrópico, con un programa universal que repetía, pero no adaptaba. Se convertía en su propaganda en una mixtura sensiblera y llorona de obrerismo primitivo, que planteaba sus reivindicaciones en un plano de generosidad. Se recortaban las alas a los principios y a las aspiraciones que los mismos suscitaban, para impedir los vuelos de largo alcance que lograban remontar en el resto de Europa, y que aquí quedaban encerrados en una aplicación plebeyana. De ahí esa tardanza conocida en ponerse al ritmo de los demás partidos europeos, de esquivar las grandes discusiones internacionales, y hasta, en casos, de desconocerlas.

Consignemos de paso que, en la actualidad, mientras la polémica ardiente que se lleva a cabo en el interior del partido socialista y de las juventudes se mantenga casi exclusivamente en los límites de una discusión para averiguar qué tendencia se mantiene más fiel a las concepciones y métodos de Pablo Iglesias, el pleito político litigado no pasará de tener un carácter casero, pequeño, intrascendente. El problema político debe estribar fundamentalmente en superar el clásico pablismo, en enfrentarse con las grandes corrientes modernas del socialismo, y en adoptar posiciones concretas ante ellas. El obrerismo rudimentario del pablismo está sobrepasado por todo el curso posterior del movimiento obrero nacional e internacional. Corresponde, en lo económico, a una época de artesanado que ha desaparecido; responde, en lo político, a unas nociones elementales de la lucha de clases que el proceso histórico ha enriquecido. El que el criterio de

unidad a ultranza de todos los intereses reformistas que preconizó constantemente Pablo Iglesias esté en plena bancarrota, es ya de por sí el síntoma más elocuente de la profunda transformación que se ha operado en el campo proletario.

El tono opaco impreso a nuestro socialismo por Pablo Iglesias explica en gran parte que el anarquismo obtuviese en España la fuerza y el ascendiente que no logró adquirir en ningún otro país europeo. El obrero avanzado, con inquietudes revolucionarias y progresivas, desertaba en el pasado voluntariamente del pablismo para abrazar una doctrina y una táctica que creía más en armonía con sus aspiraciones de clase y sus anhelos humanos. En los países en que los partidos socialistas conservaron su aparente fisonomía marxista, el anarquismo, con su ingenua doctrina, no ha podido desarrollarse y alcanzar ascendiente entre las masas obreras. El anarquismo en España, con todos sus errores, se presentaba a los trabajadores con fuertes inquietudes como una mayor garantía que el partido socialista obrero. Los "adormideras", como se llamaba a los pablistas a comienzos de siglo, no inspiraban simpatía ni ofrecían cordialidad y comprensión.

Precisamente por su carácter obrerista, que no obrero, el pablismo era profundamente antiintelectual; pero, entendámonos: no enemigo del arribismo intelectual solamente, sino de todo lo que representase inquietud por los problemas teóricos y de lucha de clases. Los equipos dirigentes de los partidos socialdemócratas europeos han estado integrados principalmente, y aún lo están al presente, por elementos intelectuales. El abogadismo al estilo de Paul Boncour, por ejemplo, fué la principal plaga de los grupos dirigentes de la Segunda Internacional. Ellos llevaron a los partidos, en la mayoría de los casos, reminiscencias de su educación de clase, prejuicios que inocularon en el movimiento obrero. Fueron también ellos los propagadores del electoralismo socialista, que desde antes de 1914 y actualmente corroe a los partidos socialistas. Fué un abogado, Millerand, el primero que planteó prácticamente el problema de la colaboración socialista.

Sin embargo, el pablismo, o sea nuestro socialismo nacional, veía en el intelectual, más que estos defectos, otros peligros. El intelectual era para el pablismo un removedor de la quietud plácida del partido, y, sobre todo, de la modorra sindical al calor de la base múltiple. Era el intelectual, además, un sugeridor de problemas, un iniciador de la discusión en torno a las polémicas de la socialdemocracia europea; era, en suma, un perturbador de la indiferencia teórica. se le rechazaba, no por lo que precisamente hubiera en él de retardatario, de prejuicios, sino por lo que suponía de progresivo. Desde sus comienzos se pudo observar esta

displicencia en torno a la atracción e influjo de los elementos intelectuales. Pocos hombres procedentes de la cátedra o de las profesiones liberales se asociaron al socialismo en España; pero el fenómeno no fué debido seguramente a un despegue completo por las ideas socialistas, sino a la hostilidad tácita que encontraban en sus medios.

Partiendo de una mentalidad artesana, Pablo Iglesias logró estructurar una organización disciplinadamente hermética, que daba satisfacción a lo que corrientemente se llama obrero pulcro y buen padre de familia. Se proyectaba sobre los militantes una educación humana pequeño-burguesa. Se valorizaba más, con arreglo a la moral pablista, al obrero no fumador que al proletario inquieto, revolucionario y combativo. El tipo de obrero al que en el régimen dictatorial de Primo de Rivera se premiaba con la medalla del Trabajo por sus reiterados servicios en una misma empresa, era moralmente y en potencia un obrero pablista cien por cien. El pablismo no concebía, ni concibe la "bohemia revolucionaria" del proletario que se ve obligado a emigrar de un taller a otro por su espíritu de indómito rebelde. El pablismo es, por otra parte, agrio y anticordial.

Se ha elevado a categoría política por los viejos socialistas, con la ferviente e interesante colaboración actual de la Prensa burguesa, lo que pudiéramos llamar moral pablista. Oyendo argumentar a sus partidarios en torno a este tema, no encontramos diferencia alguna con el sentido que la pequeña burguesía, la clase media, da a la moral. Es la misma moralina la que transpira a través de sus palabras; es idéntica limitación de mentalidad y semejante cretinismo obrerista. Entre ambas concepciones existe una gran semejanza. Los matices del ser social son exactamente igual de incomprensidos. Viven apegados a la tradición y temen toda inquietud que venga a sacarles de su nivel de vida espiritual. Ante la semblanza que nos hacen de Pablo Iglesias, y que responde a la realidad, su personalidad pierde todo rasgo humano.

Aparte del amarquismo, que tradicionalmente

persiguió una campaña de ataques contra el socialismo, más plagada de injurias que de argumentos políticos, en el campo proletario no se ha realizado una crítica vital y acertada respecto a lo que el pablismo ha significado en general en el movimiento obrero español. El partido comunista se fundó en España cuando Pablo Iglesias habíase visto obligado a abandonar la lucha política a consecuencia de su salud y ancianidad. La crítica comunista contra el socialismo se hizo, por éstas y otras circunstancias, principalmente a base de la argumentación contra la socialdemocracia internacional, pero sin tratar de ahondar y reseñar las características especiales que el pablismo presentaba en España, y las tendencias burocráticas que en potencia encerraba. Las luchas posteriores han obligado a centrar la crítica en la política diaria y a olvidar el análisis de lo que origina los errores presentes. Tampoco nosotros podemos detenernos demasiado en este tema, porque escapa a la finalidad del capítulo, que es meramente señalar la importancia que el pablismo ha tenido en la formación y desarrollo de la burocracia sindical ugetista.

La nueva generación intelectual que se ha incorporado recientemente al socialismo adopta también una actitud de aparente veneración al pablismo. Sin embargo, para nosotros, dicho culto a la personalidad histórica tiene más de fingido que de sincero. Es un sometimiento "político" hacia un valor convenido. Están la mayoría suficientemente enterados del curso del socialismo en los demás países, del retraso en el desarrollo del nuestro, de los defectos y estrechez espiritual del pablismo y de sus divulgadores burocráticos actuales, con los cuales constantemente tropiezan, para lealmente aceptarlo, propagarlo y someterse. Pero el poder ilimitado de la burocracia, cuyos intereses administrativos coinciden enteramente con el pablismo, y por lo cual se convierte en su más reiterada defensora, hace que para gozar del favor de ella tengan estos elementos intelectuales que, por lo menos en palabras, rendir culto al apóstol. Y así se explica que contribuyan directamente a la formación de mito y a su veneración.

Joaquín Maurín ha sido el primer escritor obrero que en un libro (1), y aunque sólo de una manera accidental, ha insinuado el pensamiento de la nueva generación revolucionaria respecto al papel desempeñado por Pablo Iglesias y a sus concepciones obreristas en el seno del movimiento proletario español. Maurín, líder destacado del proletariado catalán, se ha educado políticamente al margen del ambiente político de la Casa del Pueblo de Madrid. No interpreta únicamente, por tanto, la opinión de su generación revolucionaria, sino también el sentimiento del proletariado catalán, que, a través de los últimos años del siglo pasado y de los transcurridos del actual, supo librarse del fetichismo del pablismo, que encadenó y encanijó el movimiento sindical y socialista madrileño.

El pablismo, en España, se ha distinguido esencialmente por una indigencia teórica bochornosa. Pero no es lo peor la existencia de la falta de teoría, sino que se congratulaban de ello, y algunos se felicitan todavía, y no se realizaba esfuerzo alguno por repararla. Ni siquiera los profesores y escritores que se han incorporado después al socialismo se han preocupado de llenar esta laguna (2).

Ramos Oliveira, que ha pretendido dar una explicación teórica marxista a toda la política del socialismo español, llega incluso a ensalzar la indigencia intelectual del pablismo (3): "A mí no me alarma que no tengamos una copiosa bibliografía socialista nacional. A



Refugios.
Escena de durmientes: mar de personas dormidas. 1941.

la postre, el socialismo es una doctrina internacional concentrada en la obra de Marx y en otros libros que pudiéramos llamar complementarios, de otros socialistas. Con lo que se ha escrito, bien aprovechado aquí, hay material suficiente para la propaganda y para el estudio de nuestras ideas". Y después, el mismo Ramos Oliveira intenta justificar aún más la conducta analfabeta del pablismo: "Los socialistas españoles estamos en condiciones de gritar: "¡Pobres, pero honrados!" Pobres en bibliografía, pero marxistas. Pobres en literatura socialista, pero seguros y convencidos de nuestra función social. Pobres en libros, más pobres que los socialistas extranjeros; pero conscientes en la acción, científicos en la táctica, también en dimensiones superiores a muchos socialistas de la Internacional".

Esta declaración, de la más pura estirpe pablista, es, en realidad, el reconocimiento franco de un hecho y la exposición sincera de un pensamiento general. De una manera más o menos consciente, ha sido la conducta que ha seguido siempre el socialismo español, inhibiéndose de aplicar los principios a las situaciones concretas nacionales. Se abandonaba la cultura política, para entregarse por entero a los aspectos administrativos de la organización. De ahí esa limitación de aspiraciones que ha caracterizado a los viejos cuadros y que les ha privado de atractivo proselitista, incluso a los ojos de núcleos de trabajadores; de ahí también ese espíritu estrictamente obrerista que le ha distinguido siempre.

La concepción de la sociedad futura, forjada por los funcionarios pablistas, no es realmente ni siquiera la que se deriva de los esquemas marxistas elementales. Esta es una idea algo abstracta, que ni ellos mismos comprenden. Es la que utilizan para la propaganda y que han aprendido en los epítomes más vulgares. Aprende uno a averiguar su verdadera aspiración del régimen del porvenir a través de sus conversaciones, y hasta de algunos de sus artículos. Se deduce también de su género de vida y hasta de sus predilecciones humanas.

El pablismo reivindicaba orgullosamente para él la designación de "socialismo de blusa y alpargata". Esta expresión no simbolizaba exclusivamente la contextura y composición fundamentalmente proletaria del partido. No tenía el mismo sentido, y mucho menos el mismo alcance, que cuando Lenin se refería a los "proletarios de manos callosas". En el pablismo, la frase rebosaba ese fondo de humildad filantrópica que tanto se ha manifestado a través de sus expresiones; esa tendencia a la modestia resignada que le conduce con tanta frecuencia a emplear los términos de "pobres y ricos", en lugar de capitalistas y proletarios. Parece como si el pablismo clásico condensase su aspiración en "un poco más de interés de las clases ricas por las pobres". Evidentemente, en su propaganda, los divulgadores empleaban frecuentemente la terminología socialista, e incluso la de carácter revolucionario; pero la mentalidad que formaban en sus militantes era completamente obrerista. Así parecía que la máxima aspiración se condensaba en el "mejoramiento de los obreros", fórmula equívoca revestida de modestia, en lugar de en la igualdad social.

El pablismo no ha sido fundamentalmente un movimiento político socialista, de corte similar a los demás partidos de la socialdemocracia europea; ha sido más bien una escuela de administradores sindicales. Precisamente por eso no ha educado militantes socialistas, sino burócratas sindicales. Los más fieles devotos han sido adiestrados en la técnica de la gestión sindical,

más que en la estrategia de la lucha de clases. Así ha surgido ese funcionarismo sindical cerril, aferrado a las organizaciones y experto en todas las malas artes del caciquismo rural.

El pablismo ha concedido siempre, sindicalmente, una importancia fundamental al detalle económico. En este aspecto, salvo excepciones que generalmente han sido castigadas por la organización, el pablismo se ha distinguido por una gran probidad. Esta conducta se explica, independientemente de para la buena marcha administrativa de toda colectividad, por la necesidad de otorgar a los trabajadores el máximo de garantías en cuanto a la inversión de los fondos recaudados. En los comienzos de la organización obrera, las clases poseedoras han tratado de despertar entre los trabajadores la desconfianza hacia sus dirigentes, inculcándoles la idea de que las directivas o comités se lucraban con los fondos recaudados por las organizaciones sindicales. Los primeros organizadores societa-rios se vieron en la obligación de extremar el celo en el detalle administrativo. Pero de esto a hacer de ello la única razón de existencia de las organizaciones, media un abismo. Sin embargo, puede decirse que en esa gestión financiera minuciosa basan los pablistas toda su argumentación frente a los elementos de la oposición en el seno de los sindicatos, lo que significa una especie de cretinismo administrativo, que ha determinado el encanijamiento político de la organización sindical ugetista.

El pablismo constituye, pues, toda una escuela burocrática, con sus intereses propios y con su psicología especial. A base de un criterio estrictamente administrativo, y no político, se fué creando un grupo de gestores sindicales, que, al transcurrir de los años, se transformaron en grandes burócratas y dominaron por completo toda la organización ugetista. La escuela central residió en la capital, y fue su domicilio social la Casa del Pueblo madrileña, donde siempre ha resido el estado mayor pablista, burocrático, que ha impuesto sus normas tanto al partido socialista como a la Unión General de Trabajadores. Durante años, las fuerzas efectivas se reducían a las existentes en Madrid, porque toda la atención propagandista y proselitista de los dirigentes estaba concentrada casi totalmente en la capital. En este sentido, Maurin opina justamente que Pablo Iglesias "no comprendió jamás que el problema de España no consistía en transformar la aristocracia obrera de Madrid en directora del proletariado, sino en conquistar totalmente las zonas industriales, elevando al proletariado más fuerte a la condición de dirigente de la clase trabajadora en general" (4).

Por esta propensión natural de concentrar sus actividades en la capital y de hacer de la burocracia madrileña el centro directivo, se abandonó al proletariado catalán en manos del anarquismo. También por la misma razón, hasta muy recientemente, el proletariado agrícola ha estado más influenciado por la Confederación que por el ugetismo. El burocratismo madrileño buscaba instintivamente su principal base de apoyo en la aristocracia obrera, de composición casi artesano y de espíritu pronunciadamente conservador.

De todas las cualidades que sus panegiristas adjudican a Pablo Iglesias, la única que responde a la realidad de los hechos es la de que fué un buen organizador. Acertó a crear una organización administrativamente bien estructurada y disciplinada. Logró someter a la autoridad de la dirección del partido a todas las individualidades; cosa justa en principio, pero solamente en principio, porque la finalidad era lograr un ciego acatamiento a la política burocrática del

partido. Debido a esta política que en vida desarrolló Iglesias, los mismos elementos dirigentes del partido político lo han sido también de las organizaciones sindicales. Con pocas diferencias durante muchos años, las Comisiones Ejecutivas del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores han estado integradas por los mismo elementos, por una oligarquía burocrática.

Bajo la inspiración directa de Pablo Iglesias se han formado esas capas de los actuales burócratas, perfectos pequeño-burgueses, practicones sindicales, técnicos del rutinarismo y supinos ignorantes en todos los órdenes de la vida. Así se ha ido desarrollando la burocracia pablista, que tiende sus tentáculos por todos los organismos de la Unión General de Trabajadores, del movimiento cooperativo y de las instituciones sociales. Su educación choca profundamente con la de las nuevas generaciones obreras, más estudiosas, más sensibles a todos los problemas de clase, más revolucionarias, en suma. Pero los años y años de práctica de secretaría han dado a los burócratas un dominio de todas las artimañas más o menos confesables, de las que se sirven para conservar su hegemonía sindical y política. La razón de su poderío reside fundamentalmente en su dominio de las características de la organización y del conocimiento de la psicología del militante medio.

Los burócratas pablistas veteranos, o sea los que ocupan los más altos cargos, hicieron su aprendizaje en las antiguas sociedades de oficio. Surgidos a la vida sindical a fines del siglo pasado o comienzos de éste, se han desarrollado durante la época en que el pablismo tenía un carácter casi meramente mutualista. Los burócratas hablan con frecuencia de sus pasadas persecuciones. Sin embargo, son pocos los que pueden presentar en su haber de militantes algunos meses de prisión; mejor dicho, algunos ni el más breve encarceramiento. El más modesto y joven dirigente revolucionario de un sindicato puede mostrar muchos más sacrificios efectivos y persecuciones a favor de la defensa de los intereses obreros.

El burócrata se ha hecho, se ha formado en los comienzos del desarrollo industrial, y, por tanto, en los principios del movimiento obrero. Ha surgido, en resumen, en la época del desarrollo pacífico del capitalismo. Las represiones patronales, el paro obrero, en ninguna ocasión revestían los caracteres de intensidad que en la actualidad. El obrero perseguido podía fácilmente emigrar a otros puntos en busca de trabajo, refugiarse en el artesanado o adaptarse a ciertos medios de vida independiente, salidas que actualmente imposibilitan la crisis de trabajo y la extraordinaria competencia y sobreabundancia de mano de obra en todos los aspectos de la vida.

La labor más ardua que se presentaba era la de vencer a los propios trabajadores; es decir, la dificultad consistía en el reclutamiento de miembros para las organizaciones. Pero las luchas con la clase patronal no revestían ni mucho menos las proporciones actuales, en que los conflictos no quedan encuadrados en los límites de los patronos o empresas afectados. En los periodos de prosperidad, los capitalistas podían ceder en ciertas reivindicaciones, sin que para ellos la derrota tuviera los caracteres de fracaso político. Así el burócrata pablista se ha educado principalmente en la labor de secretaría, en la actividad de reclutamiento, pero no a través de batallas de clase, sino de la paciencia administrativa.

Como consecuencia del poder absorbente del administrador sindical pablista, han ido acostumbrándose

la mayoría de los cotizantes de la organización a no intervenir en las tareas del sindicato. Para asegurar su hegemonía y permanencia en el cargo, el burócrata pablista se esfuerza por aniquilar el espíritu crítico de la clase obrera, soslayando toda discusión acerca de los problemas del partido, de los sindicatos y en general del proletariado, y haciendo de esta suerte indispensables sus personas e incondicionales los derechos que esgrimen para la defensa de sus intereses particulares o de grupo. Esto es lo que constituye el germen de la tiranía sobre los demás miembros y de la explotación de sus subordinados, aún cuando justifiquen sus prebendas por una capacidad de trabajo que no tienen los demás. Se sitúan, por lo tanto, por encima de los afiliados, a quienes imponen su autoridad con el peso de su "experiencia".

Ya hemos explicado en otro capítulo cómo la creciente complejidad de la función organizadora y administrativa de los sindicatos hizo que la tarea no pudiera ser realizada por un solo hombre y cómo poco a poco una parte de la función fue encomendada a otros miembros del partido o del sindicato, casi siempre a los incondicionales o familiares del caudillo. Cómo cada uno de estos se convirtió a su vez en organizador, gestor o administrador, aunque con carácter secundario y dependiente del burócrata sindical máximo, con quien estaba íntimamente relacionado por su amistad y por las luchas conjuntas llevadas a cabo. De este modo comenzaron a desarrollarse dentro del partido y de las sociedades obreras camarillas que se agrupaban en torno al jefe, camarillas que fueron adquiriendo una importancia especial, por estar íntimamente mezcladas con las funciones de gestión y por tener más facilidades que los demás para prepararse y ejercerlas, por sus afinidades y proximidades con el bonzo mayor, quien se esforzaba por llegar a este estado de cosas y preparaba de antemano a los elegidos para el desempeño del cargo, predisponiendo al partido y a las sociedades para que lo eligieran. Con el tiempo, la función burocrática pasó a ser una mera formalidad, porque el burócrata máximo designaba al más *capacitado* y la función organizadora o administrativa se convirtió en patrimonio de las camarillas ligadas entre sí por lazos insolubles de interés particular.

Durante muchos años, el número de militantes del partido socialista ha sido escasísimo: apenas unos millares en toda España y unos centenares en Madrid. Y la inmensa mayoría estaba integrada por los gestores sindicales, por la burocracia pablista, retribuida o no. Su absoluto prevalecimiento inspiraba las normas y determinaciones del partido. Es natural que el paso lento, la minucia administrativa y el temor a la acción fueran las determinantes de la actividad socialista española. La actuación del partido estaba proyectada en cada circunstancia por los funcionarios sindicales, que dejaban su huella en todas las resoluciones. Nunca ha existido esa diferencia entre los métodos del partido y los de las organizaciones sindicales, que caracterizaban la marcha de muchas secciones de la socialdemocracia europea. Para lograr aún más el sometimiento del partido político a la organización sindical se lanzó durante la dictadura la iniciativa, muerta al nacer, de la constitución de un partido laborista. La aportación de nuevos elementos con un sentimiento estrictamente político ha acabado con la hegemonía y el elevado porcentaje de funcionarios sindicales en las asambleas del partido. Las camarillas burocráticas quedan diluidas en las grandes asambleas políticas.

Los puestos que han dejado los pioneros de la burocracia pablista han sido cubiertos posteriormente por

otros elementos más jóvenes, pero educados en sus procedimientos y a través de todos los organismos de colaboración de clases. Los viejos burócratas pablistas, no hemos de ocultarlo, han realizado un trabajo ciertamente nada más que de secretaría, pero en el que han consumido muchas más horas que la jornada de trabajo corriente de un obrero. En el trabajo burocrático han sido tenaces y constantes.

Podríamos decir que entre estos burócratas se distinguen dos clases: la de aquellos francamente arribistas que ven en la organización sindical o política meramente un escabel para hacer carrera política, y la de aquellos otros de mentalidad y aspiraciones más limitadas, para los cuales toda su ambición queda circunscrita a conservar y mejorar el sueldo de su sindicato, obtener además dietas en cualquier institución oficial, tener un hotelito en una cooperativa de casas baratas y colocar a sus hijos en el Ministerio de Trabajo, en el Instituto Nacional de Previsión, en un Tribunal mixto o en otra institución cualquiera de carácter oficial.

El tipo de gran burócrata es el encargado, por mediación de la actividad política, de servir francamente los intereses burgueses en el seno del movimiento obrero. Su contacto con la clase obrera queda limitado al contacto en los actos públicos que se celebran. Viven independientemente del ambiente obrero, buscan incluso en otros medios sus amistades. El secretario de Federación nacional e incluso de Federación local de industria, que son los tipos más acabados de grandes lamas sindicales, son casi inaccesibles para los simples militantes de la organización. Conocen a la perfección toda la vida parlamentaria, los recovecos de las oficinas públicas; pero desconocen en absoluto las angustias de un hogar trabajador. Son los que en la colaboración ministerial han encontrado una coyuntura, además de para paralizar el impulso reivindicativo de la clase trabajadora en el terreno político, para satisfacer sus ambiciones económicas en el terreno personal.

Como hemos dicho ya, el pequeño burócrata limita sus aspiraciones a la conservación de su retribución sindical y de los demás privilegios inherentes al cargo. La pérdida de su situación le produce un verdadero terror. El abandono de una situación pública o social de la que se haya gozado muchos años, es algo que sólo pueden llevarlo a cabo los que tengan un gran espíritu de sacrificio a disposición de las ideas. El burócrata teme a la lucha por la vida más que a ninguna otra cosa, y por huir de ella no vacila en poner su experiencia de práctica sindical al servicio de la clase enemiga, de aquellos que le retribuyan.

Los rasgos personales del burócrata pablista clásico son los peculiares del burócrata en general. Su psicología, la de ambos, difiere poca cosa. Es el mismo amor al detalle, a lo establecido, al trámite reglamentario; el mismo espíritu hostil a lo nuevo, a toda renovación; el mismo anhelo por la homogeneidad de vida, por el aburrimiento tranquilo. El burócrata se entusiasma, con su obra administrativa, y si mañana una nueva situación, la fascista, por ejemplo, le coloca en situación difícil, él se someterá en seguida, porque lo esencial para el burócrata es escapar a la ley de la oferta y la demanda, a las crisis industriales; en este caso encontrará siempre una justificación para ponerse servilmente a disposición del nuevo amo.

A consecuencia de su veteranía en la dirección de la organización, el burócrata pablista ha ido estableciendo diversas relaciones personales con los miembros del sindicato, en cuyos conflictos ha tenido que intervenir cerca de los patronos. Algunos obreros que no tienen

una conciencia de clase muy desarrollada, cuando un conflicto individual con su patrono es resuelto por los burócratas, el reconocimiento no lo hacen extensivo a la fuerza de la organización, sino a aquellos que de una manera más directa han realizado las gestiones cerca del patrono o de la empresa, frecuentemente a costa de concesiones de parte de los intereses del obrero. De esta manera, los burócratas se van rodeando de afectos personales que ellos utilizan en las grandes asambleas "peligrosas", donde la presión de las masas coloca a los bonzos en situación comprometida para hacer aprobar sus matutes reformistas y sus combinaciones especiales.

En las organizaciones a base múltiple, en las que hay establecidas pensiones de jubilación, de enfermedad, inutilidad, etcétera, los burócratas tienen en esta labor mutualista una manera de intentar perpetuar su hegemonía. Con todo ello han logrado crear vastos intereses, que una capa de sindicatos, los más antiguos, tienen profundo interés en defender frente a los militantes revolucionarios. En caso de peligro, la burocracia toca a rebato, llamando en su defensa a todos los afectados por los socorros mutualistas. La campaña contra la oposición se realiza a base de hacer creer a la gran masa de sindicatos que el triunfo de la tendencia progresiva supone la desaparición de todos los beneficios sindicales establecidos. Y así consiguen la asistencia a las votaciones de la masa amorfa de la organización, que se desinteresa en absoluto de las reivindicaciones revolucionarias. A veces esta maniobra es facilitada por la torpeza en su actuación de la oposición revolucionaria. Conocidas estas estratagemas de los bonzos reformistas, los elementos progresivos debieran en todas las ocasiones obrar con el máximo oportunismo para deshacer las combinaciones de la camarilla burocrática. La mejor manera de combatir a la burocracia es conocer sus procedimientos para hacerles frente acertadamente.

Los afectos personales en el interior de los sindicatos reformistas son favorecidos, en tiempo normal, por los organismos estatales de arbitraje. La actuación de los nababs sindicales en los Jurados mixtos, en los Tribunales industriales, crea el reconocimiento inconsciente y personal de ciertos núcleos de obreros hacia los dirigentes que se encargan de la tramitación de sus pleitos ante estos tribunales de colaboración de clases. Independientemente de la misión de adormecimiento de las energías revolucionarias, aunque tampoco hemos de negar su utilidad, que representan tales tribunales sociales, sirven prácticamente también para fortalecer el predominio de la burocracia en las organizaciones. Son instrumentos en manos de los más degenerados reformistas. Por esto, muchos militantes sindicados de base, cuando se trata de sustituir a los viejos burócratas por dirigentes jóvenes y progresivos, ponen el grito en el cielo, como si de lo que se tratase fuese de aniquilar la organización. Están tan acostumbrados a ver a los viejos funcionarios ocupando los cargos responsables, que su ausencia les atemoriza.

Hay organizaciones sindicales donde los cobradores, los encargados de la cobranza de los cupones por los talleres o los domicilios particulares, son un excelente instrumento que utilizan, por ejemplo, en Madrid, los dirigentes reformistas. El cobrador, a consecuencia de su misión, está en contacto directo con los afiliados. En la mayoría de los casos conocen a los componentes de un sindicato mucho mejor que los propios dirigentes. Alternan y conviven con los afiliados, es decir, con la masa en general, y utilizando esto son el canal por donde los bonzos difunden y propagan todos los

rumores y hasta las infamias contra los más destacados militantes de la oposición. Son los encargados de lanzar el "S.O.S." cuando los burócratas se ven en grave aprieto por efecto de la propaganda de los elementos progresivos. Movilizan, buscan y reclutan votantes en las elecciones reñidas entre las dos fracciones.

Los cobradores constituyen, aunque parezca imposible, una potencia en el interior de algunos sindicatos. Unidos estrechamente por muchos años de convivencia y por comunidad de intereses con los bonzos, son sus auxiliares más preciosos en la lucha contra la oposición. Suelen ser casi todos ellos antiguos obreros del oficio del sindicato, a los que, en algunos casos, en tiempos remotos, la persecución patronal obstaculizó la posibilidad de hallar trabajo, y, como recurso, al desarrollarse la organización, pasaron a ser cobradores. Son veteranos casi todos ellos, emancipados del oficio y cuya preocupación es la conservación del cargo. Son un obstáculo para el desenvolvimiento progresivo de las viejas sociedades de oficio (5).

El nutrir las cajas de resistencia parece que es la principal tarea administrativa que al frente de los sindicatos se atribuyen los burócratas reformistas. Pero por muchos que sean los ahorros de una caja de resistencia, todos saben que en un conflicto no pueden afrontar, ni en una mínima parte, el problema económico de los huelguistas. Incluso ni la más poderosa organización a base múltiple, en una situación precisa, puede hacer frente a las necesidades materiales del conflicto.

En la Memoria del XII Congreso ordinario del partido socialista (6) se publicó un avance de estadística de los fondos, es decir, de las reservas metálicas de que disponían las organizaciones sindicales de la Casa del Pueblo de Madrid. Al cuestionario que les fue sometido por la Comisión Ejecutiva del partido socialista no contestaron todas las sociedades y, por tanto, no figura el resumen de las reservas de todas ellas. Aún así y todo, el total que se publica en dicha Memoria como capital social de las sociedades obreras de las Casa del Pueblo en 30 de junio de 1927, a excepción de las organizaciones que no contestaron a la encuesta, es de 1.787.319,57 pesetas. Es de suponer que agregadas las sociedades cuyo efectivo no figura en la estadística, el total en aquella fecha fuese de dos millones de pesetas.

Destaquemos aquellas organizaciones cuyas reservas metálicas eran más importantes: "El Trabajo" (Sociedad de Albañiles), 644.058,64; Asociación del Arte de Imprimir, 191.691 pesetas; Unión General de Obreros del Transporte, 274.355,64 pesetas; Federación Gráfica Española, 74.640,28 pesetas; Federación Local de la Edificación, 63.691,18 pesetas; Obreros del Pan de Viena, 35.696,21 pesetas, etc. (7).

Desde el punto de vista de los modestos medios de que disponen los trabajadores, estas cantidades pueden considerarse una buena acumulación de capital en fondo de reserva. Pero visto desde el punto de vista general de la economía, es decir, de las necesidades de socorro de huelga, por ejemplo, dichas cantidades no suponen ninguna suma extraordinaria. Apenas la más importante alcanzaría para unas tres semanas de salarios.

La burocracia pablista hace de estos fondos un dinero estático, improductivo, desde el punto de vista de los intereses superiores políticos de la clase trabajadora. En ello basa toda la moral y la política de su actuación sindical. En esta época de reacción capitalista desatada, la acumulación de fondos por las organizaciones sindicales puede convertirse prácticamente

en la constitución de un fondo de reserva para el fascismo o la reacción burguesa. Durante años y años el proletariado austriaco, dirigido por la socialdemocracia, constituyó todo el andamiaje de su Banco obrero. La reacción vaticanista y sus milicias fascistas han recogido el fruto del ahorro de la organización sindical austriaca y lo han empleado en sus propios fines, mejor dicho, en enriquecerse personalmente algunos de los más destacados dirigentes fascistas.

El examen general de la concepción financiera de la organización sindical reformista española demuestra que los gastos están siempre realizados en vistas de necesidades burocráticas y no de las luchas políticas obreras. El hecho se refleja de una manera más ostensible a medida que es mayor la importancia numérica de la organización. Proporcionalmente es más grande en la Federación de industria que en la sociedad de oficio, y mayor en la central nacional que en la Federación nacional.

En la Memoria de la Unión General de Trabajadores (8) editada en 1932, se insertan los estados de cuentas de dicha central. Por ellos vemos que concretados a tres años y medio los gastos de secretaría (alquiler, personal, correspondencia, etcétera) —así figura en la partida, sin determinar el gasto por cada uno de estos conceptos— han sido: en 1929, 39.768,30 pesetas; en 1930, 34.787,25; en 1931, 76.105,80 pesetas, y en el primer trimestre de 1932, 50.216,49 pesetas, lo que hace un total de gastos de secretaría en los tres años y medio de 200.877,84 pesetas.

En las cuentas correspondientes al tercer trimestre de 1933 aparecen los conceptos siguientes (9): por gastos de secretaría, alquiler, etc., 20.874,79 pesetas; propaganda, 6.067,50 pesetas; por homenajes (?), 724,35 pesetas; por asistencia a Congresos, 6.296,15; por secretariado, 1.507,75 pesetas; por Comité nacional, 2.310,55 pesetas. Como capital social figuraba en dicha fecha la cantidad de 89.403,21 pesetas, de las cuales 34.414,20 pesetas en cuenta corriente del Banco de Bilbao y 21.245,25 en el Hispano Americano.

En cambio, vemos en la Memoria correspondiente al año 1932 que durante el mismo período de tres años y medio lo invertido en socorrer a los presos y perseguidos ha importado únicamente la cantidad de 15.328,10 pesetas. Y hay que hacer la aclaración de que de esta cifra se han invertido 1.420 pesetas en atender a Largo Caballero, preso por los sucesos de diciembre, y otras 1.420 en socorrer a Fernando de los Ríos, preso también por el mismo motivo. Igualmente hay que hacer constar que Largo Caballero percibía su salario como secretario de la Unión General de Trabajadores y Fernando de los Ríos el de catedrático que le entregaban sus compañeros de profesión.

Estos simples datos sirven para poner en evidencia el concepto oligárquico que de la organización obrera tienen los jefes reformistas. A este respecto es aleccionadora la relación de la distribución de los fondos pro presos. A los trabajadores de los pueblos, a los campesinos pertenecientes a las organizaciones de la Unión General (de los trabajadores de otras organizaciones o partidos no hay ni que hablar, pues ni siquiera se alentaba gestión alguna para su libertad), se les entregaba pequeñísimas cantidades como socorro de preso y por una sola vez; en cambio, a los jefes, que percibían sus salarios en la prisión, y que a través de sus actuaciones han logrado constituir sus ahorros, se les socorría en la prisión a razón de quince pesetas diarias.

Si se establece que una organización trabajadora, que un partido que se llama obrero, es en su régimen

Andrade y la revolución española

Juan Andrade nació en Madrid en 1897 y en esta ciudad pasó la mayor parte de su vida militante. A ella volvería también en 1979 después de haber pasado 40 años en París. Aunque ya no participaba activamente en ninguna organización política, nunca renunció a su pasado ni a su compromiso político; con la misma energía se resistía a vivir sólo del pasado. Con entusiasmo desbordante —aunque éste muchas veces fuera decepcionante— se sumía en los problemas de nuestros días.

Javier Maestro

LA crisis combinada del capitalismo y del estalinismo, uno de cuyos exponentes más señalados fue el Mayo francés de 1968, había dado un nuevo aliento al marxismo revolucionario y a las organizaciones que reivindicaban ser herederas de aquella izquierda revolucionaria que durante el periodo de entreguerras había tratado de luchar a contracorriente por la revolución socialista. A esta izquierda revolucionaria, como posible "tercer gran partido obrero" y como alternativa al reformismo y al estalinismo, prestaba Juan Andrade todo su interés y apoyo sin sectarismo alguno.

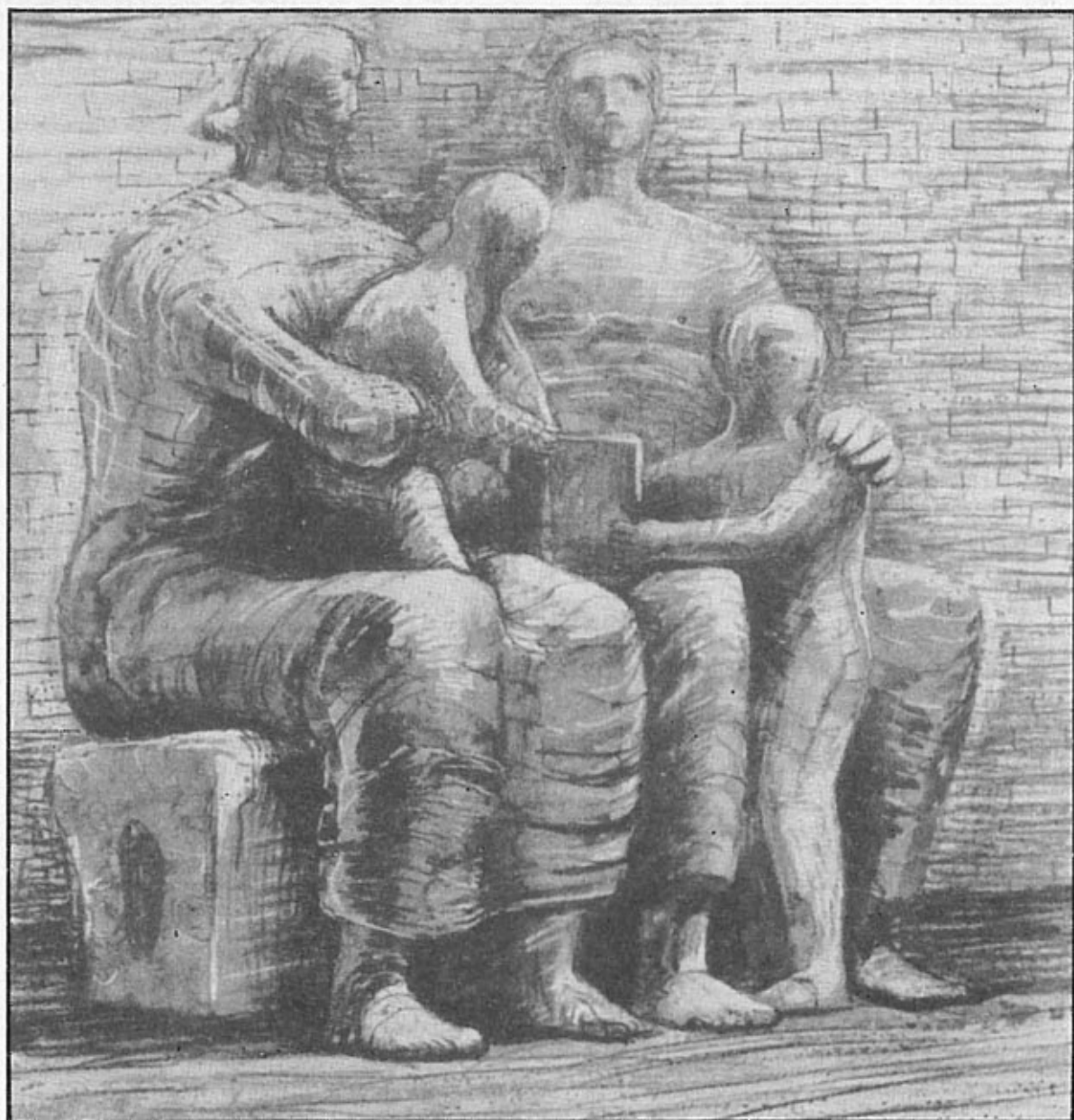
Juan Andrade se caracterizó siempre por ser un lector asiduo e infatigable de libros, revistas y periódicos, algo que, contrariamente a otros dirigentes del movimiento obrero español, le permitió seguir de cerca los acontecimientos, las tendencias y las polémicas en el seno del movimiento obrero internacional, alejándose así de todo provincialismo e indigencia teórica. Fue en este sentido una gran excepción.

Su oficio de escritor y periodista, profesión a la que se dedicó con gran entrega a lo largo de su vida de intelectual y militante, puede considerarse como su mayor contribución al movimiento obrero español. De esta actividad relacionada con el periodismo militante dan testimonio los años 1914-1940, años durante los cuales protagonizó buena parte de la historia del movimiento obrero español.

A la edad de 17 años se inició en la actividad política participando en las filas de las Juventudes Radicales —los "Jóvenes Bárbaros"—, precisamente cuando la opinión pública española se hallaba profunda y enconadamente dividido entre aliadófilos y germanófilos, una polarización que puso una y otra vez en peligro la frágil política de neutralidad del país. Las juventudes lerrouxistas despertaron el entusiasmo de Juan Andrade, porque entonces aparecían como la única corriente política que impulsaba un antibelicismo militante. El socialismo español, en cambio —al que se aproximaría poco después decepcionado por la gesticulante demagogia del lerrouxismo y por el entusiasmo que despertó en él la Revolución de Octubre—, se debatía entre el pacifismo wilsoniano, la aliadofilia y un tímido antibelicismo.

En 1919, ya como dirigente de las Juventudes Socialistas, se alineó con aquellos jóvenes militantes que trataron de imprimir al socialismo español una orientación revolucionaria. Desde las páginas de "Renovación", órgano de las J.J.S.S., contribuyó decisivamente a que los socialistas españoles superaran su característica indigencia teórica y política conociendo las causas del derrumbe de la II Internacional así como la situa-

ción ideológica y política del movimiento obrero internacional tras la victoria de la Revolución rusa, y coincidiendo con la oleada revolucionaria que afectó a la casi totalidad de los países europeos entre 1917-1923. "Renovación" abandonaba así el obrerismo llorón y el reformismo paternalista que el pabloiglesismo había imprimido pacientemente al socialismo español. Juan Andrade descolló como firme partidario de la Revolución rusa y de la III Internacional, erigida en 1919 en partido mundial de la revolución. Y, de acuerdo con esa convicción, a principios de 1920, junto con otros dirigentes de las J.J.S.S. tomó la histórica decisión de constituir el Partido Comunista Español, mientras el PSOE seguía empantanado en la mayor de las confusiones, pues tan pronto se adhería como se desadhería de la III Internacional siguiendo el vaivén de las contradictorias resoluciones que adoptaban sus Congresos. El resultado final de esta indecisión del socialismo español fue una tortuosa vuelta al punto de partida: al reformismo de la II Internacional. Pero, antes de que se llegara a este final, la iniciativa de los jóvenes socialistas fue emulada por varios dirigentes adultos del PSOE con la fundación del Partido Comunista Obrero Español en abril de 1921, inmediatamente después de conocerse la votación del Congreso extraordinario del PSOE, que arrojó 8.808 votos a favor de la reconstrucción de la II Internacional y 6.094 a favor de la adhesión a la III Internacional. Con la presencia en España de dos partidos comunistas la I.C. se planteó la urgente necesidad de proceder a un proceso de unificación. No fue sencillo. El izquierdismo de los jóvenes del PC español y las acusaciones de oportunismo que éstos lanzaban contra los integrantes del PCOE, dieron lugar a un dilatado y accidentado periodo de negociaciones que, bajo la presión de los mediadores de la III Internacional, culminó en diciembre de 1921 con la constitución del PCE. A lo largo del año 1920, cuando el país todavía vivía en un clima prerrevolucionario tras la abortada huelga general revolucionaria de 1917, la agitación campesina, la guerra de Marruecos, y un ambiente de guerra civil en Catalunya entre sindicalistas y patronos, Juan Andrade y otros miembros del PC español realizaron una intensa labor de información, agitación y proselitismo desde su órgano **El Comunista**. Sus columnas lanzaban insistentes ataques al oportunismo, al reformismo y al parlamentarismo inspirándose en la orientación ultraizquierdista que el Buró de Amsterdam de la III Internacional, responsable para Europa occidental, confería a los diversos partidos comunistas de reciente creación. De este periodo datan la correspondencia y contactos que Juan Andrade mantuvo con dirigentes comunistas tan



Grupo familiar. 1944.

destacados como Geers, Pannekoek, Rutgers, Henriette Roland-Holst, Amadeo Bordiga y Gorter. Lenin, como se sabe, atacaría con vehemencia esta orientación en su escrito, de 1920, **El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo**, escrito que los jóvenes comunistas españoles consideraron "abominable", si bien las tesis del II Congreso de la III Internacional sobre acción parlamentaria les obligaron a proceder a una profunda reflexión y abandonar sus iniciales planteamientos antiparlamentarios. La lucha por el Frente Único, la unidad sindical y la combinación de la acción parlamentaria con movilizaciones de masas se convertirían en los ejes del naciente PCE, si bien sus escasos efectivos y la falta de tradición revolucionaria del socialismo español hicieron de él un partido casi exclusivamente propagandista. Juan Andrade, como director del órgano oficial del PCE, **La Antorcha**, desempeñó un importante papel dada la reducida implantación e intervención práctica del partido. Había sido desde luego un error de la III Internacional crear un PCE desgajado exclusivamente de una débil

izquierda socialista cuando el sector más combativo y con fuerte implantación obrera se encontraba particularmente en España, a diferencia de otros países, encuadrado en la CNT (en 1919, la CNT contaba con 756.101 afiliados, mientras la UGT tenía 150.000 y el PSOE 50.000). Tanto más por cuanto el anarco-sindicalismo español se había adherido con entusiasmo a la Internacional Sindical Roja en diciembre de 1919, aunque ya en 1922, en parte debido al protagonismo que Moscú daba al PCE, la central obrera más numerosa y combativa rompía sus lazos con la Revolución de Octubre y el Estado Obrero. A pesar de ello, en diciembre de 1922, un sector "pro-bolchevique", disconforme con el distanciamiento de Moscú, formó los Comités Sindicalistas Revolucionarios como tendencia favorable a la III Internacional dentro de la CNT. Se trataba de sindicatos fundamentalmente leridianos asociados a dirigentes cenetistas como Maurín, Nin, Arlandis y Bonet, que tenían como órgano a **La Batalla**. Poco después iniciarían contactos con los núcleos comunistas españoles, al tiempo que su vinculación a

la ISR propició su deslizamiento gradual desde posiciones sindicalistas revolucionarias, de fuerte influencia soreliana, a posiciones comunistas. A raíz de esta aproximación Juan Andrade empezó a colaborar con cierta frecuencia en las páginas de **La Batalla**, iniciándose así un contacto cada vez más estrecho entre ambas organizaciones. Tras la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, que fue una forma de cortar el desarrollo de una situación revolucionaria en España, el grupo cenetista "pro-bolchevique" se integraría en 1924 en el PCE, constituyéndose la Federación Catalano-Balear. Esta fusión se produjo en condiciones excepcionales: el PCE fue declarado ilegal; la mayor parte de sus dirigentes se encontraban encarcelados y sometidos a una actividad clandestina en los escasos periodos de libertad; la Dictadura, paradójicamente, sólo toleró la publicación de **La Antorcha** a condición de que el semanario comunista no publicara nada contrario a ella. A la represión sucedió la desmoralización y una profunda crisis en el seno del PCE, coincidente con el viraje estalinista que afectó a la I.C. tras el V Congreso y las críticas que los militantes españoles dirigieron contra la pasividad del C.C. del PCE. Una nueva oleada represiva encarceló en 1925 al nuevo C.C. y prohibió la aparición de **La Batalla**; todo ello obligó a reconstruir la dirección del PCE en París, para lo que Moscú contó con aquellos comunistas españoles exilados que no se habían identificado con la "oposición trotskista". La llamada "bolchevización" del PCE dejó a éste fundamentalmente en manos de Bullejos-Trilla, que iniciaron una calamitosa política de expulsiones como forma de entender el "centralismo democrático" en el partido. Juan Andrade sería uno de los primeros comunistas españoles que se identificara con la Oposición de Izquierda que dirigió Trotsky en la URSS hasta 1927 y, como director de **La Antorcha**, se negó a publicar las expulsiones de que la dirección del PCE había decidido efectuar para "garantizar la disciplina en el seno del partido". Su aproximación al "trotskismo" partía, por tanto, de su concepción sobre la democracia obrera. La crisis del PCE era ya evidente. En 1926 apenas contaba con 500 militantes.

Juan Andrade, destituido en 1927 como director del semanario comunista, inició una nueva andadura al frente de la Agrupación Comunista madrileña, muy autonomizada, convirtiéndola en núcleo de lo que en 1931 sería la Oposición Comunista de Izquierda Española (OCE). Hasta la proclamación de la II República en 1931, Andrade proliferó sus contactos con miembros disidentes del PCE y, en especial, con la Oposición de Izquierda Internacional, si bien los primeros núcleos trotskistas españoles surgieron en Bélgica, donde apareció también el primer núcleo de la revista **Comunismo**, de la que luego él mismo sería director. La OCE, creada en Lieja en 1930, se implantó en España a principios de 1931 y Juan Andrade pasó a formar parte de su Comité Ejecutivo. La OCE se vio reforzada casi desde su constitución por Andreu Nin, antiguo dirigente cenetista, secretario de la Internacional Sindical Roja (1922-1929), miembro de la Oposición de Izquierda en la URSS, y, ya en España, colaborador en 1930 de la dirección de la Federación Catalano-Balear y, finalmente, en 1931, tras su fracasada tentativa de convencer y ganar a una línea opositora a Joaquín Maurín y al recién creado **Bloc Obrero Camperol** —resultado de la fusión de la Federación Comunista Catalano-Balear con el Partit Comunista Català, que junto agrupaban a 700 miembros frente a los 50 del PCE en Catalunya—, formó parte del

Comité Ejecutivo de la OCE. De este periodo arranca una profunda amistad e identificación política entre Nin y Andrade. Ambos siguieron hasta 1933 las orientaciones generales de la Oposición de Izquierda Internacional, a pesar de que Trotsky adoptara desde 1931 una actitud crítica hacia los opositoristas españoles a causa de lo que él juzgaba falta de decisión de éstos en crear una estructura opositorista fuerte en un momento en que era todavía posible ganar la hegemonía dentro de un PCE numéricamente débil y políticamente marginado y en crisis por el bandazo ultraizquierdista y sectario del denominado "tercer periodo" (1928-1933). España, en plena efervescencia política, era en efecto el país que, junto con Francia, ofrecía las mayores posibilidades revolucionarias al radicalizarse las demandas democráticas, desgastarse el gobierno republicano-socialista y perder credibilidad la alternativa reformista con la derechización e incluso fascistización de la burguesía española. España era también un país donde era más factible que en cualquier otro ganar la lucha por el control político-organizativo del PCE con el fin de presionar a favor de una rectificación de la I.C. Tanto Nin como Andrade contribuyeron sobremedida a que la OCE tuviera una implantación a escala estatal (los opositoristas españoles llegaron a contar entre 500-1.000 miembros), si bien la valoración que hacían de una futura permanencia en el PCE y de la posibilidad de transformarlo desde dentro difería de la de Trotsky. Ya en abril de 1932, la OCE pasó significativamente a llamarse Izquierda Comunista Española (ICE) alegando que "la Oposición no tiene más programa que la "reforma del partido", pues hace de esta reforma condición previa para la ejecución de su política. La actitud tradicional de la Oposición es de todo punto insuficiente en las circunstancias actuales y, de persistir en ella la Oposición, no conseguirá ser en los momentos decisivos una solución política. Porque las reformas parciales que consiga hacer en la Internacional no modifican sustancialmente el estalinismo". Esta creciente autonomía de la ICE con respecto a Trotsky y la Oposición de Izquierda Internacional fue agrandándose al tiempo que los debates sobre la creación o no de un partido revolucionario independiente de la IC enriqueció la situación en el seno del movimiento trotskista y de la ICE. Para Trotsky la nueva orientación de la ICE reflejaba una profunda incompreensión del peso del aparato estalinista internacional, a su juicio consecuencia del escaso interés y participación que mostraban los opositoristas españoles por los debates internacionales; esta valoración no fue lógicamente compartida por la ICE.

Es más, la subida al poder de Hitler vino a confirmarles la debilidad de la IC estalinista y la inminencia de una remodelación global de las fuerzas revolucionarias en Europa occidental, al margen de los partidos obreros tradicionales. Trotsky extrajo también tras la victoria del nazismo en Alemania la misma conclusión acerca del carácter irreformable de la IC, aunque no las mismas perspectivas político-organizativas. Ciertamente, en agosto de 1933, la Oposición de Izquierda Internacional pasó a denominarse Liga Comunista Internacional y, poco después, ante el ascenso del fascismo, la paralela radicalización de las organizaciones obreras y la urgencia de optar por la vía más rápida para crear un partido revolucionario de masas, propugnó en adelante el "entrismo" en las organizaciones obreras tradicionales antes de constituir partidos revolucionarios independientes y una IV Internacional. Este denominado "giro francés" del movimiento trotskista rompió prácticamente toda ligazón

con la ICE en el terreno organizativo.

Entretanto, en España, tras el frustrado golpe militar de Sanjurjo en agosto de 1932, la derecha logró ir ganando posiciones coincidiendo con un proceso de unificación de todas las fuerzas derechistas, logro que, en las elecciones de noviembre de 1933, le dió la victoria. Se inauguraba así el "bienio negro" que inició un proceso de despiece de las conquistas populares. El movimiento obrero experimentó paralelamente un contradictorio proceso de radicalización y recomposición que en un principio se realizó bajo el signo de una desmoralización acompañada de una fuerte aspiración a favor de la unidad obrera a fin de iniciar la resistencia, y, meses más tarde, bajo el signo de la ofensiva obrera. Desde "Comunismo", Juan Andrade expresaba en el otoño de 1932 la desconfianza que todavía albergaba la ICE acerca de un cambio de actitud del socialismo español cuando decía:

"(...) Este combate contra la reacción no tendrá verdadera virtualidad si no se lleva íntimamente ligado a la lucha contra los republicanos y socialistas, que con su política de represión contra la clase obrera revolucionaria hacen posible el levantamiento de la reacción, y, principalmente, contra los elementos radicales lerrouxistas, que bajo la máscara del republicanismo hacen la política de los monárquicos. La revolución iniciada el 14 de abril tiene en el proletariado a su único y verdadero defensor. Frente a la prensa venal republicana, que predica ya el impunitismo de los generales reaccionarios, debe alzarse, enérgico y resuelto, el proletariado para exigir el fusilamiento de los culpables (...)"

Dos años más tarde modificaría su criterio cuando la política de Frente Único se convirtió en una posibilidad y apremiante necesidad. Con la constitución en diciembre de 1933 de las Alianzas Obreras, en cuya gestación desempeñó la ICE y el BOC un papel decisivo Juan Andrade lo valoraría de la forma siguiente:

"(...) Las alianzas surgieron a raíz de las elecciones generales de noviembre como consecuencia de la necesidad que inmediatamente sintió la clase obrera de ofrecer un bloque compacto a la reacción (...). Ante aquella aparente rectificación de conducta del socialismo, las minorías obreras que integran las alianzas se plantearon la cuestión de obligar en el terreno de los hechos al partido socialista de ser consecuente con sus declaraciones de unidad"

Pero, al mismo tiempo, expresaba también sus dudas de que esto fuera suficiente por cuanto:

"¿quizás el anarquismo español esté llamado a representar en España un papel tan nefasto como el jugado en Alemania por el stalinismo. Queríamos decir con ello que ejerciendo su influencia sobre extensas masas obreras (figural que el PC alemán), siendo la segunda organización obrera por el número de afiliados (figural que el PC alemán), con su política sectaria (también es ultimativista el anarquismo español: "en las filas de la CNT está hecho el verdadero frente único"), puede conducir al proletariado hispano a una derrota semejante a la que el estalinismo condujo a la clase obrera alemana"

Estos análisis de Juan Andrade fueron expuestos en la revista teórica **Comunismo**, a la que como director confirió un merecido prestigio y difusión de las ideas, programa y actividad de la ICE; con una tirada de 1.500 ejemplares no sólo extendió y consolidó a la ICE, sino que, además, la revista fue semillero de los primeros núcleos opositoristas en diversos países de América Latina (Chile, Cuba, Panamá, etc.). A Andrade se debe también la difusión de las principales obras de Trotsky y otros destacados miembros de la izquierda revolucionaria, pues su nombre estaba asociado a las editoriales Cénit y Hoy. Durante el año

1932 perteneció también a la redacción del semanario **El Soviet** y **La Antorcha**, ambos de vida efímera. Mayor importancia y duración tuvieron las Ediciones **Comunismo**, también cargo de Juan Andrade.

El fracaso de la insurrección de octubre de 1934 y el viraje que la IC dió a su anterior política ultraizquierdista reemplazándola por una línea frentepopulista como forma político-organizativa para combatir al fascismo, permitió que el estalinismo ejerciera una mayor influencia en la política española. Las Alianzas Obreras fueron olvidadas paulatinamente y la ICE junto con otras organizaciones obreras iniciaron conversaciones para transformar la anterior aspiración hacia el Frente Único por la creación de un Partido Único del proletariado. De estas negociaciones sólo se consiguió la fundación del Partido Obrero de Unificación Marxista en septiembre de 1935 (resultado de la fusión del BOC y de la ICE) y de cuyo Comité Ejecutivo formaría parte Juan Andrade. Las bases radicalizadas del PSOE o bien permanecerían en el partido o bien se pasarían al PCE; lo mismo cabe decir de la UGT y, en el caso de las Juventudes Socialistas, ésta se pasaron íntegramente al PCE a principios de 1936.

El arrinconamiento del POUM y el temor a quedarse al margen del movimiento antifascista que impulsaba la línea frentepopulista de la IC, hizo que el partido se integrara en enero de 1936 en la comisión electoral del Frente Popular de forma provisional y como mal menor. Juan Andrade fue el representante que firmó el programa del Frente Popular en nombre del POUM y, a lo largo del año 1936, tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, participó activamente en **La Batalla**, órgano del POUM. Las editoriales y las notas políticas diarias, escritas por Juan Andrade, reflejan las vicisitudes del movimiento obrero español en la Guerra civil. Aquí no podemos recoger toda la riqueza informativa que suministran (bajo el título "La revolución española día a día" han sido recopilados y publicados por Editorial Nueva Era), aunque sí destacar que revelan la política del POUM durante el periodo 1936-37, cuando la zona republicana se encontraba en una situación de doble poder antes de que el estalinismo y el reformismo se ocuparan de recomponer el Estado burgués. Con clarividencia, Andrade escribiría en noviembre de 1936 lo siguiente:

"La continuación del ritmo revolucionario obliga a buscar una variación más progresiva en la composición ministerial, composición que no podía ser otra que un Gobierno obrero apoyado en nuevos órganos de poder, es decir, en comités de obreros, campesinos y combatientes. En este momento preciso es cuando surgen los "unificados", para, fuertes en el apoyo material que puedan prestarles sus inspiradores, frenar aún más el curso clasista de la revolución. El stalinismo, o su edición catalana, los "unificados", se han convertido prácticamente en el factor más conservador en el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios de España."

Cuando los trabajadores militantes en el comunismo oficial han expresado a los dirigentes sus discrepancias por la política del Frente Popular, éstos les han explicado que dicha táctica presuponia la previa formación de la unidad de acción proletaria para hacer caer bajo la órbita de la clase trabajadora a todas las fracciones de la pequeña burguesía. La realidad es absolutamente contraria a esta estrategia. Se procura cada vez más obtener la firma de acuerdos unitarios genéricos entre las dos grandes organizaciones sindicales y entre anarquistas, socialistas y comunistas; pero el sentido de estos pactos, no es precisamente fortalecer las posiciones de la clase trabajadora, sino someter a ésta a la disciplina de las posiciones que adopten los gobernantes pequeño-burgueses". ■

Petr Uhl, Rudolf Bahro, el marxismo renace en el Este

*Son raros los análisis generales de los países del Este, en los que rige el "socialismo real", elaborados por opositores de estos mismos países mediante la aplicación del método marxista. No cabe la menor duda que, desde este punto de vista, el libro de Rudolf Bahro, *L'Alternative (1)*, constituye un acontecimiento. Aunque todavía es prematuro el pronosticar qué efectos llegará a producir en los países llamados socialistas, lo que ya es manifiesto es que su traducción en las principales lenguas europeas ha sido un trampolín para fructuosas discusiones en Europa occidental.*

Discusiones que se prolongarán durante mucho tiempo aún desde el momento en que ve la luz la traducción en francés (2) de la obra de Petr Uhl, veterano opositor checoslovaco, militante de la Carta 77 y del VONS, que se reclama del marxismo revolucionario y que se encuentra actualmente encarcelado. Al igual que Bahro, Uhl sitúa su análisis bajo el signo de una tradición marxista totalmente opuesta a la de los gobernantes y los ideólogos oficiales de los países del Este.

Alain Brossat

La confrontación de las tesis y de los análisis que proponen estas dos obras fundamentales, producto tanto la una como la otra de varios años de reflexión, es forzosamente estimulante. Tanto más cuanto que por encima de sustanciales diferencias entre la experiencia personal y política del "socialismo real" de ambos autores, la lectura de sus obras pone de manifiesto convergencias impresionantes.

El "protosocialismo"

El fundamento de *L'Alternative* es un análisis completamente original de los países del Este como sociedades "protosocialistas" que representan un "estado larval" del socialismo. Bahro explicita ampliamente estas calificaciones insistiendo sobre el hecho de que estas sociedades no han "rebasado el horizonte de la sociedad de clases", en la que se hallan bloqueadas en un estadio y en una forma que impiden por completo que se las considere como transiciones hacia un socialismo auténtico, sin hablar de la sociedad comunista. Están bloqueadas en esa forma porque perpetúan y reproducen una forma de la división del trabajo que hace desde un punto de vista antropológico general, a pesar de su singularidad histórica, una especie de "calco" de las sociedades capitalistas. En este plano, el análisis de Bahro se aproxima mucho también del de su compañero Robert Havemann (3). Estas sociedades están bloqueadas por otra segunda razón fundamental de la que Bahro pone en evidencia la articulación dialéctica con la precedente, porque ambas reposan sobre el reforzamiento del Estado y no sobre su declinar; porque son herederas de la revolución de Octubre que, según Bahro, ha precintado el destino de la utopía marxista en el siglo XX al bifurcarla hacia el estatismo, volviendo la espalda al concepto de la "Comuna", de la democracia comunista-comunal tal y como lo entendía Marx en sus escritos más cargados de utopía, en el sentido lo más eminentemente positivo del término.

Un veredicto

Por el momento, contentémonos con este sucinto resumen del punto de partida de Bahro para confron-

tarlo con las tesis de Petr Uhl. Al igual que el autor de *L'Alternative*, el opositor checo rechaza categóricamente todos los análisis que nosotros calificaremos de analógicos, es decir, que se esfuerzan en reducir las sociedades llamadas socialistas a una reproducción pura y simple de las sociedades capitalistas, analizándolas en términos de "vuelta al capitalismo" o de "capitalismo de Estado" de un nuevo tipo. Como Bahro, Uhl ve en estas sociedades una producción histórica de la que es conveniente descifrar la especificidad.

Como Bahro, insiste sobre el carácter presocialista, así pues, no-socialista de estas sociedades. Como él, fundamenta esta apreciación en el exámen de las relaciones sociales que perpetúan la explotación y la alienación del trabajador, las relaciones de dominación y de subordinación, el mantenimiento y el desarrollo de las diferentes formas de fetichismo. "Después de treinta años en el poder —escribe— la burocracia no ha cambiado nada fundamental en la posición de los trabajadores" y esta constatación, en su pluma, tiene el sentido de un veredicto que concierne a la naturaleza misma de esta sociedad.

Sin duda, para Bahro, las premisas antropológicas generales del análisis del "socialismo real", en un análisis cuyo hilo conductor y el horizonte no son nada menos que el destino de la cultura (civilización) humana en general, se hallan más constante y sólidamente apoyadas que en los textos de Petr Uhl; son más directamente políticos en su expresión y en su enfoque. Pero seguramente lo esencial es esa voluntad común a los dos autores —y que se une con los ardientes debates en el movimiento obrero de la Europa occidental— de reanudar el hilo con la inspiración antiestatal del programa comunista fundamental, con estas nociones de base del programa de Marx que son la abolición de la división del trabajo y la supresión de la alienación del productor a sus productos. Este retorno a Marx, lo mismo Uhl que Bahro, no lo entienden como una simple reactivación de ideas de base proyectadas hacia un futuro indefinido, sino como el fundamento de un cambio de rumbo actual para los países que se reclaman del socialismo. Esta reactivación de la utopía marxiana para el presente se funda sobre un análisis del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas pro-

ductivas en esos países, análisis que en gran medida es común a los dos autores (véanse los pasajes de las dos obras relativas a la automatización, a las perspectivas de desarrollo de la democracia socialista ligadas al impulso del audio-visual, por ejemplo, y también, sus reflexiones acerca de la reducción del tiempo de trabajo).

Un informe directo

Uhl precisa que en Checoslovaquia, *"la revolución socialista ha limitado a la expropiación de la burguesía su carácter proletario"* y en esto reside una de las claves de su razonamiento. *"Puesto que —añade— la idea "original" del socialismo, es la instauración de una relación "directa" (subrayado por nosotros) entre los productores y los medios de producción.* Es exactamente la misma lección que extrae Bahro de más de medio siglo de "socialismo estatal".

Para ser más precisos, diremos que tanto en el marxista alemán como en el checo se observarán, en el punto de partida, objeciones muy semejantes a lo que ellos consideran como la teoría trotskista "ortodoxa" (4) (y que Bahro expone de manera muy esquemática) y al concepto de Estados obreros degenerados o deformados tal y como lo entienden las organizaciones trotskistas. Uhl se levanta contra el hecho de que pueda atribuirse el calificativo de "obrero" a un Estado como el que rige los destinos de Checoslovaquia y que jamás, desde 1948, ha estado en manos de los obreros cuya explotación perpetúa, incluso admitiendo que la llegada al poder en esta ocasión estuvo apoyada en una gran movilización de la clase obrera checa y eslovaca. A pesar de rendir homenaje al fragmento de *La Revolución traicionada*, de Trotski, Bahro rechaza el concepto de "capa parasitaria" para caracterizar a la burocracia y con mayor firmeza aún cuando, como veremos más adelante, rechaza el concepto de clase obrera aplicado al "socialismo real". Por el momento, conformémonos con tomar nota, de su texto, de una fórmula expresiva que sin duda alguna no sería rechazada por Petr Uhl: *"Hace ya mucho tiempo que la burocracia ha dejado de ser una capa de pintura de color diferente que recubría el fondo (...)".*

Estas objeciones determinan naturalmente otras relativas a la noción de una "revolución política" tal y como la entienden las organizaciones trotskistas. Bahro aboga en favor de una revolución "cultural" que es nada menos que un cambio de orientación en el plano de la civilización misma, como lo demuestra su crítica del "productivismo" del "socialismo real" y de la "política de incremento" que en él prevalece: *"De modo general —escribe— hay que aprender a interpretar la idea misma de progreso de una manera totalmente distinta de la que estamos acostumbrados"*. Esta visión general explica sin duda el porqué no se detiene mucho sobre las condiciones políticas de un derrocamiento de los aparatos dominantes en los países del Este ni, tampoco, sobre la definición de una estrategia o de un programa para este derrocamiento. A este respecto, sus formulaciones son frecuentemente vagas e incluso contradictorias, que oscilan entre la idea de una simple reestructuración del poder político y la del derrocamiento total de perspectivas que permita *"la participación de todos los individuos en los puestos de mando del proceso de reproducción"*. Su análisis opone continuamente "al pueblo" a los "funcionarios del partido", a la "burocracia", (sus formulaciones, en esta cuestión, se aproximan mucho de las de los animadores del KOR polaco, por ejemplo), pero su definición de esta burocracia en términos sociales sigue

siendo de lo más flojo. Sin duda, para él, este problema tiene poco interés, puesto que, dice, *"Los enfrentamientos en el interior de nuestra sociedad no pueden ser considerados con arreglo a las contradicciones de clase tradicionales. La razón del movimiento de emancipación hay que buscarla en los elementos enérgicos, creadores, de todas las capas de la sociedad y en todos los dominios"*.

Petr Uhl está totalmente de acuerdo con Bahro al rechazar la idea según la cual la revolución necesaria en los países del Este quedaría reducida al derrocamiento de una estrecha capa de burócratas que usurpan el poder mientras que todas las demás cosas seguirían lo mismo. *"La clase obrera —escribe— deberá destruir la estructura burocrática en todos los niveles y en todos los dominios de la vida social"*. Al igual que Bahro, define el "antagonismo dominante" en la sociedad checoslovaca como aquel que opone el "centro burocrático dirigente" al "pueblo trabajador". Empero, si insiste en el hecho de que el derrocamiento de la burocracia debe enraizarse en un "cambio social radical", partiendo de las relaciones de producción y llegando a un derrocamiento total de la estructura política de la sociedad (de la relación entre los individuos, las clases y el Estado, entre lo económico, lo social y lo político), si insiste en las consecuencias culturales de esta revolución (vida privada/vida pública, estatuto de la familia, relación entre los sexos, etc.) es poniendo bien de relieve que *"esto no es una revolución social en el sentido clásico de la palabra"*. Y explica este aserto afirmando —esta vez de acuerdo con el análisis trotskista—: *"Dado que no reconocemos a la burocracia el carácter de una clase social, tampoco reconocemos a la revolución antiburocrática el carácter de una revolución social clásica"*.

En lo esencial, su obra se emplea en definir el contenido económico, social, político y cultural de esta revolución "no clásica", agarrando el hilo conductor de la autogestión cuyo objetivo estratégico se esfuerza en definir y el contenido programático que permitirían sacar estas sociedades "presocialistas" muy "inestables" como formas históricas, como lo indica él mismo al comienzo de su obra. Se observará, pues, que bien que inscribiéndose en la tradición trotskista, Petr Uhl insiste acerca de la dimensión social y cultural de la revolución política. Tal y como lo escribe de manera excelente, se trata de *"una revolución política que suprimirá los obstáculos sociales en la marcha hacia una sociedad sin clases"*, o aún, *"ante todo, en sus consecuencias, una revolución cultural"*. Este punto, repetimos, es esencial. Por varias razones: en primer término se trata de afirmar que esta revolución es una lucha política, es decir, una lucha en la que lo que se ventila es el poder, una lucha en la que se enfrentan el monopolio del poder de la burocracia en la sociedad y el Estado (con las formas de dominación monolíticas y autocráticas que se desprenden) y las masas trabajadoras que, al entrar en lucha, crean y desarrollan sus propias organizaciones. Los acontecimientos de Polonia durante el verano y otoño del 80 han demostrado claramente que cualquier dinámica de auto-organización de las masas en los países del Este lleva el germen de la dualidad de poder entre los órganos de auto-organización y el aparato político de la burocracia. Sobre esta cuestión, el concepto de la revolución política tal y como lo concibe Petr Uhl se opone totalmente a las quimeras de un compromiso histórico estratégico, durable, entre la burocracia y el "movimiento" alimentado por ciertos maestros del pensar de la oposición en Polonia.

Después, se trata de afirmar que el programa de la lucha contra la burocracia es claramente el de una **revolución** y no un superficial escobazo para barrer a un Gierek y reemplazarlo por un Moczar, de un "remiendo", el programa de esta revolución es infinitamente específico: lo político es, en todos sus puntos, la clave de lo social, de lo económico, de lo cultural. No se trata de reemplazar el poder de una clase por el de otra, de pasar de un modo de producción a otro; se trata de pasar de una sociedad en la que la base económica del capitalismo ha sido barrida por el puño de hierro y los métodos despóticos del estalinismo, de una sociedad presocialista híbrida y desprovista de todo porvenir histórico, al socialismo democrático basado en la auto-organización de los trabajadores.

Esta especificidad de las sociedades presocialistas es lo que sobredetermina el carácter **político** de la revolución de la que Petr Uhl formula el programa: los fenómenos de explotación del trabajo, de alienación y de opresión que existen y se reproducen llevan de golpe a **relaciones políticas** (y no económicas, como en la sociedad capitalista), a la dominación de la burocracia, a la relación entre el Estado y la sociedad.

Este es un punto en el cual la posición fundamental de Petr Uhl se muestra más coherente que la de Bahro, aunque sus desarrollos sobre este particular quedan algo elípticos. Precisemos, con todo, la evidente convergencia de su posición respectiva cuando se trata de insistir sobre la dimensión "ante todo" cultural de la revolución antiburocrática, en cierto modo. Hay que comprender con esto que, entre otras cosas, el verdadero socialismo —sin hablar del comunismo— es mucho más y otra cosa que el simple desarrollo de las fuerzas productivas, e incluso cierto "nivel de vida", es una alternativa de civilización. Evidentemente, no es por casualidad que los dos primeros "disidentes" que han planteado esta cuestión en toda su dimensión marxista hayan salido de dos países mucho más industrializados que la media del bloque "socialista".

En fin, poner adelante el factor **político y cultural** en la revolución antiburocrática es colocar en primer plano el factor histórico subjetivo, la dimensión de la praxis humana, contra todo fatalismo histórico y todo pesimismo del "eterno goulag". Uhl y Bahro han pagado con varios años de cárcel este optimismo histórico, esta negativa de considerar como "bloqueadas" en los hielos del totalitarismo las sociedades presocialistas. Los acontecimientos de Polonia les dan mil veces la razón.

La necesidad histórica

Abstengámonos, por lo tanto, de insistir demasiado unilateralmente acerca de las convergencias de nuestros dos autores. Ya hemos señalado anteriormente que Bahro eludía la definición **social** de la burocracia mientras que Uhl insistía sobre el hecho de que no puede ser considerada como una clase social. Esta diferencia no encubre simples variaciones semánticas, sino más bien una divergencia que puede ser de largo alcance. En efecto, Bahro, en la primera parte de su obra, insiste ampliamente acerca del hecho de que el destino de la Revolución rusa estaba absolutamente clausurado por las condiciones de esta revolución y, sin ambages, hace de Stalin y de la burocracia los agentes de una **necesidad** histórica: "*La toma del poder por los bolcheviques —escribe sin rodeos— no podía conducir a ninguna otra estructura social que la que tenemos hoy*". Se comprende fácilmente, después de esto, que la definición social de esta burocracia no

le apasione; lo esencial, para él, es calificarla por su rol de agente **histórico** inevitable durante toda una época pero que, hoy, penetra profundamente en el atolladero las sociedades desarrolladas del "socialismo real".

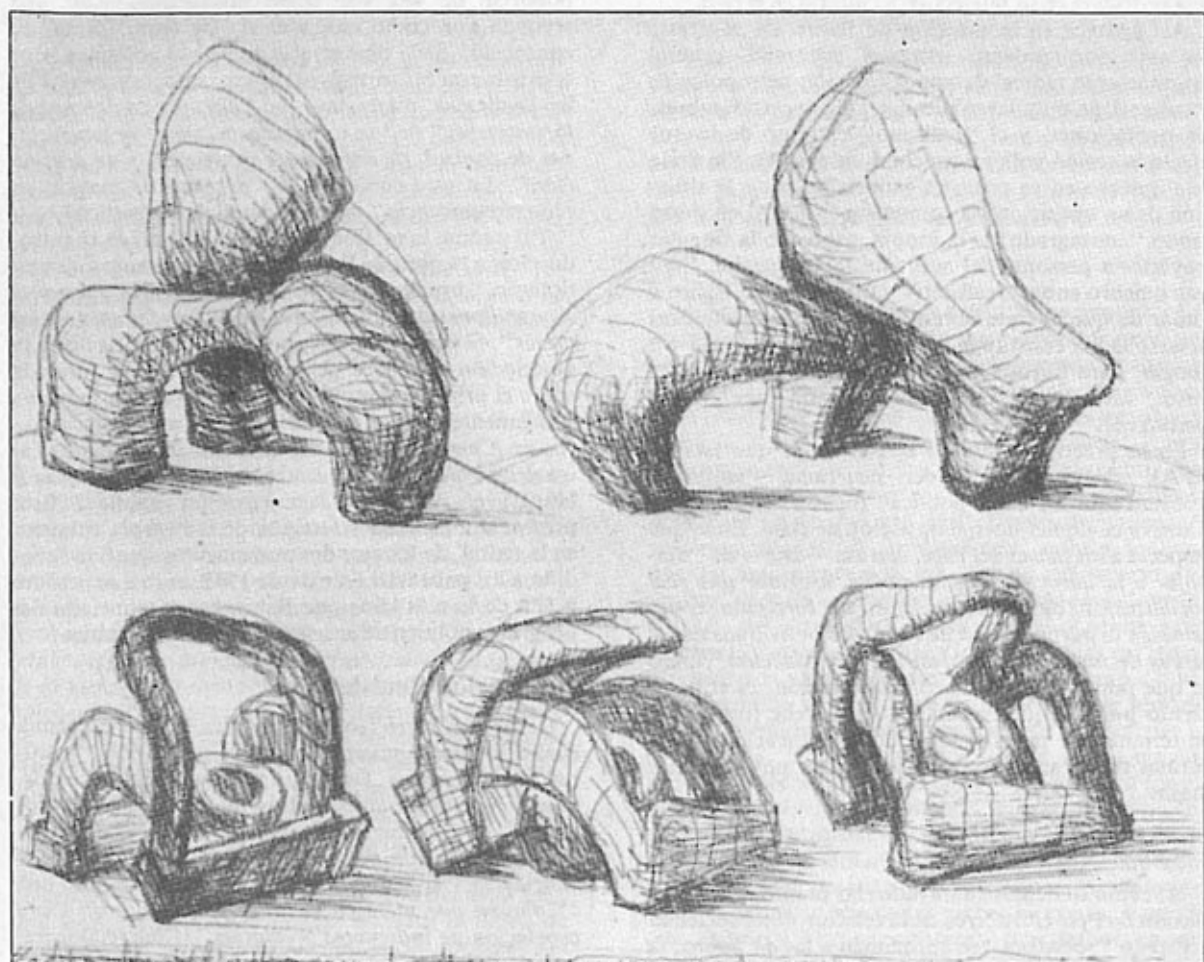
Por el contrario, en Petr Uhl, no se encuentra ni huella de este fatalismo histórico. Si guarda sus distancias, una vez más, de cara al trotskismo "ortodoxo" al afirmar que "*La degeneración de la URSS comenzó en una época en la que Trotski era uno de los principales personajes del régimen*" —y poniendo adelante la represión de la insurrección de Kronstadt— jamás presenta al estalinismo como un fenómeno ineluctable. Para él, no cabe la menor duda de que era posible otra vía para Checoslovaquia después de 1948, igual que era posible también otra salida de la Primavera de Praga distinta a la que resultara de las vacilaciones y finalmente la capitulación de la dirección Dubcek.

Tal divergencia tiene las mayores consecuencias. Pone de relieve una vez más, por un lado, la dimensión militante del libro de Petr Uhl, su cuidado de formular con la mayor precisión el programa de la revolución **política** de la revolución antiburocrática y, por otro lado, la propensión de Bahro a producir un discurso **general** de la evolución histórica en el siglo XX, con riesgo a veces de caer en la abstracción vacía. Pero, sobre todo, la posición fatalista de Bahro con relación al destino de la URSS —y por consiguiente del movimiento comunista— hasta nuestros días le conduce a un análisis del "socialismo real" en términos sociales que es la raíz de su mayor divergencia con Petr Uhl.

Desde la idea de que la URSS no podía proseguir otro camino más que el emprendido hasta la de que la Revolución rusa haya sido una "ilusión" de revolución socialista, una astucia de la Historia, no hay más que un paso que Bahro franquea alegremente, siguiendo la ruta que numerosos comunistas de izquierda, anarcosindicalistas y sociademócratas emprendieron en los años 20. A favor de esta "ilusión", de este equívoco, o de esta superchería histórica, se perfila pues una figura histórica y social original en la cual **desaparecen las categorías de clases tradicionales**. "*El Estado de los pueblos que se hallan en vía de industrialización no puede, pues, en primer lugar ser otro que burocrático*", dice con tono abrupto Bahro. Y añade, para remachar bien el clavo, que "*Lenin atribuyó al Estado las funciones que, según Marx, tenían que ser ejercidas por la 'libre asociación'*".

Desaparición del proletariado

Este proceso fatal desemboca en la aparición de una configuración social en la que la oposición del Estado burocrático contra las masas en general se perfila como la "contradicción principal", parafraseando Bahro los términos del Presidente Mao. Así, en primer lugar, se disuelve el concepto del proletariado, el de la clase obrera. Bahro viene a decir que, "*El proletariado, sujeto colectivo de la emancipación general, sigue siendo una hipótesis filosófica en la que se ha concentrado el componente utópico del marxismo*", declaración que completa con la siguiente fórmula: "*El marxismo es una teoría que se funda en la existencia de una clase obrera, pero no es una teoría de ella*". De donde se desprende, evidentemente, que "*El concepto de clase obrera no es apropiado* (subrayado por nosotros) *para hacernos comprender los caracteres estructurales esenciales de nuestra sociedad y el problema de sus perspectivas de futuro*". Lo que caracteriza las sociedades "protosocialistas", dice Bahro, no es



Proyectos para escultura en la colina. 1969.

una división "horizontal" en clases sino una serie "vertical" de capas —añade— "con transiciones todavía rígidas".

Muy otra es la posición de Petr Uhl quien, analizando las estadísticas oficiales del Estado checoslovaco, a pesar de las falsificaciones, discierne el peso predominante, en las relaciones económicas y sociales, de una clase obrera cuyo número va en aumento y que la burocracia explota y mantiene al margen de los centros de decisión, económicos, sociales y políticos. Contrariamente a Bahro, insiste ampliamente acerca de los lazos de solidaridad objetiva que unen a la clase obrera de los distintos países del Este en la perspectiva de una revolución antiburocrática y, también, a los que unen a la clase obrera de estos países con los de los Estados capitalistas. Para él, este internacionalismo puesto infatigablemente en primer plano no es una proclamación retórica sino la consecuencia de la idea de que la clase obrera constituye el factor esencial en la perspectiva de la desaparición de las relaciones que existen en el "socialismo real". Tal convicción no es resultado de un acto de fe en la ortodoxia marxista y si de un exámen de los acontecimientos ocurridos en Hungría y Polonia en 1956, en Polonia en 1970-71 y 1976 y, claro está, como veremos, en 1968 en Checoslovaquia.

"Conceptos tradicionales"

A este nivel, pues, la oposición con Bahro es total. Y no solo porque el autor de *L'Alternative* pone en duda el carácter "apropiado" del concepto de clase obrera

en los países del Este, sino porque la lógica de su análisis de la emergencia de las condiciones —ligadas al desarrollo de las fuerzas productivas— propicias a la expansión de lo que él denomina "trabajo general", le incita, a pesar de las formulaciones a veces contradictorias, a poner el acento sobre la superioridad del trabajo intelectual, lo que evidentemente no deja de tener sus consecuencias cuando se trata de analizar las fuerzas motrices de las futuras conmociones en Europa del Este. El mismo Bahro pone en relación directa el hecho de que "Los conceptos tradicionales de clases han sido sobrepasados por la evolución estructural de las fuerzas productivas" y la idea de que "El trabajo intelectual está hoy a la cabeza de las fuerzas productivas subjetivas".

Incluso si se defiende de querer reemplazar el pretendido "rol dirigente de la clase obrera" por el "rol (efectivamente) dirigente de los intelectuales" sigue produciendo —cuando llega a las consecuencias prácticas— un análisis bastante singular de la Primavera de Praga al insistir sobre el hecho de que "El movimiento no arrancó de la base, sino del personal de la superestructura y, más exactamente, de los ideólogos"... Por el contrario, Petr Uhl insiste ampliamente sobre el hecho de que la dinámica profunda del movimiento, su dinámica efectivamente subversiva para el orden burocrático, era la tendencia "autogestionaria" llevada por la autoactividad renaciente de la clase obrera, incluso si los factores de desencadenamiento del movimiento han aparecido en primer término en el aparato del Partido y del Estado y han sido alimentados por

una profunda crisis intelectual y cultural en el país.

Así aparece en la posición de Bahro un contraste bastante sorprendente entre el programa general infinitamente radical de una revolución antropológica y cultural de muy largo alcance y las incertidumbres, las oscilaciones, y el "realismo" extremo de lo que afecta la acción política concreta, inmediata. Sin duda este quiebro en su posición expresa en parte la situación de un opositor comunista en RDA, en cierto modo "consagrado" a la utopía, así como la singular trayectoria personal del autor de *L'Alternative*. Pero este quiebro entre "realismo" y utopía lleva a Bahro a dudar de que la clase obrera de los países capitalistas desarrollados constituya un factor revolucionario y a abogar, para Europa occidental, en pro de "compromisos históricos" más flexibles aún que el de Berlinguer.

En la práctica (véase su acción desde que está en RFA), el ultimatismo del programa "cultural" máximo equivale a una política "realista" en la cual se disuelva cualquier noción de acción de clase. En lo que respecta a los países del Este, se trata —dice— de "despojarse a la burocracia de su poder, asegurar una real socialización de las actividades de dirección como también la participación de todos los individuos en las tareas de mando del proceso de reproducción"; pero lo que falta de claridad, en esta posición, es el basamento político que, necesariamente, debe formularse en términos de proposiciones de reivindicaciones y de formas de organización para encontrar un eco en las masas.

Un anacronismo

Si, como lo hemos subrayado, las premisas de la reflexión de Petr Uhl acerca de la relación entre sociedad y Estado "socialista" se aproximan a las de Bahro, la atención que presta a la definición de un programa de la democracia socialista auténtica las distancian radicalmente. Partiendo de una crítica incisiva de las formas "clásicas" de la democracia, principalmente de la democracia parlamentaria en régimen burgués (posición que igualmente le distingue de numerosas corrientes de oposición en Europa oriental), describiendo cualquier forma de democracia indirecta fundada como "un anacronismo y un freno", se pronuncia a favor de una democracia directa fundada sobre el concepto de "unidades autogestionarias". Para él, esta democracia cobra raíces en la producción, en el emplazamiento de unidades autogestionarias a nivel de unidades de producción (consejos obreros). Para él, esta "democracia de la producción" es la que constituirá el pivote sólido de la extensión de la democracia directa al conjunto de la sociedad. Si, al igual que Bahro, insiste sobre la prioridad de reivindicaciones como la reducción radical del tiempo de trabajo, alternar la ejecución de tareas muy calificadas con otras que lo son menos o no lo son nada, sobre todo el abanico de medidas para permitir desprender al hombre de las relaciones de alienación en el trabajo —pues son éstas las precondiciones para la instauración de un régimen de democracia directa—, se opone a él en un punto decisivo: para Bahro, la sociedad como "Asociación de comunas" debe organizarse con prioridad sobre una base territorial. No se trata —dice— de confundir este régimen asociativo general con "cooperativas de productores". Uhl, al contrario, enraiza la democracia directa en la producción. Piensa incluso que, durante toda una fase de transición, los trabajadores deberían estar sobrerrepresentados; dis-

pondrían de una voz como productores y de una segunda voz como ciudadanos. De igual forma, su concepción de la democracia socialista auténtica hace coexistir con las formas soviéticas autogestionarias de los sindicatos, pieza clave del "circuito de defensa de los intereses" de los trabajadores, con "organizaciones de control, de defensa, de protección y de prevención". En este contexto, el "derecho de huelga, en toda circunstancia" es una reivindicación esencial.

Tal y como lo escribe Jean-Yves Touvais en su introducción a la obra de Petr Uhl, este programa autogestionario "arranca de las discusiones que han apasionado a millones de trabajadores en su país durante varios meses". Si puede avanzar con precisión y método en la descripción que hace de la sociedad futura fundada sobre el principio autogestionario, es porque se funda sólidamente sobre el movimiento de los consejos obreros en Checoslovaquia durante los años 1968-69, al igual que ha asimilado las experiencias de Polonia y Hungría en 1956 y la de la autogestión yugoslava. Esta presencia inmediata y fecunda de la historia concreta en la teoría, de los grandes movimientos que han sacudido a los países del Este desde 1945, es lo que permite a Uhl de ir más lejos que Bahro en el enunciado del programa político de la revolución antiburocrática.

Revolución "cultural"

Desde una torre teórica muy alta, Bahro proclama cuáles son los fundamentos de la revolución "cultural" que preconiza. De lo que se trata, es de "transformar radicalmente la estructura de las necesidades sociales", de orientar la producción hacia el desarrollo de un "excedente de cultura", de un "excedente de conciencia" que pueda permitir la expansión de una "Comuna que merezca el título ya antiguo de Libre asociación de individuos solidarios". Concretamente, esto significa que la revolución cultural pugna:

- contra la antigua división del trabajo
- contra la exclusión de las masas de una cultura que permita una visión sintética de las cosas
- contra una concepción de la infancia patriarcal y minorizante
- contra la inexistencia de la vida en comunidad
- contra el burocratismo".

La crítica despiadada que Petr Uhl hace de los modelos de existencia pequeño-burgueses en vigor bajo el socialismo real, la defensa de inspiración libertaria que expone a favor de la "libertad de la persona humana", libertad sexual, libertad de convicción y de creación, libertad de movimiento, en pro de una "nueva moral" en las relaciones humanas se confunde ampliamente con la inspiración de Bahro sobre esta cuestión. En la tela de fondo de esta tentativa por definir con nuevo contenido de la vida social en una democracia socialista auténtica, se encuentra en estos dos opositores marxistas (como en Robert Have-mann) la misma interrogante fundamental sobre el aspecto actual de la alternativa socialismo o barbarie. Esta interrogante se cristaliza sobre todo en torno a la crítica de la ideología del incremento industrial en vigor en los países del Este, y que provoca los estragos ideológicos que ya conocemos; no es por casualidad; sin duda, que con estas dos obras, la dimensión ecológica de la crítica del sistema cobra su lugar en el análisis marxista de las sociedades de Europa del Este. No cabe duda de que en Bahro, esta crítica prolongada por su acción política en RFA contiene fórmulas ambiguas sobre el "productivismo" que podrían tender a

situar al autor del lado de los adeptos occidentales del "crecimiento cero". Como lo demuestran los recientes acontecimientos de Polonia, un tal desliz podría llevar muy lejos de la realidad de los países del Este. En efecto, se ha mostrado a todas luces que el encarnizado productivismo puesto en práctica por el aparato no es otra cosa que el reflejo de la desigualdad estructural que da forma a esta sociedad y que no es de exceso de producción de bienes materiales de lo que sufren los obreros polacos sino de un sistema, de la opción de producción de estos bienes y de un modo de distribución que los expolia sistemáticamente.

El "modelo" leninista

También es interesante confrontar el punto de vista de estos dos opositores marxistas acerca de la teoría leninista de la vanguardia revolucionaria y, de un modo más general, del partido revolucionario. Sin asimilar de ninguna manera el partido tal y como lo concibiera Lenin, a la burocracia estaliniana, el uno y el otro se entienden en rechazar el "modelo". "La burocratización del partido, dice Bahro, ya estaba implícita en sus principios de organización en tiempos de la vieja social-democracia, muy anterior al partido bolchevique de nuevo tipo". Declarándose partidario de la creación en Alemania del Este de una "Liga de los comunistas" independiente de la estructura del partido, afirma de modo un tanto contradictorio que "El partido no es en modo alguno una necesidad metafísica". Sobre todo se empeña en definir esta "Liga" como un partido de nuevo tipo que no sea "un partido obrero en el sentido estrecho y superado del término", sino una "organización que se atribuye el deseo de emancipación propia de todas las clases sociales", ni "un partido de masas", manipulado por una "élite autoproclamada", ni una "corporación de detentores del saber, sectaria y cerrada a la sociedad", ni un "super-Estado que dirige y controla el aparato del Estado propiamente dicho", ni un "ejército disciplinado".

Petr Uhl formula una crítica igualmente resuelta del partido de vanguardia autoproclamado al que opone, para los países del Este, unas organizaciones amplias, pluralistas, tolerantes y fraternales cuya actividad y funcionamiento prefiguren un auténtico socialismo, que se encuentren ligadas a las masas por mil lazos de complicidad y se apoyen sobre su sostenimiento tácito o activo según los momentos y que, al filo de los periodos, cobran forma de vanguardias reales: Carta 77 en Checoslovaquia, KSS-KOR en Polonia, etc. Sacando las consecuencias de la propia experiencia, se opone resueltamente a la formación de organizaciones conspirativas clandestinas, núcleos insignificantes rápidamente detectados por la policía e impotentes para abrirse paso hacia las masas. Lo mismo que Bahro, esta aversión que siente contra las formaciones políticas cerradas y sectarias que están convencidas de encarnar el destino de la humanidad, y el esfuerzo conexo para definir nuevas estructuras para la acción política de oposición en los países del Este, es presentada por Petr Uhl como la prolongación directa de la reflexión acerca del destino del socialismo en el siglo XX; no cabe duda de que, tanto para el uno como para el otro, los efectos recurrentes de un vanguardismo de inspiración leninista son uno de los componentes de la descomposición de las perspectivas del socialismo. Sobre este punto, se aparta claramente de las posiciones trotskistas que, por lo demás, siguen siendo su referencia general, y se aproxima de ciertas posiciones

de los intelectuales polacos radicales del KOR. En cuanto a Bahro, después de haber atacado enérgicamente a los partidarios de "la élite autoproclamada", se lanza en una carga vigorosa contra los partidarios del pluralismo político en un verdadero régimen socialista y aboga de modo sorprendente a favor del partido único... No es esta la única contradicción de su libro.

El test polaco

Muchos otros aspectos de este diálogo implícito por encima de muros y fronteras entre estos dos opositores comunistas merecerían ser subrayados y analizados. La perspectiva profundamente internacionalista de la revolución burocrática que inspira sus textos, por ejemplo. Pero, para concluir sobre lo esencial, subrayemos una vez más el extraordinario contrapunto que, con relación a estos textos, constituye la experiencia polaca de finales del año 1980. Contra las corrientes archimayoritarias de la disidencia, contra los que pugnan únicamente por una "buena democracia a la inglesa", contra quienes se posternan ante los "eternos valores del terruño", contra todos aquéllos para quienes la Carta de Helsinki y las mayúsculas del Hombre genérico y sus Derechos son el insuperable horizonte político y moral de nuestro tiempo, la historia juzga, la realidad juzga. No es por el terruño, ni por la democracia "a la inglesa" por lo que se han movilizad los trabajadores de Gdansk, sino por otra forma de socialismo cuyo movimiento mismo, sus discusiones, sus organizaciones de combate, y su programa de lucha indican la orientación y la configuración. Este socialismo democrático y autogestionario, apoyado sobre la movilización de las masas, es precisamente el que Bahro y Uhl se esfuerzan por definir en sus búsquedas teóricas. Pero, sobre un punto, los acontecimientos de Polonia, desmienten categóricamente los análisis de Bahro y confirman plenamente los de Petr Uhl: porque, es, sencillamente, la clase obrera en tanto que tal quien ha desempeñado la función de fuerza motriz en el curso de los acontecimientos. ■

Notas:

- (1) *L'Alternative* Editorial STOCK 2, 1979.
- (2) *Le socialisme emprisonné* - Editorial STOCK 2, 1980.
- (3) *Entre communiste en Allemagne de l'Est* - Ed. MASPERO, 1979. Véase también *Morgen* (en alemán), Ed. PIPER, 1980.
- (4) La cuestión, evidentemente, reside en saber qué es lo que se entiende por "vanguardismo". Bahro rechaza el concepto de "revolución política" en el sentido en que lo entienden los trotskistas, no tanto porque conteste su análisis de la burocracia como una casta que pone en duda el concepto de la apropiación política de la clase obrera, en la medida en que el concepto mismo de clase obrera, para los países del Este, le parece más que alentador. Petr Uhl, hace suyo el concepto de "revolución política" bien que insistiendo sobre las implicaciones sociales y culturales de esta revolución. Si esta preocupación le lleva a rechazar formulaciones que una interpretación restrictiva u oportunista ("deformaciones", etc.) puede reducir a un simple "remiendo" político el concepto de la revolución política, su posición se inscribe en la continuidad de la de Trotski sobre esta cuestión. En lo que la discusión sigue ampliamente abierta es respecto al calificativo de obrero atribuido a las democracias populares. Uhl subraya con razón que, diferentemente a la URSS, la dictadura de la burocracia en ellas ha sucedido sin transición "obrero" (en el sentido de la instauración de la dictadura del proletariado fundada sobre la democracia obrera) a la dominación del capital. Para él es un argumento suficiente para rechazar el calificativo de "obrero" cuando habla de estos países, lo que no le impide en modo alguno delimitarse categóricamente en las teorías que cultivan la abstracción vacía de la "restauración" del capitalismo. Vemos, pues, que si Uhl y Bahro formulan objeciones bastante similares sobre cierta versión de la "revolución política en los Estados obreros deformados o degenerados", la dinámica de estas objeciones no es de ningún modo semejante en ambos. Bahro, como Uhl, ha demostrado que la relación entre los trabajadores y el Estado, el poder, en los países del Este, es tal que el programa de la revolución y la forma de la revolución son estructuralmente diferentes del programa y de la forma de una revolución social "clásica". Pero no se da cuenta de qué fuerza social será el elemento motor de esta revolución. Su programa de la revolución en los países del Este también oscila entre el maximalismo utópico y el "realismo" de pasos cortos... Petr Uhl, por el contrario, presenta un programa de transición del presocialismo burocrático al socialismo democrático.

Anti-Tibaldi

En una primera lectura del libro de Ettore Tibaldi (1) el lector, llegado del ecologismo militante, no sabe si es mayor la distancia entre sus propias convicciones y el discurso de Tibaldi o si, por el contrario, éste hace esfuerzos notables para alejarse. En definitiva, y después de sucesivas lecturas, apuntes y comprobaciones una cuestión queda clara: la crítica de Tibaldi a la "acción ecologista" es parcial, es decir, se refiere a una sola de las diferentes formas de practicar el ecologismo. La insuficiencia de conocimientos acerca del autor puede justificar el calificar el análisis como "local" y exclusivamente basado en los grupos ecologistas italianos.

Fernando Martínez Salcedo

EN este sentido, el estudio de Tibaldi —con las diferenciaciones y matizaciones que luego iremos viendo— podría ser suscrito por buena parte del movimiento ecologista del Estado español, al menos, por aquella procedente de la militancia revolucionaria en los años finales de la dictadura franquista.

La consideración general de Tibaldi de que el ecologismo es sólo una parte de la actividad social contra el capitalismo es generalmente aceptada en dos sentidos: en primer lugar, excepto determinados sectores "mesiánicos" del movimiento, los militantes ecologistas tienden a analizar la degradación ambiental como un factor necesario dentro del desarrollo de la sociedad capitalista y por lo tanto, se tiende a aceptar planteamientos globalizadores que van tanto a las formas concretas de degradación como a su origen pormenorizado en una sociedad de clases que justifica de igual forma la explotación a los hombres y al medio.

Este intento de globalización tanto de temas como de formas de actuación, se concretaría en la entrada dentro del movimiento de parcelas de problemas que rebasan el primer marco de acción naturalística o de degradación ambiental y así, la lucha antinuclear, la preocupación por el tema urbano o la ordenación del territorio, van siendo concebidos por los ecologistas como una forma de oposición política al sistema.

En segundo lugar, la procedencia de un importante sector garantiza la inserción dentro de la ideología ecologista de buena parte de los problemas que durante los últimos diez años han movilizad a la izquierda revolucionaria en Europa occidental.

La crítica del "ecologismo" capitalista

Parece claro que la alternativa ecológica (entendida dentro del marco de la escasez generalizada de recursos, crecimiento poblacional y creciente desigual reparto de bienes) no es única.

El análisis de Tibaldi tiende a situar la lucha ecológica en la cadena de obstáculos que la clase obrera encuentra históricamente en el desarrollo de su programa. Pero ignora que el avance del movimiento ecologista se desarrolla en el marco de las sociedades desarrolladas en que amplias franjas de trabajadores pasan a ser meros contempladores del sistema que los explota con la inestimable ayuda de los sindicatos reformistas.

"Por esto los objetivos naturales de la lucha obrera contra la nocividad del trabajo, mejor dicho, contra el trabajo como nocividad, son la lucha para trabajar menos, para reducir el tiempo de permanencia en la fábrica; la exigencia de dinero como única contrapar-

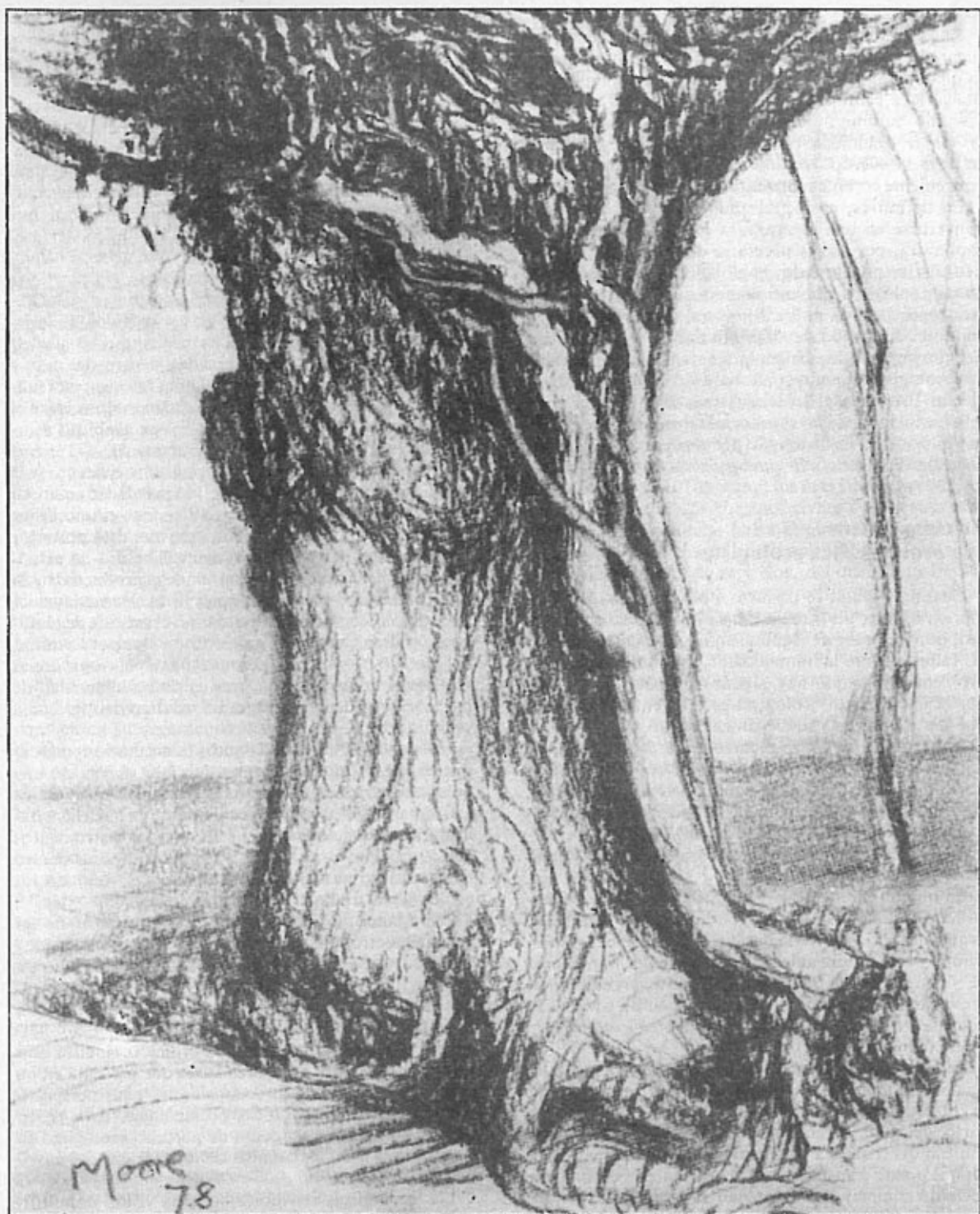
tida al "consumo" de sí mismo, al propio deterioro". Estos objetivos naturales que señala Tibaldi, no son, en la mayor parte de los casos, asumidos por la clase trabajadora y en épocas de crisis —como ésta— vemos afanarse a los sindicatos en dar salidas que en absoluto van en la línea de trabajar menos, de producir menos, y, en definitiva, de dar viabilidad a una alternativa que no signifique la excusa futura de hundirse más en la trampa del capital y en su capacidad de reproducir funcionamientos sociales que tiendan a colapsar las posibilidades individuales y colectivas de cambio revolucionario.

Es cierto, que en el otro campo, el de la clase antagónica, se acentúan los esfuerzos para utilizar el lavado de cara ecológico como la única salida a la crisis, salida que necesariamente comportaría el dejar intactas las relaciones de producción y la propiedad de los medios de producción. Y hoy, esta salida del capital está prevista y a punto su funcionamiento. En este sentido, hay que coincidir con Tibaldi en la vulnerabilidad de la contestación ecológica, pero, a la vez, hay que insistir en el peligro que supone la ignorancia de los partidos revolucionarios y los sindicatos de clase de la problemática ecologista.

De cualquier forma, que hay dos (o más) ecologismos es algo que no es nuevo. La aparición de grupos ecologistas "de derechas" en Francia durante los últimos cinco años, el deslizamiento hacia posiciones autocráticas de algunos sectores ecologistas y la incomprensión del Partido Verde alemán en el tratamiento de la doble militancia y las relaciones con los partidos de la extrema izquierda alemana, son datos a tener en cuenta.

Por lo tanto, no cabe duda de que un correcto análisis ecologista puede posibilitar aberraciones políticas por ignorancia de las relaciones que se superponen a la nueva degradación o el ataque indiscriminado (indiscriminado en el objetivo pero en absoluto en el origen) a los ecosistemas. Lógicamente estas extralimitaciones se van a dar desde la óptica capitalista que tenderá a integrar la problemática ecológica como un nuevo método de obtención de rentabilidad a dos niveles, uno social, acentuando o fijando la atención en los temas que señalados como ecológicos no pongan en cuestión el sistema sino que ayuden a desplazar la atención de los trabajadores y, dos, económica, realizando todo un proceso de concentración a expensas de la "furia descontaminante" en donde los sectores más avanzados del capital, manipulando la tecnología de control del medio ambiente, estarían en la cúspide del proceso de autotransformación capitalista.

La llamada dictadura ecológica no estaría muy lejos.



Roble a hiedra. 1978.

El proceso de control de "lo ecológico" se saldaría de esta forma con una creciente dominación de instalaciones, hombres, ciudades y territorio en aras del objetivo final del aire y el agua limpio.

Pero estas polémicas están presentes y no ausentes como parece dar a entender Ettore Tibaldi. Y frente a las "damas de la Cruz Roja de la ecología que sólo pueden proponer redes de vigilancia burocrática de la contaminación sobre el territorio", el movimiento ecologista empieza a tratar cuestiones como la descentralización, el autogobierno de las comunidades, el derecho de veto, la defensa y autodefensa frente a los

intereses del Estado y, en definitiva, la necesidad de que la lucha ecologista se sitúe en un nivel de confrontación clara con el sistema.

Por eso, es necesario hablar con Michel Bosquet (2) de su ecología y la nuestra.

"La ecología es como el sufragio universal y el descanso dominical: en un primer momento, todos los burgueses y todos los partidarios del orden os dicen que queréis su ruina y el triunfo de la anarquía y el oscurantismo. Después, cuando las circunstancias y la presión popular se hacen irresistibles, os conceden lo que ayer os negaban y, fundamentalmente no cambia

nada".

"(...) Entonces más vale, desde este momento, no jugar al escondite: la lucha ecológica no es un fin en sí, es una etapa. Puede crear dificultades al capitalismo y obligarle a cambiar; pero cuando, después de haber resistido durante mucho tiempo por las buenas y por las malas, finalmente ceda porque el impasse ecológico se haya convertido en ineluctable, integrará este inconveniente como ha integrado todos los demás".

En definitiva, es factible que el ecologismo pueda convertirse en una escaramuza más de la integración capitalista, por eso es necesario desarrollar dos líneas de trabajo: por un lado, la globalización social de los temas ecológicos dimensionando los temas en su correcta perspectiva política y social y, por otro, activando el desarrollo de alternativas de clase en el seno del movimiento, lo que anulará el fantasma del localismo ecologista tomado como base del ecologismo derechista. Esto conlleva necesariamente la actuación de los revolucionarios en el seno del movimiento ecologista y la apertura de un amplio debate dentro de las organizaciones políticas y los sindicatos de clase.

La clase obrera y la problemática ecologista

Cuando Tibaldi se plantea: "No puede existir una fábrica limpia, un trabajo limpio, un capitalismo limpio, porque la ley del capitalismo es la mercancía y no las fábulas sobre la humanidad", está minimizando el problema, y es que hay algunos problemas tratados por el movimiento ecologista escasamente trabajados por la clase obrera y sus organizaciones.

El agotamiento de los recursos, el crecimiento de la población, la posibilidad creciente de enfrentamientos nucleares generalizados, la conservación de la riqueza vital en el planeta Tierra, son cuestiones que necesariamente van a tener una salida desigual y en las que el capitalismo se reserva la respuesta centralizada a todas ellas.

En ningún momento —y en esto, estamos de acuerdo con Tibaldi— se puede utilizar esta catástrofe —que en todo caso sería desigual en el espacio y en el tiempo— como una amenaza o una predicción futurista, ya que su asunción incompleta por los trabajadores provocaría el efecto buscado por los planificadores capitalistas: la falta de inserción de los problemas ecológicos en una dinámica más amplia.

La clase obrera es, desde luego, la primera perjudicada en un ambiente contaminado. Y de forma análoga, no es igual el reparto de responsabilidades. Este reparto desigual se conforma como un subproducto cultural dentro de la clase trabajadora y, de hecho, el capital puede transformar este sentimiento en una especie de complejo de culpabilidad llamado a cumplir funciones de aparente "solidaridad" e "igualdad".

Sin embargo, en la descripción de la situación actual no es posible seguir aduciendo exclusivamente los perjuicios diferenciados. En primer lugar por razones de análisis. La dificultad no está en pronosticar una ecocatástrofe que, por otro lado, parece improbable (sobre todo generalizadamente), sino en definir cuál es la mentalidad (versus ideología) con la que las sociedades occidentales avanzadas recogen una determinada parcela de la crisis ecológica y cómo ese estado de ánimo recorre —está recorriendo— la estructura social haciendo del movimiento ecologista algo inconcreto, deslabazado, pero a la vez eficaz, participativo, recogiendo a la vez sectores de procedencia pequeño-bur-

guesa clásica y sectores de antigua militancia revolucionaria.

En segundo lugar está la propia estructuración del movimiento ecologista que dificulta la estipulación de un programa de clase; dificultad basada en la diversa procedencia de la militancia de base y en el rechazo de los partidos de izquierda a plantear alternativas globales (de modelo social) en lo que podría calificarse como crisis de sociedad y no atenuada en afirmaciones parciales (crisis capitalista, crisis energética, etc.), que ocultan la realidad y justifican una militancia desfasada frente a la "crisis permanente" que debería provocar en breve el ascenso revolucionario.

La referencia a la catástrofe final no es más frecuente en el ecologismo que en los partidos de la izquierda, y mientras que en el movimiento ecologista se plantea la inviabilidad de la salida dentro del marco social actual, la izquierda tradicional retoma con renovado interés el parcheamiento al orden establecido o el apuntalamiento de marcos políticos en absoluto acordes con los objetivos finales programáticos.

En definitiva, los ecologistas ponemos el acento más en el carácter desarrollista de la sociedad que en su estructuración económica o política. Este es uno de los aspectos más criticables del análisis marxista posterior a Marx: —y que olvida totalmente Tibaldi— la no correspondencia exacta entre el modelo productivo y la conformación de la estructura política. De esta forma, la crítica ecológica se centra más en el análisis de la utilización de recursos.—y en cierta forma, por lo tanto, del modelo productivo, pero no sólo en él— que en las relaciones de producción, más en la cotidianeidad de los procesos que en el programa máximo del "gran día socialista".

Volviendo al libro de Tibaldi, es necesario remarcar que es incorrecto presentar a la clase obrera de una forma homogénea en su grado de conciencia y en su actitud ante los problemas ecológicos, ya que el capitalismo ha desarrollado a la perfección los instrumentos de integración, y, en definitiva, quedan huecos dentro de la problemática de los trabajadores, uno de los cuales es, sin duda, la temática ecológica.

Así cuando Tibaldi afirma: "...los obreros de las grandes metrópolis tienen una posición política muy parecida: no responderán a los llamamientos "desesperados" de la patronal contra la degradación ambiental, porque ya están respondiendo, concretamente, con una lucha en un frente mucho mayor".

Desde el punto de vista de la crítica ecologista esto no deja de ser una visión idealizada que presenta en un continuo inexacto las preocupaciones y las perspectivas actuales de los obreros occidentales. Esta visión obrerista impide la asunción de parcelas ecológicas en el programa y en los análisis de los teóricos del movimiento obrero.

Los ecologistas reivindicamos una visión desmitificada de la clase obrera, y citamos, ya para acabar, las palabras de dedicatoria cuando menos sarcástica de Josep Vicent Marqués en su libro *Ecología y Lucha de Clases*, (3) y que sintetizan a la perfección esta visión menos idilica y, a la vez más real: **A la clase obrera saliendo de un seiscientos.** ■

NOTAS

- (1) TIBALDI, Ettore: ANTI-ECOLOGIA. Editorial Anagrama. Barcelona 1980.
- (2) BOSQUET, Michel: Ecología y política. El Viejo Topo. Barcelona, 1980.
- (3) MARQUES, Josep-Vicent: ECOLOGIA Y LUCHA DE CLASES. Madrid, 1978.

Golpes de Estado

Esta es en realidad una reseña, por Hobsbawm, del libro de Edward Luttwack titulado: Coup d'État, a Practical Handbook, publicado en Londres en 1968. La reseña de Hobsbawm forma parte de su colección de Ensayos contemporáneos editada por Ariel con el título de Revolucionarios (1978). La traducción es de Joaquim Sempere.

Eric J. Hobsbawm

DESDE tiempos de Maquiavelo no han dejado de existir observadores inteligentes que hayan explotado uno de los recursos estilísticos más efectivos para la literatura que no es de ficción: el contraste entre las versiones oficiales de la vida política y la realidad. Se trata de un recurso efectivo por tres razones: porque es de fácil uso (lo único que hay que hacer es abrir los ojos), porque la realidad política está notoriamente lejos de la tramoya moral, constitucional o legalista que envuelve las acciones políticas y finalmente —y ésta es la razón más sorprendente— porque el público aún conserva una buena predisposición a dejarse impresionar por ello. El señor Luttwack es, sin duda, un observador inteligente y muy bien informado. Uno se pregunta si no le ocurre lo que a Maquiavelo: que goza de la verdad no sólo por ser verdad, sino también porque choca al ingenuo. Por esto ha presentado su excelente librito sobre el golpe de estado como manual para potenciales golpistas.

En cierto sentido es una lástima, porque desvía la atención del verdadero interés de la obra y, además, condiciona su argumentación. Aunque no cabe duda de que su lectura será recomendada en los cursos organizados por la CIA u otras entidades interesadas en el rápido y eficaz derrocamiento de gobiernos indeseables, el libro no enseña a los expertos en la materia —que en numerosos países abarcan a la totalidad de los oficiales y jefes del ejército y la policía, de teniente para arriba— demasiado que no sepan y practiquen ya, salvo quizá la aplicación de cierta racionalidad económica a la represión consecutiva al golpe de estado (ver el útil Apéndice A). Los conspiradores con inclinaciones literarias pueden también sacar provecho del análisis conciso, devastador y muy cómico que hace el autor de los distintos tipos de comunicados que anuncian que el país está a punto de ser salvado. Pero, en conjunto, la información de Luttwack, que resulta sensacionalista en Londres o Washington, es moneda corriente en Buenos Aires, Damasco o incluso París, donde la reacción del pueblo ante la aparición de carros blindados por las calles se basa en la experiencia. Los que tienen más probabilidades de efectuar golpes de estado no necesitan, obviamente, que el señor Luttwack les diga cómo hacerlo.

¿Quiénes son éstos? La obra *Coup d'État* deja bien claro —porque su autor conoce el asunto— que pertenecen a un grupo bastante restringido, puesto que los golpes de estado son obra de las fuerzas armadas y nunca, prácticamente, de nadie más. Esto impone limitaciones a la vez políticas y técnicas que nos excluyen a la mayoría de nosotros. A pesar de la insinuación de Luttwack en sentido contrario, los golpes de Estado no son políticamente neutros. Aunque la oficialidad —y por ende los golpes que protagoniza— pueda favorecer ocasionalmente a la izquierda, las circunstancias en que lo hace son relativamente raras, y en modo alguno universales ni siquiera en el mundo subdesarrollado. Por desgracia, el autor no aborda el examen de estas

condiciones. La inclinación general de los oficiales como la de los golpes de estado va en dirección opuesta. El "bonapartismo" tiende normalmente a ser un cambio político hacia el lado conservador o, en el mejor de los casos, una autoafirmación corporativa de las fuerzas armadas como grupo particular de presión económica y profesional dentro del *status quo*.

Los regímenes surgidos de revoluciones sociales, vivamente conscientes de ello desde los tiempos de Napoleón I, han sido siempre y por esta razón (por lo menos hasta Mao Tse-Tung) los más firmes partidarios de las revoluciones hechas por civiles y de la supremacía civil en la política; hasta el punto de sacrificar el gran valor publicitario que poseen los generales con una brillante hoja de servicios, del cual han ofrecido durante mucho tiempo buenos testimonios las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y otras partes. El papel ideal del ejército en las revoluciones sociales clásicas es negativo: debería, en el momento crucial, negarse a obedecer al viejo régimen y después, preferiblemente, disolverse. La izquierda que deposita su confianza en militares progresistas (como en Cuba en los días del joven Batista y en Brasil hasta 1964) ha tenido más desencantos que lo contrario. Incluso los ejércitos genuinamente rojos son tradicionalmente vistos con reservas. Cuando los regímenes revolucionarios han necesitado generales, han preferido en el pasado vestir de uniforme a sus dirigentes políticos civiles.

La limitación técnica que pesa sobre los organizadores de golpes consiste en que hay poca gente que ocupa la posición apropiada para subvertir al necesario grupo de oficiales. (Los suboficiales son menos prometedores y la subversión de la tropa no produce golpes de estado, sino revoluciones). Prácticamente los únicos civiles que pueden llevarlo a cabo están ya en el gobierno, sea en el del propio país, en el de alguna potencia extranjera dominante o influyente o en el de alguna vasta organización internacional que puede desempeñar un papel análogo en relación con un estado pobre y atrasado. Esta clase de gente puede organizar un golpe de estado de manera relativamente sencilla y con bastante eficacia, y tal vez por esta razón dicho proceso carece del interés necesario para provocar la atención del señor Luttwack, aunque sea el que de hecho haya dado lugar a mayor número de golpes de estado. También ofrece, por supuesto, escasas perspectivas para el golpista autóctono y hecho con su propio esfuerzo, a menos que antes haya llegado hasta la cumbre en la vida política de su país.

Cualquier otro que haga la intencionalidad debe tener —como muestra convincentemente el autor— lazos tan potentes de solidaridad con sus potenciales reclutas que pueda confiar en su discreción aun cuando se nieguen a unirse a él. La mejor manera de establecer tales lazos con ellos es: a) ser un oficial o jefe, y b) comparir con los restantes potenciales conspiradores algún fuerte lazo emotivo, como la pertenencia a la misma

familia, tribu, secta (generalmente una secta minoritaria), hermandad ritual, etc., o la camaradería de un regimiento, una academia militar, un club o incluso una ideología. Naturalmente, en países con una larga tradición golpista, todos los oficiales considerarán potencialmente factibles cualesquiera planes de golpes de estado y, por consiguiente, vacilarán en revelar el secreto de los mismos. En aquellos casos, como en el clásico pronunciamiento ibérico, en que se ha impuesto la tácita convención según la cual los del bando perdedor no han de ser penalizados con demasiada severidad (al fin y al cabo, pueden estar en el bando vencedor cualquier día), los riesgos que supone el comprometerse en una aventura incierta disminuyen.

Con todo, el número de los que, en cualquier país, pueden abordar la preparación de un golpe con alguna probabilidad de éxito es casi tan exiguo como el de los que pueden convertirse en importantes banqueros. El resto de los mortales es mejor que nos dediquemos a otros tipos de actividad política.

Pero si cabe desestimar *Coup d'État* como manual para conspiración, en cambio podemos apreciarlo como contribución al estudio de la estructura del poder político. Un golpe de estado es un juego con tres jugadores (omitimos la potencia extranjera dominadora o la corporación que pueden poseer un efectivo derecho de veto o los triunfos de la baraja). Estos son las fuerzas armadas que pueden llevarlo a cabo, los políticos y burócratas cuya disposición a aceptarlo lo hace viable y las fuerzas políticas, pertenezcan o no a la esfera oficial, que pueden contenerlo o derrotarlo. *Porque el éxito de un golpe de estado depende esencialmente de la pasividad del aparato de estado existente y del pueblo. Si uno de ellos, o ambos, resiste, puede aún triunfar, pero no ya como golpe de estado.* El régimen de Franco fracasó como *putsch* militar, pero ganó después de una guerra civil. Luttwack tiene algunas cosas sumamente interesantes que decir acerca cada uno de esos tres agentes.

Donde mejor se desenvuelve es en el medio de los militares profesionales, miembros de ese curioso mundo civil y que funciona de maneras tan diferentes. El militar no profesional, el soldado del reemplazo o el oficial provisional, así como el policía en la mayoría de los casos, por muy fuertemente armado que esté, tiende a reaccionar de manera mucho más similar a la de los civiles a cuyo mundo se reintegrará o entre los cuales desarrolla su acción. Los ejércitos profesionales, que viven separados del resto de la sociedad por una vida consistente —en tiempo de paz— en el porte de una indumentaria caprichosa, en instrucción y prácticas, en juegos y aburrimientos, que están organizados bajo el supuesto de que sus miembros a todos los niveles son bastante estúpidos y siempre superfluos, y que están cohesionados por los valores, cada vez más anómalos, de la bravura, el honor y el desprecio y la suspicacia hacia los civiles, casi por definición tienden a la excéntrica ideología.

Como justamente nos recuerda el señor Luttwack, las actitudes políticas de los cuerpos de oficiales son a menudo muy distintas de las de sus mandos civiles; generalmente son más reaccionarias y más románticas. Además, no están preparados ni acostumbrados a afrontar situaciones fuera de lo normal, y consecuentemente tienden a asimilarlas a otras que les sean habituales. Como el autor no deja de notar, uno de los mecanismos más adecuados para zanjar situaciones inhabituales consiste en verlas como un ejemplo más de los líos que los políticos siempre andan armando. La situación de los militares profesionales es realmente

paradójica: combina el poder colectivo con la irrelevancia individual. Después de treinta y cinco años, Alemania no se ha recuperado totalmente de la marcha de unos pocos centenares de científicos del país hacia laboratorios y universidades extranjeros. En cambio, una y otra vez, los ejércitos han visto aumentar prácticamente su eficacia mediante la emigración masiva, la expulsión u otras formas de eliminación de sus oficiales y jefes más veteranos, hasta el punto en que uno siente la tentación de creer que pocas guerras pueden ganarse a menos de "purgar" antes a los mandos militares. Pero el poder político de los científicos es insignificante, mientras que, en circunstancias oportunas, media docena de coroneles pueden echar abajo un gobierno.

De las burocracias se ha escrito más, y la mayoría de nosotros tenemos experiencias más constantes de ellas. Por esto las observaciones de Luttwack a este respecto producen más bien el placer de lo reconocido que el de lo descubierto. Sin embargo, vale la pena recordar dos de los temas que trata. El primero es que los únicos métodos jamás descubiertos para controlar la tendencia parkinsoniana de las burocracias, ya sean públicas o privadas, a crecer hasta el infinito, son también burocráticos. Uno de estos métodos consiste en establecer otro departamento "que satisfice sus instintos oponiéndose al crecimiento de todas las restantes organizaciones burocráticas", papel que suele desempeñar la burocracia financiera; otro confía en que cada departamento constructor de imperio haga todo lo posible por mantener en jaque a sus posibles rivales.

La segunda observación es la de que *las instituciones son instituciones esencialmente hobbesianas, de las que no cabe confiar que defiendan los poderes existentes en cuanto atisban la probable victoria de un nuevo poder.* Esto vale tanto para la policía como para todos los restantes componentes del aparato estatal, aunque con algunas matizaciones. Sin embargo, Luttwack no es capaz de advertir que esto no los hace políticamente neutrales. Ni el ejército ni la policía opusieron ninguna resistencia al derrocamiento del fascismo en Italia, pero, como demuestran acontecimientos recientes en este país, la persistencia del aparato de la era fascista hace casi imposible la solución de ciertos problemas fundamentales de la Italia postfascista. Las observaciones de Marx según las cuales las revoluciones no pueden simplemente "tomar posesión de la maquinaria estatal tal como existe y usarla para sus propios fines" por muchas ganas que tenga de ser poseída, tienen aún mayor sentido hoy que en 1872.

Por último, los comentarios de Luttwack sobre las organizaciones y movimientos políticos son originales e instructivos. Esencialmente, dice, debemos distinguir entre movimientos preparados para la acción real y movimientos de cara a la acción simbólica, como la organización del voto, el ritual de la negociación institucionalizada o el conflicto político verbal. Confrontado con un golpe de estado, el partido laborista británico, con toda seguridad, no haría nada, y los sindicatos británicos ("Trade Union Congress"), casi con toda seguridad, tampoco; la Unión Nacional de Estudiantes tal vez saliera a la calle, aunque sin ningún resultado. En cambio, no sería de esperar que la principal federación sindical italiana, ligada a un partido comunista, con una larga tradición de huelgas políticas y —más importante aún— de liberación del fascismo a través de la acción directa de masas, se quedara impassible. Tampoco podría esperarse de los partidos insurreccionales, si bien es cierto que organizaciones

en otros tiempos insurreccionales se han convertido en puras máquinarias para la distribución de favores y empleos o, como es el caso de algunos partidos comunistas, han dejado que prolongados periodos de estabilidad política atrofiaran su capacidad para una acción rápida. Además, los partidos insurreccionales reúnen a la vez las desventajas y las ventajas de la centralización: una vez decapitados, pierden drásticamente y con suma rapidez su eficacia.

En lo que respecta al caso particular de los golpes de estado, basta con la distinción entre los movimientos políticos que actúan y los que no lo hacen. Porque, en los casos más favorables, un golpe de estado puede ser derrotado por cualquier signo de resistencia organizada que inmediatamente revela las debilidades de los que buscan el poder, y que puede también dar tiempo al resto del aparato civil y militar para decidir que no hay motivo para cambiar de bando. En casos mucho menos favorables, se puede todavía movilizar una resistencia efectiva frente a un nuevo régimen débil, inseguro y de orígenes irregulares. Pero el interés de las observaciones de Luttwack va mucho más lejos. Vivimos una época en que múltiples formas de acción polí-

tica directa cobran de nuevo significación en los países desarrollados. En estos países, tanto las doctrinas políticas oficiales como los conocimientos prácticos de la gente en cuestiones públicas excluyen el ámbito de lo extralegal. Los viejos han olvidado que los gobiernos pueden ser derrocados, o han abandonado la perspectiva de una tal posibilidad; los jóvenes tan sólo creen que pueden hacerlo, aunque no tienen la menor idea de cómo proceder. En circunstancias así, cualquier obra que examine de modo realista la toma del poder como operación resulta particularmente útil.

El librito de Luttwack ha de ser, por tanto, de enorme utilidad para poner al día la educación política de gente de todas edades. Los estudiosos de temas internacionales, y especialmente del Medio Oriente, sobre el cual el autor parece saber mucho, apreciarán también su excelente información. Es una obra que se lee con gusto, tanto por su estilo inexpresivo como, sobre todo, porque demuestra que los grandes problemas pueden ser adecuadamente tratados en libros breves y siempre que el escritor use palabras para expresar pensamientos y no sucedáneos de éstos. ■

viene de la pág. 39

El pablismo y la burocracia sindical

interno un embrión de la gran democracia social del porvenir, se sobreentiende también que en sus normas, en lo que sea posible y compatible dentro del sistema de economía capitalista en que nos desenvolvemos, debe imperar ya el concepto de la igualdad social. Es decir, la distribución lógica y humana del socorro debe hacerse a base, no de la jerarquía que en la organización ocupen los socorridos, sino con arreglo a sus necesidades familiares. En este principio se basan precisamente los organismos de socorro a los presos de carácter revolucionario.

Esto pone una vez más al descubierto el concepto gregario que de la gran masa de obreros afiliados tienen los dirigentes reformistas, los burócratas sindicales y políticos. A través de la gran independencia con que actúan respecto a la clase trabajadora en general, han llegado a creerse y constituirse en casta superior, con intereses independientes y hasta con "necesidades" especiales. ■

Notas:

- (1) *Los hombres de la dictadura*, por Joaquín Maurín (Editorial Cenit).
- (2) Hablamos, naturalmente, sólo del pasado, y no nos referimos al movimiento progresivo que comienza a manifestarse principalmente entre las juventudes socialistas, en las que se evidencia ya un afán de superación teórica; pero para ello se ven obligados a recurrir a Lenin, y no a Pablo Iglesias.
- (3) *Nosotros los marxistas*, por Ramos Oliveira, págs. 163, 165 y 166.
- (4) Obra citada, pág. 179.
- (5) Los cobradores, desde el comienzo del movimiento sindical, han asumido un gran papel. Ya en 1896, refiriéndose a Inglaterra, decía los Webb: "Los cobradores empleados por ciertos sindicatos para ir de casa en casa a cobrar las cuotas de los afiliados, están retribuidos con un tanto por ciento de la cobranza. Aunque no son estrictamente funcionarios asalariados, sirven de agentes de reclutamiento y también, generalmente, de intermediarios entre los miembros y el Comité para las quejas, reclamaciones y la circulación de informaciones". (*History of Trade Unionism*, pág. 453).
- (6) "Convocatoria y orden del día del XII Congreso ordinario del Partido Socialista Español".
- (7) En el capítulo siguiente damos algunos datos de los fondos de las principales sociedades en 1933 ó 1934.
- (8) "Memoria y orden del día del XVII Congreso de la Unión General de Trabajadores".
- (9) *Boletín de la Unión General de Trabajadores*, noviembre 1933.

viene de la pág. 24

II Congreso de CC.OO.

Este fenómeno se ha resentido también en la CONC, donde la corriente "leninista" ha moderado conscientemente sus divergencias con la Confederación. Pero los problemas de fondo siguen existiendo y la mayoría de los militantes obreros del PSUC, más próximos a la corriente llamada "prosoviética" siguen queriendo profundizar la vía abierta tras el Vº Congreso. De ahí que en Federaciones como el Transporte o el Metal, las delegaciones de Catalunya hayan planteado una batalla sindical y política contra el viraje a la derecha. De ahí que la Delegación de Catalunya en el mismo Congreso Confederado vaya a aparecer —aunque más limitadamente— con posiciones propias, recogiendo aspectos de la línea que aprobó el II Congreso de la CONC.

También en Madrid el Congreso de la Unión Provincial de CCOO reflejó una pugna abierta entre la dirección del sindicato, encabezada por Fidel Alonso, y el Comité Provincial del PCE, cuyo secretario general es Simón Sánchez Montero. En Andalucía la contestación desde posiciones de izquierda a la dirección de la COAN es cada vez mayor. Y procesos similares, aunque de menor envergadura, se están produciendo por todas partes.

La batalla no va a terminar en el Congreso de Barcelona. Las resoluciones sancionarán el viraje a la derecha, pero las contradicciones entre la política aprobada y el reforzamiento del sindicato, la persistencia de la ineficacia para combatir el paro y luchar por el salario, van a seguir generando contradicciones y agudizando otras que ya existen en el seno mismo del partido mayoritario.

Proseguir el combate por el cambio de rumbo es el reto que tiene ante sí el amplio abanico de fuerzas que ha confluído en la contestación a las tesis oficiales en este II Congreso. ■

